**Orden del Día de la Segunda Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**5 de marzo del año 2019.**

**1.-** Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.

**2.-** Declaratoria de apertura de la Sesión.

 **3.-** Lectura, Discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la Sesión.

**4.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Sesión anterior.

**5.-** Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.

**6.-** Lectura de Iniciativas de Reforma Constitucional:

 **A.-** Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de disminuir de 21 a 18 años el requisito para ocupar el cargo de Diputada o Diputado Local en Coahuila.

**B.-** Iniciativa de Decreto por el que se propone adicionar un nuevo párrafo cuarto al Artículo 173 de la Constitución Política del Estado, recorriéndose el que actualmente ocupa ese lugar a la quinta posición y haciéndose lo propio con los subsecuentes párrafos, para el efecto de establecer expresamente en dicho ordenamiento, el derecho al ejercicio de la patria potestad, como la prerrogativa original y natural que se crea entre ascendientes y descendientes y que involucra el derecho prioritario e ineludible que tienen los progenitores para decidir sobre la educación, cuidado, custodia, control y formación de sus menores hijos, bajo la premisa fundamental de lograr el desarrollo humano integral de éstos, conforme al interés superior de la niñez, planteado por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

 **C.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación a los requisitos que deben acreditar los integrantes del Consejo de la Judicatura, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

 **7.-** Lectura de Iniciativas de Diputadas y Diputados:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 72, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a fin de establecer los plazos para que se lleven a cabo las comparecencias de los servidores públicos del Estado, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

 **B.-** Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 1° de la Ley para la Protección de las y los Periodistas, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática, en materia de libertad de expresión e información.

**C.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el contenido del párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

 **D.-** Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Atención y Protección a Migrantes y Movilidad Humana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**E.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifican diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Blanca Eppen Canales, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

 **8.-** Lectura de Dictámenes de Reforma Constitucional:

**A.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

 **9.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes y Acuerdos en cartera:

**A.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo al oficio de la Diputada Lizet Sánchez García, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mediante el cual envía una Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

**B.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Dip. Marcelo Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional.

**C.-** Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Económico, presentada por el EjecutivoEstatal.

**D.-** Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con relación a la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mediante la cual se propone armonizar la ley Orgánica del Congreso con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**E.-** Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas, relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21 fracción II; 82; 88 fracción IX; 97 fracciones VI, VII, VIII y 132 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a las Iniciativas presentadas tanto por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario General Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, como por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

**10.-** Proposiciones de Grupos Parlamentarios, Fracción Parlamentaria y Diputadas y Diputados:

 **A.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, “Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, a intensificar las campañas de donación voluntaria de sangre en todo el Estado”.

**De urgente y Obvia Resolución**

 **B.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteado por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con objeto de solicitar al Alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, remueva a la brevedad del cargo a su Director Jurídico, Alain Obed Mendoza, por representar una amenaza hacia la integridad de los periodistas, lo anterior en virtud de las violaciones graves al derecho humano de libertad de expresión que ha cometido”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**C.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a fin de que, a través de las secretarias y dependencias correspondientes, se establezca un programa de regularización a bajo costo, de vehículos de procedencia extranjera que circulan en nuestro Estado y en el resto del País”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**D.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteado por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, Coordinador del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), “Con objeto de que solicite, tanto a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, como al Director del CECYTEC, Francisco Tobías Hernández, que informen a esta Soberanía en torno a la venta indebida que hizo a los alumnos de esa Institución, de libros de texto que previamente el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, había otorgado de manera gratuita a esa población estudiantil, asimismo, explique Tobías Hernández, los motivos y, en su caso, fundamente el cobro de cuotas de inscripción a los alumnos de los planteles de ese organismo, de igual modo, se solicite a la SEFIR y Auditoría Superior del Estado, que informen sobre sus investigaciones en torno a los gastos sin comprobar, efectuados por el CECYTEC en 2017”.

**De urgente y Obvia Resolución**

 **E.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria “General Francisco L. Urquizo”, “Mediante el cual se denuncian claros actos de nepotismo y conflicto de intereses, por parte de algunos regidores del Municipio de San Pedro, Coahuila”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**F.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), “Con objeto de que el pleno acuerde la inmediata remoción del Diputado Juan Antonio García Villa, como Coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura, por su conducta ilegal, contraria a la ética parlamentaria, deshonesta y antidemocrática manifestada durante la discusión del proyecto de dictamen relativo a las cuentas públicas 2017, conductas que quedarán acreditadas con las pruebas que se presenten”.

**De urgente y Obvia Resolución**

 **G.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteado por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con objeto de que este H. Pleno del Congreso exhorte a la Secretaría de Finanzas, para que ajuste y modifique la Ley de Ingresos de 2019 y el Presupuesto de Egresos del mismo año, asimismo, se exhorte a los 38 Municipios del Estado de Coahuila, para que, de igual forma, realicen los ajustes y modificaciones a sus leyes de ingresos y presupuesto de egresos y sean enviados ante las Comisiones de Hacienda y Finanzas, para ser dictaminadas en el ámbito de sus competencias y enviadas a este pleno, para en su caso, avalar las reformas de las leyes de ingresos 2019, lo anterior derivado de la información emanada y publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33, estableciendo montos e incrementos superiores plasmados en las Leyes de Ingresos del Estado y los 38 Municipios ”.

**De urgente y Obvia Resolución**

 **H.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, con del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Para solicitar a la Secretaría de Salud, amplié los Centros de Atención Primaria de Adicción en los Municipios de Sabinas, Múzquiz y Allende, y solicitar una campaña estatal contra las adicciones y el plan de trabajo del Consejo Estatal de Adicciones”.

 **De urgente y Obvia Resolución**

**I.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteado por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, Coordinador del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), “Con objeto de solicitar la intervención directa de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la atención al problema migratorio que, con la llegada de caravanas de migrantes a Coahuila, ha estado a punto de generar crisis, tanto de carácter humanitario, como diplomático, con Estados Unidos, y, en función de sus indagaciones, emitan sus respectivas conclusiones y recomendaciones, a fin de asegurar un trato digno hacia los migrantes que arriban a esta entidad y prevenir cualquier violación en materia de derecho internacional, así mismo, solicitar al Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, dé a conocer a esta Soberanía los pormenores de la política migratoria establecida por la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís”.

**De urgente y Obvia Resolución**

 **J.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, “Con el objeto de hacer un llamado a las autoridades federales, para que reconsideren el mecanismo de apoyo a mujeres en situación de violencia que pretenden emplear y prevalezca la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema, como en años anteriores”.

**De urgente y Obvia Resolución**

 **K.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteado por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Por el cual se solicita a este Pleno, exhorte al Presidente Municipal de Frontera, Florencio Siller Linaje, así como al C. Alain Obed Mendoza Jurídico del Ayuntamiento de esa ciudad, a dar cumplimiento irrestricto de los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado de Coahuila, en sus artículos 7 y 8 , asimismo, explique y otorgue en su caso, ante los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, la justificación que acredite el motivo de sus desafortunadas declaraciones y en su caso, se deslinden o finquen las responsabilidades correspondientes”.

 **L.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Josefina Garza Barrera, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, “Con objeto de exhortar a los 38 Municipios del Estado, la utilización de plantas endémicas en los jardines y áreas verdes de cada municipio, con la finalidad de dar identidad regional a nuestro estado y evitar mantenimientos costosos a dichos lugares”.

**De urgente y Obvia Resolución**

 **M.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteado por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con objeto de que este H. Pleno solicite a la Secretaría de Finanzas, un informe detallado sobre la legalidad del cobro anticipado, con cargo al ejercicio fiscal 2019, de los derechos de control vehicular cobrados en 2018”.

**De urgente y Obvia Resolución**

 **N.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada María Esperanza Chapa García, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, “Con objeto de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, implemente acciones encaminadas a brindar una óptima atención en los establecimientos bancarios a la población de adultos mayores, que cada mes requieren los servicios bancarios para el cobro de sus pensiones”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**Ñ.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteado por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, Coordinador del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), “A fin de que la CONAGUA, la Secretaría de Salud Federal como de Coahuila y el Jefe del Ejecutivo Estatal, tomen las medidas necesarias para poner fin, de una vez por todas, a las evidentes irregularidades bajo la cual opera el CIMARI, ubicado en el Municipio de General Cepeda, causando un lamentable deterioro al medio ambiente y poniendo en grave riesgo la salud de los poblados cercanos a dicho depósito de residuos tóxicos”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**O.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Graciela Fernández Almaraz, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, “Con objeto de hacer un llamado a las autoridades estatales y municipales competentes en materia de seguridad pública y de procuración de justicia, para evitar el robo a casa habitación en poblaciones del Municipio de Matamoros, Coahuila”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**11.-** Agenda Política:

 **A.-** Pronunciamiento planteado por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con motivo de las investigaciones en España y Estados Unidos, que han involucrado a Humberto Moreira en los hechos ya conocidos por todos”.

 **12.-** Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión.

**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11 HORAS, CON 21 MINUTOS DEL DÍA 1 DE MARZO DEL AÑO 2019, DIO INICIO LA SESIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LA LEGISLATURA.

PASADO LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DECLARÓ VÁLIDO LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TRATARAN.

**1.-** SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA.

**2.-** LA PRESIDENCIA LLEVÓ A CABO LA DECLARATORIA DE APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

**3.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MINUTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJEROOO CONSTITUCIONAL, DISPENSÁNDOSE SU LECTURA.

**4.-** LA DIPUTADA ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA DIPUTAOÓN PERMANENTE DIO LECTURA ANTE EL PLENO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR ESE ÓRGANO, DURANTE EL PRIMER PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR DIÓ POR CONCLUIDA LA SESIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS, CON 41 MINUTOS DEL MISMO DÍA, CITANDO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, QUE SE LLEVARÍA A CABO A LAS 10:00 HORAS DEL MARTES 5 DE MARZO DEL AÑO 2019.

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE.**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.****SECRETARIO** | **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA.****SECRETARIO** |

**INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

**RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO**

**5 DE MARZO DE 2019**

**1.-** ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO DANIEL HÉCTOR SALDIVAR OLVERA, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA UNA INICIATIVA POPULAR CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL TRÁMITE DE DICHA INICIATIVA, CONFORME A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**2.-** OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL DA A CONOCER LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:

- LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (PANORAMA NACIONAL 2018).

- DIAGNÓSTICO DE CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN EL TRABAJO DEL CIUDADANO.

- DIAGNOSTICO NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y VIOLENCIA FEMINICIDA EN MÉXICO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**3.-** OFICIO DE LA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAL Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL.

**SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**4.-** OFICIO DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE EL ACUERDO APROBADO POR DICHO CONGRESO, EN EL CUAL SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VOTAR EN CONTRA DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE MODIFICAR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL QUE SE AMPLÍA EL CATÁLOGO DE DELITOS EN LOS QUE LA PRISIÓN PREVENTIVA SE ORDENARÁ POR EL JUEZ DE OFICIO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO “Gral. ANDRÉS S. VIESCA”, del Partido Revolucionario Institucional, CON EL OBJETO DE DISMINUÍR DE 21 A 18 AÑOS, EL REQUISITO PARA OCUPAR EL CARGO DE DIPUTADA O DIPUTADO LOCAL EN COAHUILA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

Las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este H. Pleno del Congreso del Estado, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En el Constituyente de 1857, se afirmó que "Para que el sistema representativo sea la verdadera expresión de la democracia, el sistema electoral debe fundarse en este principio: Todo ciudadano es elector y elegible. Cualquiera restricción a este principio -se dijo- es antidemocrática y absurda".

En el Constituyente de 1917 se planteó nuevamente este argumento, al señalarse la falta de consecuencia que había entre dar al joven de 21 años, el derecho para votar y quitarle el derecho de ser votado. Al efecto, en la sesión celebrada el lunes 8 de enero de 1917, el Diputado Francisco J. Mújica habló en contra del requisito de que para ser diputado se requiriese ser mayor de 25 años de edad. Sus palabras fueron las siguientes: "La juventud, señores, va siempre en pos de un ideal; las cámaras populares no pueden representar más que los ideales del pueblo; ésa es su esencia misma".

No debemos soslayar que a partir de 1917 nuestro sistema político se ha venido perfeccionando. Sus postulados básicos: la efectividad del sufragio y la no reelección han inspirado la revisión sistemática de una legislación electoral que juzgamos avanzada pero que consideramos perfectible.

Con perseverancia se ha venido ampliando la participación cívica: se confirió el voto a la mujer y a la juventud, enriqueciéndose la vida política con su presencia digna, entusiasta y renovadora; se registra un acrecentado interés en los negocios públicos, se ha forjado una sólida conciencia colectiva para vigilar la pureza de la expresión de la voluntad popular.

Este avance político ha sido medio para que Coahuila continúe avanzando hacia la consecución de sus fines. Mediante el afianzamiento de los métodos democráticos, se está alcanzando una estabilidad política, que nos está permitiendo consolidar la democracia y abre amplias posibilidades a la expresión legítima de la disidencia ideológica.

Es necesario llevar adelante la transformación social, para abrir amplios cauces al desenvolvimiento individual y colectivo, en un clima de confianza, de respeto a la ley y de concordia.

Sabemos que la estabilidad política, indispensable para la eficacia de nuestras instituciones, no puede resultar del simple crecimiento económico, sino que debe sustentarse en la justicia social y en el incremento real de la participación política de los ciudadanos.

La democracia sólo se concibe cuando existe una efectiva integración del pueblo en el ejercicio del poder y para que se mantenga viva la conciencia de la corresponsabilidad en la dirección y en la acción, para que cada ciudadano, grupo o partido sepa defender sus derechos y asumir sus obligaciones.

Durante el pasado proceso electoral, el Partido Revolucionario Institucional consideró como uno de los ejes fundamentales de su plataforma política, la inclusión de las y los jóvenes. De ahí que hemos considerado que una tercera parte de nuestros candidatos deberán ser jóvenes.

Es por ello, que desde los distintos sectores que integran nuestro partido han surgido voces que proponen disminuir la edad requerida para ocupar el cargo de Diputadas y Diputados locales, de 21 a 18 años. Son estos sectores del Revolucionario Institucional, quienes nos entregaron un conjunto de documentos que hoy se ven reflejados en el presente instrumento legislativo.

Es de esta manera que resultan necesarias una serie de reformas para renovar instituciones y aportar mejores instrumentos de progreso; por eso creemos prudente proponer reformas a nuestra Constitución estatal, para acelerar el desarrollo político que hasta ahora se ha venido dando.

Desarrollar el sistema político implica una continua revisión de todos los elementos que lo forman, a fin de incrementar su racionalidad y capacidad.

Fundamenta a nuestras instituciones una filosofía democrática social y el proceso cívico debe permitir, en consecuencia, una cada vez mayor y más calificada participación de los ciudadanos en la orientación de las actividades gubernamentales, propiciar en todo momento una adecuada y eficiente representación popular, incorporar a las nuevas generaciones al ejercicio del poder público, facilitar la articulación de los intereses minoritarios, brindarles conductos para su expresión legítima y alcanzar resultados que correspondan efectivamente a las aspiraciones de las mayorías.

La evolución de nuestro marco jurídico hace de los jóvenes mayores de 18 años sujetos de numerosos derechos y obligaciones y por tanto debe concedérseles también el derecho a participar en la conformación de las grandes decisiones que deban tomarse en Coahuila. Propiciemos que se abran las puertas a las nuevas generaciones para su mayor participación en el ejercicio del poder político.

Un análisis de las condiciones de existencia de la juventud contemporánea, de la información que posee, de su desempeño en los diversos aspectos de la vida social, en los sindicatos, en las asociaciones rurales, en las comunidades indígenas, en los grupos culturales y en los partidos políticos, permite concluir que a los 18 años los ciudadanos han adquirido ya experiencia en el manejo de intereses que trascienden los de la vida familiar.

Ya desde el Constituyente de 1917 hubo quienes se pronunciaron por la elegibilidad de jóvenes para ocupar cargos de elección popular, reconociendo el destacado papel que ellos ocuparon en el desarrollo de la conflagración armada que dio origen a nuestras actuales instituciones sociales.

Hoy está en posibilidad de ser aprobada esta iniciativa por el Poder Legislativo y asociar a las nuevas generaciones a la representación en el Congreso del Estado. Para ello se propone la modificación correspondiente al artículo 36 de laConstituciónlocal, a fin de reducir la edad para acceder al cargo de Diputadas y Diputados.

La posibilidad de compartir la responsabilidad del Poder Legislativo a más temprana edad, permitirá introducir en el estudio y debate de las normas de la que nos rigen, el pensamiento y la inquietud de nuestra juventud acrecentándose con ello su papel histórico.

Para los partidos políticos, esta reforma constitucional, de aprobarse, se traducirá en un importante estímulo para multiplicar la militancia de los jóvenes y contribuirán a fortalecer más aún sus cuadros y plataformas con las aptitudes, el optimismo y el sentido crítico que despliegan.

Por otro lado, reducir la edad mínima requerida para ingresar al Poder Legislativo del estado de Coahuila de Zaragoza, permitirá no sólo una mejor representación política, sino una más adecuada representación social.

Es el nuestro un Estado de población joven, más de un 40 por ciento es menor de 18 años, cerca de un 50 por ciento es menor de 25 años, poco más del 60 por ciento de la población del Estado no excede los 30 años. Y casi 110 mil coahuilenses se encuentran entre los 18 y 20 años.

Ampliar a los jóvenes la oportunidad de servir, es ratificar nuestra confianza en ellos como una realidad actuante. Su aportación constructiva y creadora resulta indispensable para labrar el presente y el futuro de Coahuila.

Es también manifestación de nuestro compromiso de estimular mediante procedimientos democráticos el relevo de las generaciones en los puestos de mando de la sociedad, tanto en los campos de la cultura, la ciencia y de la economía, así como de la política.

Nuestro sistema debe demostrar que cualquier joven pueda ser capaz, con esfuerzo, con vocación, con preparación y limpieza de miras de coadyuvar a la transformación del Estado.

La reforma propuesta, complementará una mejor instrumentación de nuestra vida democrática. Corresponden al mismo propósito de ampliar la participación de los ciudadanos en la dirección del Estado e implican, desde luego, mayores responsabilidades para nuestro gobierno, para las nuevas generaciones de ciudadanos y para los partidos políticos.

El deseo de progreso que se manifiesta en todos los ámbitos del país, permite predecir que el perfeccionamiento de las normas sustentará un avance significativo en el mejoramiento de nuestra sociedad.

De aprobarse la iniciativa no traerá sólo como consecuencia una modificación cuantitativa en relación con las oportunidades que se brindan a la juventud de ser electa para cargos de elección popular, sino fundamentalmente se trata de una modificación cualitativa que propiciará la incorporación al cuerpo legislativo, de sus ideas, sus inquietudes, y su ánimo honesto de renovación, crítica y superación.

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como por los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma la fracción II del Artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 36.** ….

**I.** ….

**II.** Tener 18 años cumplidos el día de la elección.

**III.** a **IV. …..**

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de enero de 2019**

|  |
| --- |
| **DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,** **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE.**  |  | **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL**

**ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”; EN EJERCICIO DE LA FACULTAD LEGISLATIVA QUE CONCEDE EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN I, 65 Y 67 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN IV, 152 FRACCIÓN I, 159 Y 160 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE PROPONE ADICIONAR UN NUEVO PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 173 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RECORRIÉNDOSE EL QUE ACTUALMENTE OCUPA ESE LUGAR A LA QUINTA POSICIÓN, Y HACIÉNDOSE LO PROPIO CON LOS SUBSECUENTES PÁRRAFOS, PARA EL EFECTO DE ESTABLECER EXPRESAMENTE EN DICHO ORDENAMIENTO, EL DERECHO AL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, COMO LA PRERROGATIVA ORIGINAL Y NATURAL QUE SE CREA ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES, Y QUE INVOLUCRA EL DERECHO PRIORITARIO E INELUDIBLE QUE TIENEN LOS PROGENITORES PARA DECIDIR SOBRE LA EDUCACIÓN, CUIDADO, CUSTODIA, CONTROL Y FORMACIÓN DE SUS MENORES HIJOS, BAJO LA PREMISA FUNDAMENTAL DE LOGRAR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE ÉSTOS, CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Rafael de Piña de Vara en su Diccionario de Derecho, de Editorial Porrúa, define la Patria Potestad como el conjunto de las facultades y también deberes conferidos a quienes las ejercen, para la debida protección de los menores no emancipados en cuanto se refiere a su persona y bienes.

Conforme a lo anterior, la Patria Potestad es considerada como el conglomerado de derechos y obligaciones que la ley les otorga a los progenitores sobre sus hijos, y su objetivo primordial es su sostenimiento, formación y su educación, dado el lazo natural de filiación que les une conforme al hecho jurídico de la procreación que les hace mantener vínculos constantes entre padre o la madre y el hijo, lo cual constituye un estado jurídico con múltiples consecuencias que se traducen en derechos, obligaciones o posibles sanciones en que se pudiera incurrir.

En ese sentido, y considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo, se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

Dado lo expuesto, y convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, dicha institución debe de recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, de ahí, que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Considerando que los niños y niñas deben de estar plenamente preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados en el espíritu de los ideales de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, tal y como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, al afirmarse que: "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento", y por tal motivo, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben de tener una consideración primordial a que se atenderá siempre el interés superior de la niñez.

Por tal motivo, el estado y sus órganos de gobierno, se encuentran comprometidos para asegurar a los menores la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas para el correcto ejercicio de la Patria Potestad.

Conforme a lo anterior, el estado respetará invariablemente las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres conforme a la Patria Potestad que les corresponde, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, en consonancia con la evolución de sus facultades, comprometiéndose a respetar el derecho del niño o la niña a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Por tal motivo, se velará por que los niños y niñas no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes lo determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, respetándose ante todo los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

En ese sentido, el estado y sus órganos pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza, educación y formación, así como el desarrollo de los menores, y su preocupación fundamental será el interés superior de éstos.

Para los efectos de garantizar y promover los derechos que se derivan de la Patria Potestad, el estado prestará la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza, educación y formación de los menores y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de ellos.

Conforme a lo antes expuesto, es a los padres u otras personas encargadas de un menor a quienes les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo armonioso físico y mental, y el estado y sus órganos con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables de un menor a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo expresamente dispuesto en la Tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro denominado “**DERECHO A LA VIDA PRIVADA FAMILIAR. AUTONOMÍA DE LOS PADRES PARA TOMAR DECISIONES SOBRE SUS HIJOS MENORES DE EDAD”, pronunciada dentro del** Amparo en Revisión 1049/2017 que a la letra dice:

“El derecho a la vida privada familiar comporta una garantía frente al Estado y a los terceros para que no puedan intervenir injustificadamente en las decisiones que sólo corresponden al núcleo familiar; entre estas facultades está el derecho de los padres a tomar todas las decisiones concernientes sobre sus hijos, como las relativas a su cuidado, custodia y control. En este sentido, la protección de la familia frente a intrusiones del Estado descansa sobre el reconocimiento de que son los padres los más aptos para tomar decisiones sobre sus hijos, lo cual, se basa en la presunción de que los padres actúan siempre buscando el mejor interés de sus hijos, es decir, los padres son quienes tienen un mayor afecto por ellos; conocen mejor sus intereses y deseos, debido a su proximidad; y, por tanto, generalmente pueden sopesar de mejor manera los intereses en conflicto y tomar la mejor decisión sobre sus hijos. Así, en la medida en la que se alineen con los intereses del menor, existe un amplio espectro de decisiones que los padres toman autónomamente respecto a sus hijos que se encuentra protegido prima facie por el derecho a la privacidad familiar”.

Por lo anterior, es que resulta necesario establecer expresamente en la Ley Fundamental de nuestro Estado, que el ejercicio de la Patria Potestad es aquel derecho primordial y natural que se origina entre ascendientes y descendientes, para que aquellos sean los que tengan la facultad de decidir sobre la educación, cuidado, custodia, control y formación de sus hijos, y que dicha autoridad no podrá ser menoscabada, limitada ni suspendida sino mediante un mandamiento judicial, decretada fundadamente por un Juez, con conocimiento de causa y después de que los involucrados puedan ser oídos y vencidos en juicio.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.- SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 173, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RECORRIÉNDOSE EL QUE ACTUALMENTE OCUPA ESE LUGAR A LA QUINTA POSICIÓN, Y HACIÉNDOSE LO PROPIO CON LOS SUBSECUENTES PÁRRAFOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 173. …**

**…**

**…**

**La Patria Potestad es el conjunto de derechos que la ley le reconoce a los progenitores sobre sus hijos, para facilitarles a aquellos el cumplimiento de sus deberes que su calidad les impone, de ahí, que les corresponda a ellos de forma original y natural el de velar por la educación, cuidado, custodia, control y formación de sus menores hijos, para lograr su desarrollo humano integral bajo la premisa fundamental de la tutela del interés superior de la niñez, por lo tanto, dicha autoridad no podrá ser menoscabada, limitada ni suspendida sino mediante un mandamiento judicial, decretada fundadamente por un Juez, con conocimiento de causa y después de que los involucrados puedan ser oídos y vencidos en juicio.**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**TRANSITORIOS**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ATENTAMENTE,**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 05 de Marzo de 2019.**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**DIP. MARCELO TORRES COFIÑO**

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. BLANCA EPPEN CANALES**

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**

 **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), PARA REFORMAR EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

Honorable Asamblea Legislativa:

Con fundamento en el artículo 196, fracción I, de la Constitución Política del Estado, la suscrita, DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), respetuosamente comparezco para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos de establecer que los Consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo quedarán exceptuados de cumplir con el requisito señalado en la fracción VI, del artículo 138 de la propia Constitución.

Sustento mi Iniciativa al tenor de la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

De conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 143 de la Constitución Local, el Consejo de la Judicatura se integra con seis Consejeros, entre estos, uno designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y otro designado por el Congreso del Estado.

Así las cosas, el titular del Ejecutivo Estatal designó al Lic. Román Alberto Cepeda González para integrar el Consejo de la Judicatura. En el caso del Congreso del Estado, el Pleno designó al Diputado Juan Antonio García Villa.

El tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución, textualmente señala: “Los consejeros deberán reunir los requisitos para ser magistrados y durarán tres años en su cargo, salvo su Presidente. Por cada uno de los consejeros, habrá un suplente.”

La redacción actual de este tercer párrafo debe ser reformada, pues al señalar que “los consejeros deberán reunir los requisitos para ser magistrados”, sin hacer ningún tipo de excepción, se entiende que dichos requisitos deberán ser acreditados por todos los consejeros, incluidos los designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto es así, pues resulta aplicable el principio general de derecho que reza "donde la ley no distingue, no le es dable distinguir al juzgador".

El artículo 138 de la Constitución establece los requisitos para ser magistrado y, su fracción VI señala: (y cito)

“VI. No haber ocupado el cargo de Secretario del Ramo o su equivalente, en la Administración Pública Estatal, de Fiscal General del Estado, de Diputado local, de Presidente Municipal o alguno de los cargos a que se refiere el artículo 95, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el año previo al día de su nombramiento.”

Es evidente que dicho requisito no se cumple en los consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues el Lic. Román Alberto Cepeda González es Secretario del Ramo, y el Lic. Juan Antonio García Villa es Diputado Local.

Por lo anterior se propone reformar el tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución, para los efectos de que expresamente se disponga que a los consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo no les será aplicable el requisito establecido en la fracción VI del artículo 138 de la Constitución.

Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta honorable asamblea, a efecto de que se le de el trámite que corresponda, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se reforma el tercer párrafo del artículo 143, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 143.**  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los consejeros deberán reunir los requisitos para ser magistrados y durarán tres años en su cargo, salvo su Presidenta o Presidente. Por cada uno de los consejeros, habrá un suplente. A los consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo no les será aplicable el requisito establecido en la fracción VI del artículo 138 de la Constitución.

**TRANSITORIOS**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 5 de marzo de 2019.

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A FIN DE ESTABLECER LOS PLAZOS PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS COMPARECENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, Y**

**CONSIDERANDO**

Que actualmente, en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, establece lo siguiente:

***“(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)***

***Asimismo, cuando el Pleno o la Permanente acuerden citar a un servidor público con cualquier finalidad, promover las acciones necesarias para que dicha comparecencia se lleve a cabo en el menor plazo posible atendiendo a la urgencia que amerite el hecho que motive la comparecencia.”***

Que al interpretar lo anterior, no quedan claros los tiempos establecidos para las comparecencias de los servidores públicos, ya que carece de plazos específicos, ni quién debiera ser el responsable para que las acciones pertinentes se lleven a cabo.

Que por lo anterior, sometemos ante esta H. Soberanía la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Las y los diputados tienen la facultad de redactar y presentar ante el pleno de los Congresos Estatales iniciativas de ley, extrañamientos y puntos de acuerdo, esta vez nos enfocaremos en este último.

En el Estado de Coahuila, dicha facultad está plasmada en el artículo 179 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, de tal manera, que los Diputados pueden solicitar a comparecer a cualquier servidor público en caso de ser necesario.

Ahora bien, en el caso de que la comparecencia se haga efectiva, por el hecho de que se haya votado a favor por mayoría de las y los diputados presentes en la sesión ordinaria o permanente, según sea el caso, la ley no especifica el plazo en que el servidor público pueda dar cuentas ante el pleno o comisión, ya que solo establece que las acciones para que se lleven a cabo las comparecencias deben ser en el menor plazo posible, interpretándose como un vacío jurídico.

Dada la importancia del tema en comento, en 2012, la Cámara de Diputados, por medio de la *Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis*, expidió el documento titulado: Regulación Constitucional de la Comparecencia de Todos los Servidores Públicos, donde en su resumen ejecutivo, expone lo siguiente:

***“La presentación de servidores públicos y altos funcionarios del Gobierno convocados por el Congreso para rendir informes sobre un rubro en general o un tema en específico se desarrolla a través de la figura de la comparecencia.***

***Al respecto los legisladores de diversas Legislaturas han procurado ir fortaleciendo tal mecanismo coadyuvante de su función de control, a través de la incorporación de nuevos servidores que tengan la obligación por mandato constitucional de comparecer, sin embargo, también se observa la pretensión a través de sus propuestas de implementar procedimientos detallados para el desarrollo de las comparecencias, de establecer nuevas disposiciones que faciliten el fincamiento de responsabilidades o por el contrario de eliminar la obligación para los Secretarios de despacho de comparecer.”***

Todo servidor público debe ser requerido a comparecer, no importa que poder o a que orden de gobierno pertenezca, por ello es conveniente establecer los plazos límites para tal efecto, y la forma es precisamente fortalecer los mecanismos coadyuvantes de las funciones de control, de esta manera, se abrirá un abanico de conceptos, como lo son de transparencia y rendición de cuentas, dos temas por demás importantes. Es así, que volviendo al informe ya citado, menciona:

***“Dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas, destacan las funciones que desarrollan los Parlamentos o Congresos, llamadas de control. Para ejercer su función de control, los Parlamentos cuentan con diversas figuras o mecanismos y una de ellas es la figura de la comparecencia, a través de la cual, éste le exige al Gobierno manifieste en general el estado actual que guarda la Administración Pública o rinda informes sobre un asunto o rubro en particular, incluyendo en esta dinámica democrática al propio Presidente de la República.***

***Por medio de la comparecencia, el Congreso podrá evaluar el desempeño del Gobierno e incluso contar con elementos para el fincamiento de responsabilidades, en caso de que encuentre inconsistencias en su función ejecutora. Considerando la importancia que tiene este mecanismo al interior del Congreso, el presente trabajo ofrece al lector un panorama general que le permitirá conocer entre otras las inquietudes de los legisladores por coadyuvar en la función de control del Poder Legislativo, en este ámbito.”***

Así mismo, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece en el párrafo segundo del artículo 53 lo siguiente:

***“El Congreso del Estado, podrá solicitar del gobernador la comparecencia de los secretarios del ramo, así como la de quienes dirijan entidades paraestatales, para que informen cuando se discuta una Ley, o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades.”***

Como se puede entender, los entes públicos municipales y secretarios, específicamente de nuestro Estado, deben, por el solo hecho de disponer de recursos públicos y de tomar decisiones que benefician o afectan a los ciudadanos, dar cuenta de las actividades de sus atribuciones en la función pública, y de incurrir en algún acto contrario al encomendado, aplicar la sanción correspondiente para tal efecto. Es por ello que los legisladores del Partido Acción Nacional, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, y comprometidos con la ciudadanía y con su derecho a estar informados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción IV del artículo 21 y la fracción I del artículo 152 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, es que someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ÚNICO.- SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A FIN DE ESTABLECER LOS PLAZOS PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS COMPARECENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

***ARTÍCULO 72.-****Son funciones de la Junta de Gobierno, las siguientes:*

*...*

*VI.*

*…*

*Asimismo, cuando el Pleno o la Permanente acuerden citar a un servidor público con cualquier finalidad, promover las acciones necesarias para que dicha comparecencia se lleve a cabo* ***en un plazo máximo de quince días hábiles, atendiendo a la urgencia que amerite el hecho que la motive.***

***…..***

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

***ATENTAMENTE***

***“POR UNA PATRIA ORDENADA, GENEROSA***

***Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”***

**“GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 05 DE MARZO DE 2019.**

**DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES**

**DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO DIP. BLANCA EPPEN CANALES**

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS PERIODISTAS. PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa por la se reforma el artículo 1º de la Ley de protección para las y los periodistas, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Como hemos sostenido anteriormente en esta Tribuna Legislativa, consideramos que libertad de expresión es un bien jurídico invaluable, que ha sido producto de una larga y fuerte lucha en contra de los sistemas políticos autoritarios y antidemocráticos. Ésta permite en primera instancia que cualquier persona pueda manifestarse, escribir, publicar y promover sus ideas, creencias y concepciones sobre cualquier asunto, siempre y cuando lo haga con respeto a los derechos de los demás.

Por lo que toca a las y los periodistas y profesionales de la comunicación, los derechos antes citados son todavía de mayor importancia, debido a que hacen de ellos su medio de sustento y a la vez reditúan en un bien social para la comunidad pues a través de su investigación y trabajo informan sobre todo tipo de hechos que acontecen en nuestra sociedad.

La labor periodística está protegida en primer lugar por los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º de nuestra constitución local y en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, por ejemplo, los artículos 19 y 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

No obstante, todos estos artículos hacen referencia a la libertad de expresión, manifestación de ideas, libertad de opinión e investigación de manera genérica, sin que se haga un catálogo específico de los derechos que deben ser garantizados para los profesionales de la información.

Por estos motivos, la presente iniciativa de ley, buscar modificar el artículo 1º de la Ley de protección para las y los periodistas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir un cuadro básico de derechos que consideramos deben estar plasmados en ley como lo son la prohibición de la censura previa; el derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, así como el derecho a no ser obligados a revelar sus fuentes de información entre otros, estos últimos si bien se encuentran considerados en legislaciones de otros países, no están plasmados de manera directa ni en la constitución federal ni en la constitución local.

De la misma forma, consideramos que las y los periodistas deben actuar conforme a los principios éticos de su profesión, pues en la actualidad hemos podido constatar que los medios y las redes sociales están en la actualidad plagadas de noticias falsas, tendenciosas y/o amarillistas, por lo que es necesario recuperar la objetividad y la veracidad de la información.

En la misma tesitura, el tratamiento que se da en algunos casos a los datos personales por parte de algunos comunicadores, se mediatiza de forma negativa en perjuicio de las personas, sobre todo en los casos donde no existe un manejo responsable de la información y no hay una investigación más profunda y detallada sobre el asunto.

Justo hace unos días fuimos testigos del suicidio de una adolescente, después de que se difundieran sus fotos privadas en internet, pero luego reproducidas en medios de comunicación y presentados de forma “noticiosa” en algunos periódicos de la entidad. Desgraciadamente, este caso no es único, los medios de comunicación dan fe por ellos mismos de noticias amarillistas y tendenciosas todos los días, por lo que consideramos necesario que la información se difunda bajo estrictos y proporcionales criterios de respeto a la vida privada y la intimidad de los particulares.

De ahí, que la norma jurídica que proponemos inste a los periodistas, comunicadores y otros profesionales de la información a conducirse de forma íntegra promoviendo en todo momento el respeto de la dignidad humana y la vida privada de los particulares.

Finalmente, advertimos que el fin de la ley que hoy proponemos reformar tal como fue pensada, está hecha para proteger a las y los periodistas en situaciones de peligro o agresión, sin embargo, por la materia de la norma jurídica consideramos pertinente que en la misma sean agregados los presentes cambios.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el artículo 1º de la Ley de protección para las y los periodistas para el Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene como objeto establecer Medidas de Prevención y de Protección, que contribuyan a mejorar y garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo.

**Las personas que se dedican al periodismo en la entidad tendrán garantizados los siguientes derechos:**

1. **Libre expresión y manifestación de ideas, el derecho a la información y a la libertad de expresión en el contexto o medio a través del cual realice su trabajo, así como de las tecnologías digitales, quedando prohibida la censura previa.**
2. **El derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información.**

**III. Todos los demás derechos reconocidos por las normas estatales, generales y los tratados internacionales en los que México sea parte.**

**Así mismo los periodistas procurarán informar de forma libre, veraz y objetiva, conduciéndose de forma íntegra atendiendo a la ética profesional y promoviendo en todo momento el respeto de la dignidad humana, la vida privada y los datos personales de los particulares.**

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 05 de marzo de 2018.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Iniciativa que presenta la diputada María Eugenia Cázares, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “ Del Partido Acción Nacional”; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I y 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y con fundamento en los artículos 21 Fracción V Y 152 Fracción I de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que** **se modifica el contenido del párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en base a la siguiente:**

Exposición de motivos

Las leyes deben ser redactas de tal modo que le garanticen a los ciudadanos los derechos y prerrogativas esenciales que consagran la Constitución Federal y los Tratados Internacionales suscritos por México. A la vez, deben contener las atribuciones precisas para las autoridades, en atención a que éstas solo pueden hacer lo que la ley les mandata. En su caso, la discrecionalidad está solo permitida en los casos donde la ley, y con los límites que establece la Constitución General, lo dispone de manera expresa y nunca implícita o sobre entendida. Además de que, como lo establece la Suprema Corte, dichos actos deben cumplir con el principio de debida fundamentación y motivación.

Atendiendo al principio antes señalado, no podemos tener leyes que le permitan a las autoridades “escoger”, entre sí hacer una cosa o no hacerla, pues esto rompe con todos los principios que deben observarse en los actos de autoridad, y, además, le plantea al gobernado una situación de incertidumbre jurídica, y lo sujeta a una discrecionalidad arbitraria e inconstitucional de parte de la administración pública.

Por otra parte, y en relación directa a la presente iniciativa, deseamos destacar los principios que rigen en materia presupuestal en nuestro país, los cuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado y detallado en criterios diversos como los que se enlistan:

Novena Época

Registro: 166422

Instancia: Primera Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Septiembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CXLV/2009

Página: 2712

GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA.

Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal.

Novena Época

Registro: 166421

Instancia: Primera Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Septiembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CXLIV/2009

Página: 2712

GASTO PÚBLICO. PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El citado precepto constitucional prohíbe expresamente efectuar pagos no comprendidos en el presupuesto o determinados en una ley posterior. Así, de la interpretación de dicha norma se advierte que salvaguarda el régimen de gasto público y los principios relacionados con éste, conforme a los cuales los pagos a cargo del Estado únicamente deben realizarse: 1) si están previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, como excepción, establecidos en una ley posterior expedida por el Congreso de la Unión; 2) ciñéndose a un marco normativo presupuestario, generando un control de economicidad referido a la eficiencia, eficacia y economía en la erogación de los recursos públicos; control que puede ser financiero, de legalidad, de obra pública y programático presupuestal; y, 3) de manera eficiente, eficaz, de economía, transparente y honrado.

 Es así que el ejercicio del presupuesto público debe llevarse a cabo cumpliendo los extremos constitucionales a que hacemos mención, sin que puedan las autoridades hacer o realizar acciones distintas o arbitrariamente discrecionales.

La Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece lo siguiente:

***ARTÍCULO 42.-*** *Cuando las asignaciones fijadas en el Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes o inadecuadas para cubrir el servicio a que se destinen, las Dependencias Gubernamentales solicitarán de la Secretaría de Finanzas, las modificaciones correspondientes, presentando al efecto los informes que justifiquen su petición.*

*En los casos en que se considere justificada la modificación, la Secretaría de Finanzas preparará la iniciativa correspondiente para ser sometida por el Ejecutivo a la consideración de la Legislatura del Estado, si aquél lo estima pertinente.*

Disposición que se contrapone con el artículo 22 de la misma ley, que dispone:

***ARTÍCULO 22.-*** *La Secretaría de Finanzas no hará ningún pago que no esté expresamente consignado en el Presupuesto de Egresos, o autorizado por Leyes o Decretos especiales.*

De igual forma, la Constitución local refiere lo que se lee enseguida:

***Artículo 102.*** *No se hará ningún gasto que no esté comprendido en el Presupuesto o haya sido autorizado por el Congreso. La infracción de este artículo hace responsable a la autoridad que ordene el gasto y al servidor público que lo ejecute.*

Es por estas consideraciones que la porción normativa “Si aquel lo estima pertinente”, debe ser derogada del segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el contenido del párrafo segundo del artículo 42 de la** **Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue**:

**ARTÍCULO 42.-** Primer párrafo….

En los casos en que se considere justificada la modificación, la Secretaría de Finanzas preparará la iniciativa correspondiente para ser sometida por el Ejecutivo a la consideración de la Legislatura del Estado.

……

TRANSITORIOS

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

##### ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

## Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 05 de marzo de 2019

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ**

**DIP. MARCELO DE JESUS TORRES CORIÑO DIP. BLANCA EPPEN CANALES**

**DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES**

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA****, QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA DE COAHUILA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**PRESENTE.**

El que suscribe Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, con fundamento en el artículo 59 fracción I; 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito poner a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Atención y Protección a Migrantes y Movilidad Humana para el Estado de Coahuila, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Es para todos sabido que la situación de violencia, pobreza, falta de oportunidades y represión de algunos países del centro y sur del continente han creado un clima propicio para que el fenómeno de la migración se incremente en México. El "sueño americano", que año con año era emprendido principalmente por personas originarias del centro del continente ha sufrido un cambio en los últimos años, puesto que México ha pasado de ser un lugar de tránsito a un lugar de destino de la migración.

Se estima que en 2017 ingresaron por la frontera sur más de 354 mil migrantes con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Recordemos que alrededor de 8 mil migrantes centroamericanos organizados en dos caravanas ingresaron por la frontera con Guatemala en dirección a los Estados Unidos durante el 2018. Esto tuvo como consecuencia el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en la frontera, evidenciando así la nueva estricta política migratoria de nuestro vecino país.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las autoridades migratorias mexicanas de enero a noviembre de 2017 detuvieron a 88,741 personas extranjeras en situación irregular. De las 88,741 personas extranjeras presentadas hasta noviembre de 2017, se destaca que 16,694 fueron niñas, niños y adolescentes, de los cuales 6,800 eran adolescentes no acompañados.

Las políticas migratorias de Estados Unidos han dificultado el paso de migrantes, de tal forma que las personas migrantes encuentran en México un nuevo lugar para la realización de sus aspiraciones, en donde pueden obtener una mejor calidad de vida en comparación con las condiciones experimentadas en su lugar de origen. Coahuila, por su ubicación geográfica y por sus condiciones de desarrollo, al ser un Estado de paso dentro de la ruta del migrante, se ha vuelto un punto importante de recepción de migración.

Muchas de las personas que han salido de sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida hacia nuestro vecino país del norte han decidido quedarse en nuestro Estado. Se suma a lo expuesto, la migración interna que recibe nuestra entidad de personas provenientes de otros Estados de la República Mexicana, quienes en busca de una mejor calidad de vida, emigran para trabajar en las empresas locales.

Es importante mencionar que en palabras de la CNDH *"Las personas en contexto de Migración intentan ser invisibles frente a las autoridades, circunstancia que los obliga a la búsqueda de nuevas rutas, de nuevas opciones de traslado que las hace vulnerables a la violación de sus derechos humanos, y proclives a que se cometan una gran cantidad de delitos en su contra”*.

Asimismo, menciona que el nivel de riesgo en Coahuila para las personas migrantes en tránsito por México a partir de la percepción del personal de albergues y casas de migrantes es percibido como de riesgo alto.

Las personas migrantes se enfrentan a una serie de violaciones a sus derechos humanos, como lo son la negación del acceso a la salud y la educación, las cuales están ligadas a leyes y prácticas discriminatorias. De la misma manera, son objeto de criminalización y violencia, siendo así también personas en situación de vulnerabilidad.

Apenas en diciembre de 2018 México se sumó al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular aprobada en Marruecos, que fortalece aspectos como derechos laborales de los trabajadores migrantes, la mejora de los datos sobre migración como base para elaborar políticas públicas basadas en datos empíricos, salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para los casos de migrantes desaparecidos, entre muchos otros asuntos.

Debemos hacernos a la idea de la migración como un rasgo distintivo del mundo globalizado, y debemos asumir un enfoque de respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes independientemente de su estatus migratorio, pero también promoviendo la seguridad y la prosperidad de nuestras comunidades.

Uno de los compromisos es crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades con su capacidad humana, económica y social, y hacer así que les sea más fácil contribuir al desarrollo sostenible a nivel local, nacional, regional y mundial.

La comunidad migrante no debe estar excluida sino al contrario, debemos buscar políticas públicas y marcos jurídicos que nos permitan integrarlos como miembros plenos de las sociedades.

El pacto firmado por México reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.

Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional.

Es en este contexto que planteamos una legislación real, vanguardista y que retome los compromisos que México tiene a nivel nacional e internacional en materia de migración.

Es de observarse lo dispuesto por la CARTA DE DERECHOS DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES de aplicación y acatamiento obligatorio por todos los Estados partes ratificados como lo es nuestro país, así como la siguiente tesis de nuestro máximo órgano de Control Constitucional y Jurisdiccional:

*Época: Décima Época; Registro: 2015531; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 48, Noviembre de2017, Tomo III; Materia(s): Constitucional; Tesis: XXll.P.A.5 CS (10a.); Página: 2100. PERSONAS INDÍGENAS. LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS Y REFUGIADOS SE EXTIENDE A LOS NACIONALES CON AQUELLA CARACTERÍSTICA, CUANDO SE VEAN FORZADOS A DESPLAZARSE DE SU LUGAR DE ORIGEN A OTRA ENTIDAD FEDERATIVA QUE OFREZCA MEJORES CONDICIONES DE VIDA.*

*De la interpretación de los Artículos 1o., párrafo primero, 2o. y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que todas las personas, incluyendo las indígenas, gozan del derecho al libre tránsito en el territorio nacional, mientras que los diversos 31, numerales 1 y 2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y 7 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, obligan a brindar protección a las personas extranjeras en condición migratoria que salen de sus países para escapar de circunstancias económicas y sociales adversas, lo cual exige no criminalizar su ingreso irregular.*

 *Por su parte, los Artículos 11, 12 y 14 de la Ley de Migración reconocen el derecho de los migrantes a la procuración e impartición de justicia, privilegiando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como el relativo al reconocimiento de su personalidad jurídica. Por tanto, si el Estado Mexicano debe garantizar y proteger los derechos de los migrantes extranjeros y refugiados en su territorio, por mayoría de razón, está vinculado a extender el cumplimiento de esa obligación respecto de los nacionales que se ven forzados a desplazarse de su lugar de origen a otra entidad federativa que ofrezca mejores condiciones de vida, especialmente, cuando éstos sean personas indígenas, máxime si se encuentran en una situación económica precaria.*

Las anteriores tesis y principios del derecho internacional entrañan el respeto irrestricto a la persona humana del migrante, que debe ser revestida de todos los derechos reconocidos por nuestro país, para brindar además de seguridad, un claro marco de actuación de nuestras autoridades.

En síntesis, la migración es un hecho recurrente que ha venido a formar parte de la vida de los coahuilenses. En virtud de tal condición, es común presenciar abusos hacia dicho grupo que por tales circunstancias se encuentra en franca situación de vulnerabilidad, lo que hace apremiante el contar con mecanismos legales que garanticen los derechos mínimos que deben de revestir las personas que han tenido la imperiosa necesidad de dejar su lugar de origen para buscar suerte en otros lugares.

Lo anteriormente expuesto ejemplifica y evidencia por demás la situación que atraviesa nuestra entidad en ese rubro y la necesidad de contar con un marco normativo local que regule la situación de nuestros hermanos migrantes.

Es por los fundamentos y razonamientos antes expuestos, que los Diputados del Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila preocupados por la situación que atraviesan las personas migrantes en el Estado de Coahuila, consideramos preponderante que la entidad cuente con una normativa en ese rubro, misma que garantice un trato digno y humano a todos ellos.

Diversos estados del país han aprobado leyes locales que permitan contribuir a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes coadyuvando con las autoridades federales, como lo son: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

El reto que enfrentamos en materia de migración debe ser urgentemente atendido por nuestra entidad, razón por la cual una regulación estatal brindaría mayor certeza jurídica para emprender dichos objetivos.

**LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA**

**CAPITULO I**

**GENERALIDADES**

**Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en los Municipios y Estado de Coahuila, y tiene por objeto reconocer, promover y respetar los derechos de los migrantes, sin discriminación o distinción alguna por su condición migratoria, raza, origen étnico o social, nacionalidad, idioma, edad, sexo, preferencia, condición sexual o identidad de, género, estado civil, cultura, religión o convicción, opinión política, patrimonio, situación económica o cualquier otra condición que pueda menoscabar el ejercicio de sus derechos, derivados del proceso de movilidad humana.

**Artículo 2.-** La aplicación de las disposiciones de la presente Ley corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a los Ayuntamientos por medio de sus dependencias y entidades administrativas en el ámbito de sus competencias, de conformidad a ésta y otras disposiciones legales aplicables.

**Artículo 3.-** El gobierno del Estado de Coahuila y sus Municipios procurarán, con el apoyo del Gobierno Federal y mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, que todas las personas migrantes y/o en movilidad humana sin importar su estatus, residentes o en tránsito en su territorio, gocen de las garantías individuales y derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados internacionales en la materia de los que México sea parte y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila.

**Artículo 4.-** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

Persona Migrante: a todo individuo que salga, transita o llegue al territorio de una Entidad Federativa o Nación distinta a la de su residencia por cualquier tipo de motivación.

Movilidad Humana: ejercicio del derecho que tiene toda persona a migrar.

Estado: al Estado de Coahuila.

Municipio: a todos los Municipios del Estado de Coahuila.

Municipios Fronterizos: Aquellos municipios cuyo territorio colinda geográficamente con los Estados Unidos de América.

Ley: Ley de Atención y Protección a Migrantes y Movilidad Humana para el Estado de Coahuila

Autoridad migratoria: a las dependencias Estatales o de los Municipios del Estado de Coahuila y de la Federación encargadas de atender los asuntos relativos a las personas migrantes.

Registro Estatal de Migrantes: al registro que el Gobierno del Estado de Coahuila por conducto de las autoridades migratorias lleve sobre las personas migrantes en su territorio.

Consejo: al Consejo Estatal de Atención a Migrantes, que es un grupo colegiado que se encarga de vigilar, promover, respetar, divulgar, diseñar y crear de manera conjunta con las autoridades migratorias las políticas públicas en materia de personas migrantes.

Oficina: Oficina de Atención a Migrantes y en Movilidad Humana.

Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Personas Migrantes del Estado de Coahuila.

**CAPÍTULO II**

**DE LA MOVILIDAD HUMANA**

**Artículo 5.-** La movilidad humana es el ejercicio de derecho humano de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.

**Artículo 6.-** Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su condición migratoria a:

1. Las personas que salen del estado de Coahuila con la intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de su territorio;
2. Las personas mexicanos o extranjeros que lleguen al estado de Coahuila para:
	1. Asentarse en el territorio coahuilense con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;
	2. Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su territorio; y
	3. Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que produjeran catástrofes, buscan protección.

**Artículo 7.-** En el Estado de Coahuila, ninguna persona será objeto de discriminación o exclusión por su condición migratoria. La administración pública garantizará la ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio universal de los derechos humanos.

**CAPITULO II**

**DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES Y EN MOVILIDAD HUMANA**

**Artículo 8.-** Las personas migrantes que se encuentren en el territorio de Coahuila sin importar su situación migratoria gozarán de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila y las leyes que de ellas emanen, así como instrumentos jurídicos internacionales.

Las personas en movilidad humana en la entidad gozarán del respeto irrestricto de sus derechos humanos conforme a los principios de universalidad, respeto, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en general a todos los derechos que enuncia la Carta de los Derechos de los Migrantes Internacionales de las Naciones Unidas y demás tratados internacionales ratificados por México. En ningún momento los derechos mencionados serán interpretados en forma limitativa, debiendo procurar siempre la protección más amplia al a persona de los migrantes en Coahuila de acuerdo al principio pro persona.

**Artículo 9.-** Las personas migrantes y en movilidad humana en el Estado a su vez tienen derecho a:

1. Acceder a programas de desarrollo, proyectos y acciones gubernamentales.
2. A los servicios que presta la Administración Pública Estatal y Municipal.
3. A un trato digno, respetuoso, oportuno y con calidad humana.
4. A los trámites registrales de conformidad a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
5. Al libre tránsito.
6. Al derecho a la asistencia consular.
7. Al respeto a sus costumbres y tradiciones, con las restricciones que la Ley establece.
8. Acceder a los servicios educativos y recibir cualquier tipo de atención médica, prevista por el sector público, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.
9. A la preservación de la unidad familiar.
10. A la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.
11. Se les deberá garantizar la posibilidad de inscribirse en el Registro Estatal de Migrantes.
12. Recibir información respecto de los programas de atención a migrantes y de los requisitos necesarios para ser beneficiarios de los mismos.
13. Recibir los servicios y prestaciones de los programas de atención a migrantes conforme a la normatividad aplicable.
14. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley.
15. Los jueces u oficiales del Registro Civil del Estado de Coahuila no podrán negar a los migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
16. En caso de verse involucrado en un proceso judicial, o al dictársele sentencia condenatoria por la autoridad competente a un migrante, independientemente de su condición migratoria, las autoridades judiciales estarán obligadas a informarle de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de traslado de reos, así como de cualquier otro que pudiera beneficiarlo.
17. Las autoridades estatales y municipales están obligadas a brindar las facilidades y atender los casos de cambios de estado civil, domicilio o lugar de trabajo de extranjeros residentes temporales o permanentes estado de Coahuila, en los términos de la legislación aplicable.
18. Las demás que les reconozcan y confieran las normas jurídicas aplicables.

**CAPÍTULO II**

**DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIGRANTES**

**Artículo 10.-** Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Respetar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila, las leyes y reglamentos estatales y locales que de ella emanan, así como cualquier disposición legal vigente en la entidad.
2. Mostrar la documentación que acredite su identidad, cuando les sea requerida por las autoridades competentes.
3. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones.
4. Mantenerse al margen de cualquier condicionamiento de tipo político partidista en la ejecución de programas de atención al migrante.

**CAPÍTULO IV**

**DEL REGISTRO ESTATAL DE MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA**

**Artículo 11.-** El Registro Estatal de Migrantes y Movilidad Humana estará a cargo de la Oficina de Protección y Atención a Migrantes y personas en Movilidad Humana, será público y tendrá por objeto la inscripción voluntaria de información por parte de los migrantes con respecto a su nombre, procedencia, domicilio en su lugar de origen, y en general, de todos aquellos datos que pudieren servir para su ubicación o la de sus familiares con el objeto de facilitar la reunificación familiar.

En la operación del registro deberá observarse en todo momento lo dispuesto en la legislación federal en materia de Protección de Datos Personales y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila.

**Artículo 12.-** Cualquier autoridad estatal y municipal que otorgue a cualquier persona en movilidad humana algún beneficio de los establecidos en la presente ley, deberá preguntarle si desea ser inscrito en el Registro Estatal de Migrantes, para lo cual deberá contar con los formatos adecuados para realizar dicha inscripción.

**CAPÍTULO V**

**DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA**

**Artículo 13.-** En la generación de las políticas públicas a cargo de la administración pública estatal y municipal se observará como criterio obligatorio el reconocer y promover los derechos establecidos en la presente Ley, así como:

1. Contribuir a resolver las causas que originan la migración interna en el Estado.
2. Prevenir cualquier tipo de violación a los derechos de los migrantes.
3. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre la población migrante y sus comunidades de origen.
4. Fomentar la participación ciudadana, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas en beneficio de la población migrante.
5. Combatir las formas de discriminación hacia la población en movilidad.
6. Impulsar el reconocimiento de la contribución de los migrantes al desarrollo del estado de origen y de destino, así como los valores de la diversidad y la interacción multicultural.
7. Considerar en el Plan Estatal y en el Municipal de Desarrollo, según corresponda, las políticas públicas enfocadas a los distintos flujos migratorios.
8. Generar las condiciones para la reintegración social, laboral, educativa y cultural de los migrantes en retorno, que les permitan realizarse como individuos, y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus familiares y comunidades de origen.
9. Procurar la inserción escolar de menores, jóvenes y adultos migrantes en retorno en la educación básica y media superior.
10. Procurar el acceso a la documentación relativa a la identidad, de la población del Estado que reside en el exterior, así como facilitar y acercar los servicios de registro civil a los migrantes en retorno en el extranjero.
11. Proveer protección y apoyo con documentación, traslado, alimentación, albergue, salud, reinserción educativa, atención psicológica, seguridad y protección a su integridad física a los menores que emigran por causas de pérdidas de sus progenitores, violencia intrafamiliar, violencia en su comunidad, agresión y explotación sexual, de conformidad con lo dispuesto con la legislación federal de la materia.
12. Promover mecanismos de reunificación familiar y, en su caso, procesos de custodia para aquellas personas menores de edad no acompañados, de conformidad con lo dispuesto con la legislación federal de la materia.
13. Prevenir e impedir la explotación laboral y sexual de los migrantes en el Estado, con enfoque especial hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes, menores de edad no acompañados, personas con discapacidad y personas indígenas.
14. Las demás que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes y que establezcan las leyes.

**Artículo 14.-** Las autoridades del Estado de Coahuila tienen el compromiso de combatir los prejuicios y la discriminación, así como asegurar la igualdad de oportunidades para todos mediante la adaptación de las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos.

**Artículo 15.-** La Administración Pública, a través de la Oficina de Atención a Migrantes y Movilidad Humana, fomentará la interacción intercultural como una responsabilidad institucional en el desarrollo de los programas y servicios públicos, entendiendo a interculturalidad, como un principio de política basado en el reconocimiento de la otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del derecho de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes.

**CAPÍTULO VI**

**DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**Artículo 16.-** La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de las dependencias estatales, así como a los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias.

**Artículo 17.-** Corresponde al Ejecutivo Estatal:

1. Aplicar y ejecutar las disposiciones de la presente Ley.
2. Gestionar ante el Gobierno Federal los recursos para la implementación de las políticas públicas para los migrantes.
3. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas públicas para los migrantes.
4. Establecer en el Plan Estatal de Desarrollo, estrategias, objetivos y lineamientos para la formulación de las políticas públicas para los migrantes de origen, en retorno y en tránsito, de acuerdo con los preceptos establecidos en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables los derechos de los migrantes
5. Promover la suscripción de acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, locales, estatales, nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que involucren o beneficien a los coahuilenses en el extranjero.
6. Impulsar el fortalecimiento de las políticas públicas de la Administración Pública Estatal y de los municipios, dirigidas a la población migrante.
7. Fungir como enlace del Gobierno del Estado ante las instancias municipales, otros órdenes de gobierno y de la sociedad civil en materia de migración y movilidad humana.
8. Celebrar convenios de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, municipales, estatales o nacionales, a efecto de contar con el apoyo de traductores en lenguas indígenas y extranjeras.
9. Participar en la formulación y ejecución correspondiente, mediante la presentación de propuestas en relación con sus funciones y objetivos, así como de mecanismos de consulta pública, investigación, generación de estadísticas, concertación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de dicho programa.
10. Recibir y canalizar propuestas, solicitudes, sugerencias e inquietudes de los de instituciones y expertos en la materia de migración, a los organismos públicos, privados y sociales que correspondan.
11. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a la integración intercultural;
12. Coordinarse con las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo acciones humanitarias, de asistencia o de protección a los migrantes.
13. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales le confieran.

**Artículo 18.-** Las dependencias de la Administración Pública Estatal podrán generar políticas públicas para los migrantes en coordinación con la autoridad competente en materia de asistencia a personas migrantes en movilidad humana en el Estado.

**Artículo 19.-** La Administración Pública Estatal en coordinación con los Ayuntamientos deberán estudiar, examinar y resolver los problemas municipales relativos al fenómeno migratorio y vigilar que se ajusten a las disposiciones y acuerdos referentes a las políticas públicas para los migrantes, para lo cual podrán establecer las comisiones de asuntos migratorios de conformidad a la normatividad aplicable.

**Artículo 20.-** Deberá canalizar a las dependencias estatales correspondientes los casos que requieran de atención especializada, sobre todo refiriéndose a menores migrantes no acompañados, quienes deberán:

1. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección;
2. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) resuelva su situación migratoria, y
3. Coadyuvar con las autoridades migratorias en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes no acompañados migrantes.

**CAPÍTULO VII**

**DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ATENCIÓN A LOS MIGRANTES Y PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA**

**Artículo 21.-** Las personas físicas o jurídicas podrán participar solidariamente en la prestación de servicios asistenciales para los migrantes y personas en movilidad humana.

**Artículo 22.-** El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos podrán promover políticas y mecanismos en beneficio de las personas físicas o jurídicas que den apoyo a instituciones u organizaciones, cuyo objeto sea el otorgamiento de ayuda gratuita a los migrantes, mediante el establecimiento de incentivos y facilidades administrativas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 23.-** El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos podrán concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para crear programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio de los programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los términos que señalen las leyes de la materia.

**CAPITULO VIII**

**DEL CONSEJO ESTATAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA**

**Artículo 24.-** EI Consejo Estatal de Atención a Migrantes y Movilidad Humana es un órgano de consulta en la coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de los programas y acciones que se establezcan en materia de protección, atención a migrantes y movilidad humana.

**Artículo 25.-** El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

1. El Titular de la Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá.
2. El Titular de la Secretaria Técnica y de Planeación del Ejecutivo del Estado, que será el Secretario Ejecutivo.
3. Doce vocales que serán:
4. Diputada o Diputado que presida la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado;
5. Un o una representante de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado;
6. Un o una representante de la Secretaría de Salud;
7. Un o una representante de la Secretaría de Educación;
8. Un o una representante de la Dirección General del Registro Civil;
9. Un o una representante de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra personas Migrantes;
10. Un o una representante de la Secretaría de Desarrollo Social;
11. Un o una representante de la Secretaría de Economía y Trabajo;
12. Un o una representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;
13. Un o una representante de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia
14. Un o una representante de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración;
15. Un o una representante de la Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

Cinco vocales provenientes de la sociedad civil, preferentemente de instituciones educativas, de investigación y de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la atención a migrantes o grupos vulnerables seleccionados mediante convocatoria pública expedida por el Titular del Poder Ejecutivo. Por cada miembro propietario se nombrará un mimbro un suplente.

**Artículo 26.-**El Presidente del Consejo podrá invitar a las sesiones del mismo a representantes de instituciones privadas o públicas federales, estatales o municipales, que guarden relación con el objeto del Consejo, quienes participarán solamente con derecho a voz.

**Artículo 27.-** El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

1. Evaluar las acciones, políticas y programas estatales en materia de atención a migrantes y movilidad humana.
2. Organizar y promover, ante las instancias competentes, la realización de estudios referentes al fenómeno migratorio y sobre nuevos esquemas de atención y protección de migrantes.
3. Promover y concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación de la política y programas de interculturalidad, movilidad humana, atención a migrantes y sus familiares, y para comunidades de distinto origen nacional, así como establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas;
4. Las demás que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

**Artículo 28.-** Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de forma honorífica, por lo que no percibirán retribución, emolumentos o compensación económica alguna y durarán en su encargo por un periodo de 3 años, pudiendo reelegirse por un periodo adicional.

**Artículo 29.-** Para que el Consejo pueda sesionar se requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes, con la condición de que se encuentre presente quien presida o, en su caso, el Secretario Ejecutivo, quien presidirá las sesiones en ausencia de aquél.

**Artículo 30.-** Los acuerdos que tome el Consejo serán por mayoría de votos de los presentes en las reuniones respectivas. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

**Artículo 31.-** EI Consejo sesionará, ordinariamente, cada tres meses y podrá celebrar las sesiones extraordinarias que sean necesarias, a juicio de la Presidencia. En ambos casos, la convocatoria se notificará a los integrantes del Consejo, por conducto del Secretario Ejecutivo, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 32.-** El Consejo podrá integrar las comisiones de trabajo que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.

**CAPÍTULO IX**

**DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA**

**Artículo 33.-** La Oficina de Atención a Migrantes y Movilidad Humana se constituye como una oficina adscrita a la Secretaría de Gobierno, cuyo titular deberá resultar de una terna propuesta por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado.

**Artículo 34.-** La Oficina de Atención a Migrantes y Movilidad Humana, contará con el personal necesario para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente ley, de conformidad con lo establecido en el presupuesto correspondiente.

**Artículo 35.-** Para ser titular de la Oficina de Atención a Migrantes se requiere:

1. Ser ciudadano mexicano;
2. No desempeñar durante su función, ninguna otra actividad pública o privada, salvo en los ramos de instrucción o beneficencia pública;
3. No contar con antecedentes penales por la comisión de delito doloso que merezca una pena privativa de libertad; y
4. Contar con experiencia comprobada en temas relacionados con la problemática que enfrentan los migrantes y personas en movilidad humana en el Estado.

**Artículo 36.-** La Oficina de Atención a Migrantes tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

1. Ejecutar las acciones, políticas y programas estatales en materia de atención a migrantes.
2. Aplicar acciones para que el tránsito de los migrantes por el Estado tenga un bajo impacto en lo relativo a seguridad pública, salud y demás aspectos sociales en lo que incide esta problemática.
3. Conducir y operar las acciones de enlace entre las autoridades de los municipios y las autoridades del Estado, así como de las autoridades federales migratorias asentadas en territorio de Coahuila, con el fin de procurar la subsistencia permanente de los derechos humanos y la atención integral de las necesidades básicas de los migrantes.
4. Fortalecer la relación del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y los municipios, sobre todo los municipios fronterizos para el desarrollo de proyectos, esquemas innovadores de participación y corresponsabilidad para la atención y protección de los migrantes.
5. Suscribir convenios con organizaciones de la sociedad civil, dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, para la formulación y ejecución de programas y acciones orientados a atender en forma coordinada a los migrantes.
6. Operar y mantener actualizado el Registro;
7. Difundir y proporcionar los formatos que se utilizarán en el Registro.
8. Diseñar e implementar, conjuntamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los esquemas necesarios que garanticen el acceso inmediato de los migrantes a los servicios y programas de atención operados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, particularmente en los municipios fronterizos.
9. Proponer, promover y participar en programas y campañas sensibilización y de atención a migrantes.
10. Divulgar, por los medios de comunicación masiva a su alcance, información relativa a las acciones, políticas y programas de atención a migrantes.
11. Promover y operar el intercambio de información con dependencias e instituciones nacionales e internacionales en materia de migración y movilidad humana.
12. Efectuar consultas y encuestas relacionadas con el fenómeno de la migración;
13. Opinar sobre los proyectos de presupuestos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal involucradas en programas que impliquen atención a migrantes.
14. Promover y fomentar, en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, acciones de orientación y educación a la población, referente a la problemática que representa el fenómeno de la migración;
15. Reconocer el mérito y altruismo de las personas, físicas o morales, que participan en los programas de atención a migrantes, mediante la expedición de las constancias correspondientes;
16. Promover el respeto y la protección de los derechos de los migrantes, en su calidad de seres humanos;
17. Promover la constitución de asociaciones, organismos o grupos de apoyo que otorguen auxilio y apoyo de cualquier tipo a los migrantes.
18. Promover la inscripción voluntaria de migrantes en el Registro.
19. Elaborar estudios e investigaciones sobre interculturalidad, movilidad humana y fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación, cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de investigación, instituciones educativas y organismos autónomos de derechos humanos.
20. Las demás que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

**CAPITULO X**

**DE LAS SANCIONES**

**Artículo 37.-** Las infracciones a lo previsto en esta Ley se sancionarán conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y los Municipios de Coahuila y/o en su caso conforme al Código Penal vigente en la entidad.

**Artículo 38.-** Será la Fiscalía General Del Estado de Coahuila, a través de la Fiscalía de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos, mediante la Dirección General de Delitos de Alto Impacto y Cometidos en Agravio de Migrantes, quien de acuerdo a lo establecido dentro de su Ley Orgánica, se encargará de la investigación y persecución de los delitos cometidos en agravio de migrantes.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.**- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.**- El Ejecutivo del Estado, dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley deberá emitir el Reglamento de la misma.

**TERCERO.-** El Ejecutivo del Estado, dentro de los sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá integrar el Consejo a que se refiere el Artículo 24 de la misma.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACION DEMOCRATICA**

**GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”**

**SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**SALTILLO, COAHUILA A 5 DE MARZO DEL 2019**

**Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor**

**DIPUTADO**

**Zulmma Verenice Guerrero Cázares**

**DIPUTADA**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Iniciativa que presenta la diputada Blanca Eppen Canales, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “ Del Partido Acción Nacional”; en ejercicio de la facultad legislativa que nos conceden los artículos 59 Fracción I y 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se modifican** diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila de  **Zaragoza, al tenor de lo siguiente:**

**Exposición de Motivos**

Las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado y crecido en presencia de manera exponencial en los últimos años. Prácticamente en la mayor parte del orbe las personas están conectadas al resto del mundo por medio de Internet, a través de sus celulares, *tablets, ipads*, computadoras de escritorio o personales. Las ventajas son muchas; sin duda esto ha permitido el crecimiento del comercio, de la industria y la expansión del conocimiento de un modo tal que ni siquiera lo podíamos imaginar en el pasado. Otros beneficios consisten en que el ser humano puede acceder en tiempo real a información sobre cualquier tema de su interés o necesidad, a noticias de cualquier parte del mundo, a manuales e instructivos para resolver un sinfín de problemas, así como a entretenimiento de forma ilimitada y, a no vivir nunca más en la ignorancia, en la *oscuridad*.

Desde luego, como nunca antes, las personas pueden comunicarse con quien deseen, sin importar la distancia, con un solo clic.

**Ciberacoso, Invasión a la Intimidad de las Personas, “Porno Venganza” y Daño Moral por medio de las redes sociales e Internet**

El avance de las tecnologías de la comunicación, en especial de las redes sociales, ha traído también grandes problemas como la aparición de nuevos delitos e ilícitos, el uso de estas tecnologías por parte del crimen nacional y trasnacional; los delitos relacionados con el contrabando, el tráfico de drogas, la venta de artículos robados, la piratería, los fraudes de todo tipo, el secuestro, la pornografía, el robo de identidad, el robo de información y las estafas, por mencionar una parte del amplio abanico de conductas delictivas desplegadas por estos medios, han crecido también de manera imparable a la par de las bondades que ofrecen estos avances de la ciencia y la tecnología.

Para efectos de la presente iniciativa, nos concentraremos en los delitos relacionados con el llamado Ciberacoso, la invasión a la privacidad e intimidad de las personas, el uso indebido de imágenes y grabaciones obtenidas y difundidas sin consentimiento del afectado y los graves daños que esto (la invasión a la intimidad) genera a las víctimas, como la pérdida de la tranquilidad, daño a su honor y reputación, descrédito público, acoso y agresividad colectiva derivada de la difusión de las imágenes y todos los demás perjuicios emocionales y materiales que esto implica.

De acuerdo al documento denominado “Módulo sobre Ciber Acoso, 2015” del INEGI, esta conducta se describe de la siguiente manera:

Inicio de cita textual “El ciberacoso supone una intromisión de naturaleza repetitiva en la vida íntima de una persona, utilizando para ello medios electrónicos, fundamentalmente Internet y teléfonos celulares. Se presenta de forma encubierta porque las víctimas son atacadas a través de redes sociales o de las TIC sin otro objetivo que infligir maltratos y denigraciones.”

A diferencia del acoso físico, el que se da por medios electrónicos puede suceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y afectar de manera importante a la víctima. Los mensajes e imágenes utilizados en estas situaciones pueden publicarse de forma anónima y distribuirse rápidamente a una gran audiencia y es sumamente difícil borrarlos luego de que han sido publicados o enviados; en ocasiones es difícil y a veces imposible detectar la fuente.

La inmediatez con que se difunde la información, así como su alcance, ha hecho que el ciberacoso o *ciberbullying* sea una vejación fácilmente realizable y cada vez más atemorizante.

Como consecuencia de esta situación, en los últimos años se han incrementado las investigaciones que analizan la violencia entre iguales, con la finalidad de elaborar instrumentos de evaluación e intervención. Una referencia importante encontrada en un estudio (Smith,

2006) proporciona elementos para clarificar qué es el *cyberbullying*, a través de los principales tipos de ciberacoso:

• Mensajes de texto

• Acoso telefónico

• Acoso a través de fotografías/vídeo

• Acoso a través de correos electrónicos

• Acoso a través de sesiones de chat

• Acoso a través de programas de mensajería instantánea

• Acoso vía páginas web

Otra referencia es la de Martínez y Ortigosa (2010), quienes propusieron una lista de prácticas recurrentes (sin finalidad de ser exhaustivas) y que representan con claridad algunas acciones del fenómeno:

1. Distribuir en Internet una imagen comprometida de contenido sexual (real o trucada), o datos susceptibles de perjudicar a la víctima.

2. Dar de alta a la víctima en un sitio Web donde puede estigmatizarse y ridiculizar a una persona. Por ejemplo, donde se escoge a la persona más tonta, más fea, etc.

3. Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima en el que ésta comparte intimidades, realiza demandas y ofertas sexuales explícitas, etc.

4. Usurpar la identidad de la víctima y en su nombre, hacer comentarios ofensivos o participaciones inoportunas en chats, de tal modo que despierte reacciones adversas hacia quién en verdad es la víctima.

5. En la misma línea, provocar a la víctima en los servicios Web que están vigilados de tal forma que ésta tenga una reacción desproporcionada y se vea excluida del chat, comunidad virtual. etc. en la que estaba participando.

6. Con frecuencia los ciberacosadores engañan a las víctimas haciéndose pasar por amigos o por una persona conocida con la que concertan un encuentro digital para llevar a algún tipo de acoso online.

7. Divulgar por Internet grabaciones con móviles o cámara digital en las que se intimida, pega, agrede, persigue, etc. a una persona. El agresor se complace no sólo del acoso cometido sino también de inmortalizarlo, convertirlo en objeto de burla y obtener reconocimiento por ello. Algo que se incrementa cuando los medios de comunicación hacen eco de ello.

8. Dar de alta en determinados sitios la dirección de correo electrónico de la persona acosada para convertirla en blanco de spam, contactos con desconocidos, etc.

9. Asaltar el correo electrónico de la víctima accediendo a todos sus mensajes o, incluso, impidiendo que el verdadero destinatario los pueda leer.

10. Hacer correr falsos rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a la víctima, de tal modo que quienes lo lean reaccionen y tomen represalias en contra de la misma.

11. Enviar mensajes ofensivos y hostigadores a través de e-mail, sms o redes sociales.

12. Perseguir e incomodar a la persona acosada en los espacios de Internet que frecuenta de manera habitual.

13. Acosar a través de llamadas telefónicas silenciosas, o con amenazas, insultos, con alto contenido sexual, colgando repetidamente cuando contestan, en horas inoportunas.

Se trata pues, de un fenómeno que genera ansiedad, inseguridad y desconfianza en quienes lo padecen, en especial porque las víctimas desconocen quién está detrás de las ofensivas. Por ello, deben recibir apoyo psicológico para manejar sus emociones, enfrentar sus miedos y lidiar con su coraje, así como trabajar en la recuperación de la confianza hacia los otros y en el restablecimiento de la estima propia”. Fin de la cita textual.

**El estado de indefensión ante el Ciberacoso**

Los delitos cometidos a través de las redes sociales e Internet presentan una diferencia que abona considerablemente al estado de indefensión e impotencia de la víctima para poder obtener justicia y en su caso, terminar con el problema y lograr que se borren las imágenes o contenidos que le perjudican: el anonimato. La persona detrás de todo es virtualmente invisible, puede esconderse en perfiles falsos, en cuentas con datos falsos de correo electrónico, incluso crear páginas web apócrifas y, dependiendo de su nivel de conocimientos informáticos, puede incluso crear un rastro falso de pistas, o esconderse en múltiples perfiles e incluso inculpar a alguien más por medio de falsificar un perfil que incrimine a una persona inocente.

**Legislación deficiente y no apta para perseguir el Ciberacoso**

Con independencia de los esfuerzos legislativos que se han realizado en los años recientes para combatir el Ciberacoso y sus delitos conexos, hasta hace poco, nuestra legislación penal federal y local no contenía tipo delictivos para poder encuadrar y tipificar este delito. Y se debía conformar el afectado con explorar la posibilidad de que su caso se tratara como “acoso tradicional”, invasión a la intimidad, ataque a equipos informáticos, robo de información digital y demás figuras contempladas en los códigos del país hasta, digamos, el año 2016. Incluso a algunas personas se les llego a “sugerir” que debían demandar por daño moral en la vía civil….siempre y cuando pudieran localizar por cuenta propia al responsable; hecho que es como una burla para la víctima, ya que presupone que le debe hacer al investigador, conseguir las pruebas y demandar en la vía civil.

Así las cosas, se han hecho esfuerzos legislativos en los últimos tres años para transitar hacia la configuración de delitos más acordes con este fenómeno y sus variantes.

**Estadísticas del Ciberacoso, de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)**

El boletín del INMUJERES, correspondiente al año 2, número 7, del 15 de julio de 2016, refiere que en México, para ese año (2016) 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 19 años habían sufrido una de las formas del Ciberacoso. Los tipos de ciberacoso que menciona el documento como los más prevalentes, son:

I.- Enviar videos o imágenes de contenido sexual o agresivo;

II.- Correo basura o virus para dañar sus equipos;

III.- Mensajes con insultos o amenazas;

IV.- Ser contactado por medio de identidades falsas o perfiles inventados;

V.- Robo de identidad, principalmente para enviar a otros mensajes a nombre del afectado para causarle enorme perjuicio;

VI.- Ser registrado en un sitio, página o grupo sin su consentimiento;

VII.- Publicación de información falsa o íntima sobre su persona;

VIII.- Recibir llamadas insultantes o amenazantes;

IX.- Rastreo de los sitios web y cuentas que utiliza; y,

X.- Fueron obligados a proporcionar sus contraseñas para mantenerlos vigilados.

Los principales medios de acoso son las redes sociales Facebook y Twitter, seguidas de Instagram, Linkedln y Youtube.

Las mujeres sufren mayor porcentaje de ciberacoso, en casi todas sus modalidades, excepto en la publicación de información vergonzosa, falsa o íntima, donde presentan una diferencia menor entre géneros.

 Los datos siguientes son tomados del documento a que hacemos referencia, quedan para consulta de los interesados:

 

 

Cifras más actuales apuntan a que las mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años son las que más sufren del ciber acoso.

Entre las principales razones que motivan a los agresores a realizar este tipo de conductas se encuentran la violencia de género, la venganza sentimental, celos enfermizos, conflictos familiares, y en otros casos mera “diversión”.

**Legislación actual en México y esfuerzos legislativos**

Código Penal Federal:

**TÍTULO SÉPTIMO BIS**

**DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN SEXUAL**

**CAPÍTULO I**

**Comunicación de Contenido Sexual con Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen la Capacidad para Resistirlo**

***Artículo 199 Septies.-*** *Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual.*

**TITULO NOVENO**

**Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática**

**CAPITULO I**

**Revelación de secretos**

***Artículo 210****.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.*

***Artículo 211****.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.*

***Artículo 211 Bis****.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.*

Código Penal de Baja California Sur:

**CAPITULO IV BIS**

**CIBERACOSO SEXUAL**

***Artículo 183 bis. Ciberacoso Sexual.*** *A quien cometa el delito de ciberacoso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y hasta quinientos días multa.*

*Se entiende por ciberacoso sexual a quien con fines lascivos y utilizando la coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño, establece comunicación a través de teléfono, Internet, o cualquier otra tecnología de la información y comunicación, con el propósito de obtener contenido sexual o pornográfico del menor, difundirlo, amenazar con hacerlo, y/o concertar un encuentro sexual con el mismo, a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185 y 187.*

Código Penal de Yucatán:

**CAPÍTULO I Bis**

**Acoso Sexual**

***Artículo 308 Bis.-*** *Se impondrá pena de uno a dos años de prisión y de cincuenta a quinientos días-multa a quien:*

*….*

***III.*** *Capte imágenes o realice cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de alguna parte de su cuerpo, sin su consentimiento y con un carácter erótico-sexual, o*

***IV.*** *Realice reiteradamente actos de exhibicionismo, remisión de imágenes o videos con connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal, o los solicite, sin que la víctima haya otorgado su consentimiento.*

*Si el sujeto activo realiza cualquiera de las conductas previstas en este artículo aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, la pena prevista en el párrafo primero se incrementará en un cuarto.*

*Si la víctima del delito de acoso sexual fuera menor de quince años de edad o una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento; o que por cualquier causa no pueda resistirlo, se aumentará la pena prevista en el párrafo primero hasta en una mitad.*

*Este delito se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea menor de quince años o por cualquier circunstancia sea incapaz de comprender el delito, en cuyo caso se perseguirá de oficio.*

En nuestra investigación, además, nos encontramos el dictamen 1278, de fecha 26 de noviembre de 2018, de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, del Congreso del Estado de Puebla, donde se da cuenta de la aprobación de las reformas siguientes:

**Artículo 225.** Comete el delito de violación a la intimidad sexual, quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio:

I. Divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite la imagen de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido erótico sexual, por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

II. Divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite por cualquier medio el contenido íntimo o sexual, sin el consentimiento de la víctima.

Esta conducta se sancionará de tres a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces diario vigente de la unidad de medida y actualización al momento de que se cometa el delito.

Este delito se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea menor de edad o padeciere una discapacidad que vicie su consentimiento en cuyo caso se perseguirá de oficio.

En caso de que este contenido sin consentimiento sea difundido o compilado por medios de comunicación o plataformas digitales, la autoridad competente ordenará a la empresa de prestación de redes sociales o medio de comunicación a retirar inmediatamente el contenido.

**Artículo 225** bis. Las mismas sanciones del artículo 225 se aplicarán a quien obtenga de dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento de datos físico o virtual, cualquier imagen, videos, textos o audios sin la autorización del titular.

En el caso de que en esta conducta el sujeto activo la realice con violencia, se incrementará la sanción hasta en dos terceras partes.

**Conflictos con la tipificación de los delitos relacionados con el Ciberacoso: Acoso Sexual, Invasión a la Intimidad y Extorsión Virtual y Ciberacoso no son lo mismo**

Uno de los conflictos más serios que se ha presentado en el ámbito legislativo es el relacionado con poder …y deber separar delitos que, en apariencia contienen los mismos elementos de configuración (tipo penal), pero no es así, esto es, no es lo mismo acoso sexual ordinario, el que se hace de persona a persona y en vivo, al acoso sexual por medios informáticos. Tampoco es lo mismo que alguien utilice y divulgue imágenes de tipo sexual sin autorización de la víctima; ya que propiamente no tiene nada que ver con acoso si el delincuente no hace contacto con ella ni le pide nada a cambio, solo es invasión a la privacidad o intimidad de una persona, con todo lo grave que es este delito y sus consecuencias. Como tampoco es lo mismo que, utilizando información sensible de una persona, se le exhiba en redes sociales o en sitios web de Internet, con ánimo de causarle descrédito público, en cuyo caso estamos hablando de una conducta concreta y daños que deben encuadrar en un tipo penal específico.

Y; no es lo mismo cuando el delincuente le pide a la persona dinero, favores sexuales o que realice cualquier otra cosa para no publicar la información que tiene en su poder, ya que estaríamos hablando de extorsión o una variante de tal delito, esto por ilustrar t

odo del modo más sencillo y en términos comprensibles.

**Código Penal de Coahuila**

***Artículo 236 (Acoso sexual y hostigamiento sexual)***

***I.*** *(Acoso sexual)*

*Se aplicará de uno a cinco años de prisión y multa: A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, ya sea de manera directa, a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma, que le cause un daño o sufrimiento psicológico el cual lesione su dignidad, y coloque a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.*

*Si la acción se realiza a través de medios informáticos, se impondrá además, la prohibición de comunicarse a través de dichos medios o redes sociales, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.*

*Las sanciones se aumentarán en un tercio más si el sujeto activo puede causar un daño personal, laboral, educativo, profesional o patrimonial; o si el sujeto pasivo del delito es una persona menor de edad o sin capacidad de comprender el significado del hecho o de decidir conforme a esa comprensión.*

*La misma sanción prevista en el párrafo anterior, se aplicará en el caso de que el sujeto activo fuere servidor público y utilizare los medios propios del cargo, además de la destitución e inhabilitación para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un período de uno a cinco años.*

***Artículo 271 (Invasiones a la privacidad)***

*Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa, a quien sin mandato de autoridad judicial competente o sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y para conocer alguna intimidad, información o comunicación privadas, se apodere de documentos u objetos de cualquier clase que contengan la intimidad, información o comunicación privadas.*

***Artículo 272 (Violaciones a la privacidad, a la imagen o intimidad personales)***

*Las violaciones a la privacidad, a la imagen o a la intimidad personales serán punibles en los supuestos siguientes:*

***I.*** *(Grabaciones de comunicaciones o conversaciones privadas)*

*Se impondrá de dos a cinco años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien audio-grabe o audio-filme por cualquier medio, una comunicación o conversación privada entre dos o más personas, sin autorización de un juez competente o sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo.*

***II.*** *(Divulgación de comunicaciones o conversaciones privadas)*

*Se impondrá de dos a cinco años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien sin autorización de un juez competente o sin consentimiento de quienes tengan derecho a otorgarlo, divulgue una comunicación o conversación privada entre dos o más personas, obtenida a través de cualquiera de las conductas referidas en la fracción precedente.*

***III.*** *(Violaciones a la imagen o la intimidad contra personas con dieciocho años o más)*

*Se impondrá de tres a seis años de prisión y de setecientos a mil doscientos días multa, a quien en una misma ocasión tome y/o divulgue una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda, o de uno o más actos sexuales de la misma, o de una mujer sin corpiño, sin consentimiento de la persona si tiene dieciocho años o más.*

***IV.*** *(Violaciones a la imagen o intimidad contra personas menores de dieciocho años, o contra incapaces)*

*Se impondrá de cuatro a siete años de prisión y de mil a mil quinientos días multa, a quien en una misma ocasión tome y/o divulgue una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda, o de uno o más actos sexuales de la misma; o de una mujer sin corpiño mayor de seis años; en cualquier caso, con o sin consentimiento de ella, si tiene menos de dieciocho años o si carece de la capacidad de comprender el alcance del hecho.*

*No será punible tomar o divulgar en un contexto familiar y con consentimiento de quienes puedan otorgarlo conforme a la ley, imágenes, fotografías, videos o películas no pornográficas de niños o niñas desnudos que tengan menos de tres años.*

*Artículo 273 (Delitos contra la información privada en medios informáticos)*

*Los delitos contra la información privada en medios informáticos serán los siguientes:*

*I. (Acceso y transmisión o divulgación ilícitas de información contenida en un sistema informático)*

*Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, o de seis meses a tres años de libertad supervisada y de quinientos a mil días multa, a quien sin consentimiento de quien tenga derecho de disponer de datos o información privados contenidos en un sistema informático, acceda al sistema y transmita a una o más personas o divulgue los referidos datos o información, perjudicando a quien tenga derecho a disponer de ellos o a otra persona.*

*II. (Afectación de datos o información contenidos en un sistema informático)*

*Se impondrá de cuatro meses a cuatro años de prisión y de setecientos cincuenta a mil quinientos días multa, a quien sin consentimiento de quien tenga derecho de disponer de datos o información privada contenidos en un sistema informático, a propósito, altere, dañe, borre, destruya o de cualquier otra manera provoque a propósito la pérdida de datos o información contenidos en el sistema.*

*Si en los supuestos del párrafo precedente hubiera algún resguardo o copia de los datos o información afectados, solo se impondrá al autor de cuatro meses a un año de libertad supervisada y de quinientos a mil días multa.*

Coahuila observa en el artículo 236 una redacción para legislar el ciberacoso, pero estableciendo ambos casos (acoso común y virtual) en un solo delito, esto es, que el acoso se cometa en forma directa o por medio de tecnologías informáticas.

A la vez, en los subsecuentes artículos 271; se limita al hecho de que el infractor “grabe con deseos de “conocer”. Y no señala la condicionante difundir o causar daños.

En el artículo 272, tenemos las siguientes fracciones, donde se observan “variantes” en el tema de la violación a la intimidad:

….

*III. (Violaciones a la imagen o la intimidad contra personas con dieciocho años o más)*

*Se impondrá de tres a seis años de prisión y de setecientos a mil doscientos días multa, a quien en una misma ocasión tome y/o divulgue una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda, o de uno o más actos sexuales de la misma, o de una mujer sin corpiño, sin consentimiento de la persona si tiene dieciocho años o más.*

*IV. (Violaciones a la imagen o intimidad contra personas menores de dieciocho años, o contra incapaces)*

*Se impondrá de cuatro a siete años de prisión y de mil a mil quinientos días multa, a quien en una misma ocasión tome y/o divulgue una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda, o de uno o más actos sexuales de la misma; o de una mujer sin corpiño mayor de seis años; en cualquier caso, con o sin consentimiento de ella, si tiene menos de dieciocho años o si carece de la capacidad de comprender el alcance del hecho.*

*….*

Para ilustrar diferencias, creamos los siguientes cuadros comparativos:

.

Ciberacoso C.P.F. Ciberacoso B.Sur Ciberacoso Yuc. Ciberacoso Coahuila

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Artículo 199 Septies.-*** *Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona* ***menor de dieciocho*** *años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual.* | ***Artículo 183 bis. Ciberacoso Sexual.*** *A quien cometa el delito de ciberacoso sexual en una persona menor de* ***quince años*** *de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y hasta quinientos días multa.**Se entiende por ciberacoso sexual a quien con fines lascivos y utilizando la coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño, establece comunicación a través de teléfono, Internet, o cualquier otra tecnología de la información y comunicación, con el propósito de obtener contenido sexual o pornográfico del menor, difundirlo, amenazar con hacerlo, y/o concertar un encuentro sexual con el mismo, a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185 y 187.* |  ***Artículo 308 Bis.-*** *Se impondrá pena de uno a dos años de prisión y de cincuenta a quinientos días-multa a quien:**….****III.*** *Capte imágenes o realice cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de alguna parte de su cuerpo, sin su consentimiento y con un carácter erótico-sexual, o* ***IV.*** *Realice reiteradamente actos de exhibicionismo, remisión de imágenes o videos con connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal, o los solicite, sin que la víctima haya otorgado su consentimiento.* *Si el sujeto activo realiza cualquiera de las conductas previstas en este artículo aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, la pena prevista en el párrafo primero se incrementará en un cuarto.**Si la víctima del delito de acoso sexual fuera* ***menor de quince años de edad*** *o una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento; o que por cualquier causa no pueda resistirlo, se aumentará la pena prevista en el párrafo primero hasta en una mitad.* *Este delito se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea menor de quince años o por cualquier circunstancia sea incapaz de comprender el delito, en cuyo caso se perseguirá de oficio.* | ***Artículo 236 (Acoso sexual y hostigamiento sexual)******I.*** *(Acoso sexual)* *Se aplicará de* ***uno a cinco años*** *de prisión y multa: A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, ya sea de manera directa, a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma, que le cause un daño o sufrimiento psicológico el cual lesione su dignidad, y coloque a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.* *Si la acción se realiza a través de medios informáticos, se impondrá además, la prohibición de comunicarse a través de dichos medios o redes sociales, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.* *Las sanciones se aumentarán en un tercio más si el sujeto activo puede causar un daño personal, laboral, educativo, profesional o patrimonial; o si el sujeto pasivo del delito es una persona menor de edad o sin capacidad de comprender el significado del hecho o de decidir conforme a esa comprensión.* *La misma sanción prevista en el párrafo anterior, se aplicará en el caso de que el sujeto activo fuere servidor público y utilizare los medios propios del cargo, además de la destitución e inhabilitación para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un período de uno a cinco años.* |

Nota: el Código Penal Federal tipifica aparte el Hostigamiento Sexual: **Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación**

***Artículo 259 Bis.-*** *Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.*

Inv. a la I. CPF Inv, a la I. Dic Puebla Inv. a la I. Coahuila

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Artículo 199 Septies.-** Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual. | **Artículo 225.** Comete el delito de violación a la intimidad sexual, quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio:I. Divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite la imagen de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido erótico sexual, por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.II. Divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite por cualquier medio el contenido íntimo o sexual, sin el consentimiento de la víctima.Esta conducta se sancionará de **tres a seis años de prisión** y multa de mil a dos mil veces diario vigente de la unidad de medida y actualización al momento de que se cometa el delito.Este delito se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea menor de edad o padeciere una discapacidad que vicie su consentimiento en cuyo caso se perseguirá de oficio.En caso de que este contenido sin consentimiento sea difundido o compilado por medios de comunicación o plataformas digitales, la autoridad competente ordenará a la empresa de prestación de redes sociales o medio de comunicación a retirar inmediatamente el contenido.**Artículo 225** bis. Las mismas sanciones del artículo 225 se aplicarán a quien obtenga de dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento de datos físico o virtual, cualquier imagen, videos, textos o audios sin la autorización del titular.  | *III. (Violaciones a la imagen o la intimidad contra personas con dieciocho años o más)**Se impondrá de* ***tres a seis años de prisión*** *y de setecientos a mil doscientos días multa, a quien en una misma ocasión tome y/o divulgue una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda, o de uno o más actos sexuales de la misma, o de una mujer sin corpiño, sin consentimiento de la persona si tiene* ***dieciocho años o más.****IV. (Violaciones a la imagen o intimidad contra personas menores de dieciocho años, o contra incapaces)**Se impondrá de* ***cuatro a siete años de prisión y*** *de mil a mil quinientos días multa, a quien en una misma ocasión tome y/o divulgue una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda, o de uno o más actos sexuales de la misma; o de una mujer* ***sin corpiño mayor de seis años; en cualquier caso, con o sin consentimiento de ella, si tiene menos de dieciocho años o si carece de la capacidad de comprender el alcance del hecho.****….* |

**Diferencias** **y omisiones encontradas entre legislaciones**

Luego de analizar estos ordenamientos y otras siete leyes de diversas entidades federativas, encontramos diversas constantes:

I.- Al parecer, existen algunas dificultades para separar y tipificar todas las conductas delictivas relacionadas con el Ciberacoso, y se limitan, en algunos casos, a considerar el ciberacoso como una extensión del acoso en persona, estableciendo el supuesto que se refiere a ser “acosado a distancia”. Omitiendo los demás fenómenos, como el uso indebido de imágenes íntimas de la persona.

II.- Las penalidades son distintas para el mismo delito.

III.- La edad establecida para penalizar los casos de menores de edad se basa en los 15 y los 18 años, y no existe un consenso al respecto.

IV.- No toman en cuenta, en algunos casos, que el Ciberacoso no es lo mismo que tomar y utilizar imágenes o videos de una persona en la intimidad para difundirlos con ánimo de hacerle daño. No existe acoso si esto se hace a espaldas de la víctima.

V.- En otros casos “fusionan” el ciberacoso con invasión a la intimidad.

VI.- En el caso de los delitos de invasión a la intimidad, algunas redacciones se limitan a señalar que el infractor difunda las imágenes o videos obtenidos sin establecer los fines de tales conductas, como causar un daño intencional a la víctima.

VII.- Ninguna considera el caso en que el autor de las imágenes divulgadas sea la ex pareja de la víctima o persona de su confianza, de tal suerte que la pena sea mayor en dichos casos.

Por las consideraciones expuestas, es necesario adecuar el Código Penal del Estado, a fin de dotar de claridad y certeza al delito de Ciberacoso y a las demás conductas desplegadas por medio de las TIC.

En base a lo señalado, presentamos a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se modifica el contenido del primer párrafo y se adiciona un sexto párrafo de la fracción I del artículo 236 y se modifica el contenido de las fracciones III y IV, adicionando un tercer párrafo a esta última; y modificando el contenido de la fracción V, recorriendo el actual contenido a la fracción VII, que se crea, al tiempo que se adiciona también la fracción VI del artículo 272 del Código Penal de Coahuila, para quedar como sigue.

***Artículo 236 (Acoso sexual y hostigamiento sexual directo y por medios informáticos)***

***I.*** *…..*

*Se aplicará de tres a seis años de prisión y multa: A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, ya sea de manera directa, a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma, que le cause un daño o sufrimiento psicológico el cual lesione su dignidad, y coloque a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.*

 *Párrafos del segundo al quinto….*

*Se entiende por acoso sexual a través de medios informáticos el que se realiza con fines lascivos y utilizando la coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño, estableciendo comunicación a través de teléfono, Internet, o cualquier otra tecnología de la información y comunicación, con el propósito de obtener contenido sexual o pornográfico del sujeto pasivo, sea menor o mayor de edad, difundirlo, amenazar con hacerlo, y/o concertar un encuentro sexual con el mismo, a fin cometer una o varias conductas delictivas.*

*…….*

***Artículo 272……***

 *……..*

*I….*

*II….*

***III.*** *(Violaciones a la imagen o la intimidad contra personas con dieciocho años o más)*

*Se impondrá de tres a seis años de prisión y de setecientos a mil doscientos días multa, a quien en una misma ocasión tome y/o divulgue por cualquier medio informático una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda, o de uno o más actos sexuales de la misma, o de una mujer semi desnuda, sin consentimiento de la persona si tiene dieciocho años o más.*

 ***IV.*** *(Violaciones a la imagen o intimidad contra personas menores de dieciocho años, o contra incapaces)*

*Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de mil a mil quinientos días multa, a quien en una misma ocasión tome y/o divulgue por cualquier medio informático una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda, o de uno o más actos sexuales de la misma; o de una mujer semi desnuda menor de edad; en cualquier caso, con o sin consentimiento de ella, si tiene menos de dieciocho años o si carece de la capacidad de comprender el alcance del hecho.*

 *Segundo párrafo….*

 *La penalidad establecida en la fracción III se incrementará en un tercio, si el sujeto activo mantuvo o mantiene una relación sentimental con el sujeto pasivo, aun en los casos donde el sujeto activo se valga de terceros para desplegar la conducta señalada.*

***V. (Difusión de imágenes falsificadas de personas mayores de 18 años)***

*Se impondrá de tres a seis años de prisión y de setecientos a mil doscientos días multa, a quien en una misma ocasión altere, edite o modifique imágenes o videos de una persona o falsifique su perfil y datos de identidad con ánimo de mostrarla en medios informáticos en situaciones íntimas o sexuales para causarle descrédito público, vergüenza y afectación a su honor y reputación, si la persona es mayor de 18 años.*

*VI.-* ***(Difusión de imágenes falsificadas de personas menores de 18 años o incapaces)***

*Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de setecientos a mil doscientos días multa, a quien en una misma ocasión altere, edite o modifique imágenes o videos de una persona o falsifique su perfil y datos de identidad con ánimo de mostrarla en medios informáticos en situaciones íntimas o sexuales para causarle descrédito público, vergüenza y afectación a su honor y reputación, si tiene menos de dieciocho años o si carece de la capacidad de comprender el alcance del hecho.*

***VII.- (Penas adicionales para servidores públicos)***

***Si es un servidor público quien comete, determina o participa típicamente en cualquiera de los delitos previstos en este artículo, además de las penas que le correspondan conforme a este numeral, en cualquier caso, también se le destituirá e inhabilitará de diez a quince años para desempeñar un cargo, empleo o comisión en cualquier entidad oficial del Estado o de sus municipios, y se le suspenderá de diez a quince años del derecho a celebrar con aquellas entidades contratos o convenios de prestación de servicios de cualquier clase.***

……..

TRANSITORIOS

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

##### ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

## Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 05 de marzo de 2019

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 28 de febrero de 2019**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES**

**DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ**

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 21 del mes de febrero del año 2018, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

En el marco de la renovación que viene impulsando el Gobierno de la República en el rubro de Justicia Cotidiana, se incluye lo referente a la justicia laboral *“que trata las relaciones de trabajo de las personas con sus empleadores, sean estos particulares u organismos públicos”*[[1]](#footnote-1)*.*

Si bien en México se han realizado en los últimos años importantes esfuerzos por modernizar las instituciones que imparten justicia en el ámbito laboral, resultado en mejoras en materia de conciliación y en un ambiente de diálogo y equilibrio entre los factores de la producción, lo cierto es que se han mantenido prácticamente intactas su estructura y procesos desde su fundación a fines de la década de los años veinte del siglo pasado

Efectivamente, en nuestro país, el sistema de justicia en materia laboral, que en su momento respondió a las demandas del México Post Revolucionario, hoy enfrenta *“un diseño institucional que resiste la renovación y adaptación*”[[2]](#footnote-2).

En consecuencia, el ritmo de la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Por tanto, el siguiente paso es avanzar hacia una justicia laboral del Siglo XXI: Moderna y eficiente.

Por ello, tras la presentación de una iniciativa de reformas constitucionales, el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha reforma incorpora nuevos esquemas para la impartición de la justicia en materia laboral. Prevé la creación de órganos jurisdiccionales adscritos a los Poderes Judiciales de la Federación y de los Estados, para administrarla; así como, en un esquema de impulso al uso de los modelos alternativos de solución de controversias, crea instancias ex profesas de conciliación en materia laboral[[3]](#footnote-3), por lo que antes de acudir a aquellos tribunales laborales, las y los trabajadores y patrones deberán asistir a esa instancia de conciliación que en el orden local estará a cargo de Centros de Conciliación como organismos públicos descentralizados especializados e imparciales, los cuales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, contando con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad; y su integración y funcionamiento se determinarán una vez que entren las disposiciones de la ley en la materia.

Aquella trascendental reforma contribuye al acceso de una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente, lo cual implica una amplia revisión de las instituciones responsables de garantizar el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva y de los procedimientos contenidos en el derecho procesal del trabajo los últimos casi cien años, a la luz de las condiciones actuales del sistema de impartición de justicia en nuestro país, sin perder de vista su carácter tutelar y social.

De ahí la importancia de dicha reforma, puesto que ésta otorga competencia para conocer y resolver de controversias en materia laboral al Poder Judicial de la Federación que asumirá la competencia y facultades que, a la fecha, vienen realizado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los Poderes Judiciales de las entidades federativas asumirán la competencia y facultades de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; a la par, viene a fortalecer la función conciliatoria en los asuntos del trabajo, mediante la atención de la misma a través de los Centros de Conciliación.

Ahora bien, el régimen transitorio de aquella reforma constitucional estipuló que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones legislativas que correspondan dentro del año siguiente a la entrada en vigor del Decreto, esto es, el 25 de febrero de este año de 2018.

De tal forma, ante el calado del nuevo modelo de impartición y administración de justicia laboral en el país, en Coahuila de Zaragoza, asumimos con responsabilidad la firme determinación de diseñar, implementar y consolidar una profunda transformación del sistema de justicia laboral local, mediante la eliminación de todo elemento que convierta a dicha justicia en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable.

Para la consecución de dicho objetivo, en congruencia con la reforma federal, es indispensable actualizar nuestra legislación para que sea acorde a la realidad laboral nacional y estatal y, en primer término promover las adecuaciones a nuestro texto constitucional para dar cabida a aquel nuevo modelo que se sustenta en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía.

La impartición de justicia laboral construida sobre los principios anteriores es determinante para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, garantizar la igualdad de las y los coahuilenses y todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado, a fin de contribuir al desarrollo económico, reforzar las políticas de justicia laboral y fortalecer al Estado Democrático de Derecho. Una justicia laboral efectiva, pronta y expedita dará certeza jurídica a trabajadores y a empleadores. Ello permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica, así como la calidad de vida de las familias mexicanas y coahuilenses.

Es por lo anterior y en virtud del trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestro Estado, para la armonización de la reforma Constitucional Federal en materia de justicia laboral, que se propone:

1. En la Constitución Política del Estado:
* Crear a cargo del Poder Ejecutivo el Centro de Conciliación como organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con funciones de instancia conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones.
* Incorporar dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado a los Tribunales Laborales, así como añadir dentro de las facultades del mismo, la de resolver las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones en los términos que establezcan las leyes.

Determinar la jurisdicción que tendrán los tribunales laborales del Poder Judicial, así como establecer, en lo concerniente a sus funciones, el reenvío a la legislación secundaria correspondiente.

1. En la Ley Orgánica de la Administración Pública:
* Armonizar las atribuciones de la Secretaría del Trabajo, tales como, el coordinar el Centro de Conciliación y vigilar su correcto funcionamiento.
* Contemplar dentro del Título Cuarto correspondiente a la Justicia Laboral la creación del organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Centro de Conciliación cuya función será el ser la instancia conciliadora de conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales en materia laboral a dirimir sus controversias.

**TERCERO.-** El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, mismo que de conformidad a su transitorio primero, entró en vigor al día siguiente de su publicación.

A partir de la vigencia de estas normas en nuestro país se estableció un nuevo marco jurídico e institucional en materia de justicia laboral, modificándose el modelo mediante el cual se venían resolviendo las controversias laborales que conocíamos desde 1920.

Así, el constituyente permanente, a efecto de atender una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana, la de acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente, buscó las fórmulas legislativas adecuadas para eliminar todo elemento que convirtiera la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, así como para combatir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad.

En este sentido, el Congreso de la Unión realizó las modificaciones necesarias con el objeto de establecer el otorgamiento de la competencia para conocer y resolver las controversias en materia laboral al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas que asumirán las tareas de las juntas de conciliación y arbitraje y para fortalecer la función conciliatoria en los asuntos del trabajo.

En atención a lo cual en la reforma se dispone, entre otras cosas, que:

**“[L]a resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará** **a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas** (…)”, suprimiendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

**Así mismo prevé que, *[a]ntes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.”***

***“En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados”.***

Por lo que hace a su régimen transitorio el Decreto establece lo siguiente:

***Transitorios***

***Primero.****El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.*

***Segundo.****El Congreso de la Unión y las* ***legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo****.*

***Tercero.****En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.*

*Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del artículo 107 de esta Constitución.*

*Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio.*

***Cuarto.****Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la designación del titular del organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.*

***Quinto.****En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio, se respetarán conforme a la ley.*

***Sexto.****Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.*

Así, como podemos observar de lo que se desprende del transitorio segundo, en el mismo se establecen una serie de deberes, impuestos desde la Carta Magna, al Poder Legislativo Federal y a los respectivos de las entidades federativas en consecuencia de lo cual, estamos obligados a hacer las adecuaciones normativas necesarias a efecto de armonizar nuestra legislación con las nuevas disposiciones generales en materia de justicia laboral.

En este contexto, los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, efectuamos el análisis de los ordenamientos locales que requieren modificarse en virtud de la entrada en vigor de las ya referidas normas generales, concluyendo que es indispensable adecuar la Constitución Política Local y la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como emitir la Ley por la que se cree el organismo público autónomo encargado de la conciliación en el Estado.

Una vez realizado el recuento de lo anterior, quienes dictaminamos realizamos el estudio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ejecutivo del Estado, y concluido dicho estudio, coincidimos en la pertinencia y necesidad de la misma.

No obstante, lo antes referido, para efectos de este dictamen, y en virtud de que las reformas constitucionales, llevan un trámite legislativo distinto al que corresponde a las leyes de menor jerarquía, observamos que es preciso dictaminar en forma primigenia, la modificación constitucional, para lo cual dejaremos el estudio y dictamen relativo a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública para un momento posterior.

Ya establecida esta metodología, quienes dictaminamos observamos que es conducente e indispensable establecer en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, tal y como se plantea en la iniciativa, la creación a cargo del Poder Ejecutivo del Centro de Conciliación como organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con funciones de instancia conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones; la incorporación dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado a los Tribunales Laborales, así como añadir dentro de las facultades del mismo, la de resolver las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones en los términos que establezcan las leyes, y la determinación de la jurisdicción que tendrán los tribunales laborales del Poder Judicial.

Queremos recalcar, que para los integrantes de esta Comisión es imprescindible garantizar el cumplimiento de la Constitución General de la República y las Leyes que de la misma emanen, es por ello que el Dictamen que se emite es totalmente acorde a las disposiciones generales y responde a la obligación consignada en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto por el régimen transitorio del Decreto publicado el 24 de febrero del año pasado en el Diario Oficial de la Federación.

En este sentido, los integrantes de esta Comisión estimamos que la armonización normativa es indispensable para que un nuevo cuerpo legal o una nueva disposición normativa se adapte de manera congruente, sutil y eficaz, a las conductas de la sociedad que va a regir sus gestiones a través de ella y a las autoridades que van a aplicarla y a las que sancionarán su incumplimiento.

Así, la armonización legal implica una secuencia deóntica entre normas jerarquizadas, constituyendo un ejercicio necesario e inevitable para los congresos, puesto que, su inobservancia genera contradicciones, lagunas normativas, incertidumbre y dificultades para exigir la aplicación y el cumplimiento de la ley.

En este sentido, los integrantes de esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, una vez agotado el estudio del contenido y alcances de la iniciativa objeto del presente dictamen, así como las bases y fundamentos que motivan a la misma, y atendiendo a lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del año 2017, estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se reforma el primer párrafo, la fracción III del segundo párrafo y el tercer párrafo del artículo 135; el cuarto y quinto párrafo del artículo 136; el artículo 137; el séptimo párrafo del artículo 143; el artículo 147; el segundo párrafo del artículo 148; el numeral 6 de la fracción II del artículo 154 y el cuarto párrafo del artículo 193; y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 85, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 85.** …

…

…

El Poder Ejecutivo contará con un Centro de Conciliación como organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con funciones de instancia conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales en materia laboral a que se refiere el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su integración, facultades y funcionamiento se determinarán en las leyes y demás disposiciones aplicables.

El Centro de Conciliación se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

**Artículo 135.** El Poder Judicial se deposita, para su ejercicio, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en los Tribunales Distritales, en los Tribunales Laborales, en los Juzgados de Primera Instancia, cualquiera que sea su denominación, en el Consejo de la Judicatura y en los demás órganos judiciales que con cualquier otro nombre determinen las leyes.

…

**I.- y II.- …**

**III.-** De seis años en el primer ejercicio del encargo para los Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del estado y de los Tribunales Distritales, que se contará a partir de la fecha de su designación.

Al término del citado periodo las y los Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del estado podrán ser designados nuevamente, por única vez, por un periodo de nueve años.

...

**Artículo 136.** …

…

…

Los Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de los Tribunales Distritales no integrarán el Pleno.

La competencia, procedimientos, organización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de los Tribunales Distritales, de los Tribunales Laborales, de los Juzgados de Primera Instancia cualquiera que sea su denominación, y de los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes, así como las facultades, deberes y responsabilidades de los servidores públicos judiciales, se regirán por lo dispuesto en las leyes según los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.

**Artículo 137.** El Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Distritales, están facultados para formar jurisprudencia local en los términos que establezca la ley.

**Artículo 143.** …

…

…

…

…

…

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, readscripción y remoción de Magistrados de Tribunales Distritales y Jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine y estará facultado para expedir los reglamentos y acuerdos generales con el fin de regular el adecuado funcionamiento del Poder Judicial, de conformidad con lo que establezca la ley. Las comisiones tendrán la duración, objeto y funciones que acuerde el Pleno del Consejo.

…

**Artículo 147.** Los Magistrados Distritales, los Jueces de Primera Instancia, cualquiera que sea su denominación, y los titulares de los demás órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, serán nombrados por el Consejo de la Judicatura del Estado, en los términos previstos por la propia Ley.

**Artículo 148.** …

Los Magistrados Distritales, las y los Jueces Laborales y los de Primera Instancia, cualquiera que sea su denominación, lo harán ante el Consejo de la Judicatura o ante el titular del Órgano Judicial que él autorice.

…

**Artículo 154.** …

…

**I.** …

**II.** …

1. a  **5.** …

**6.** El derecho a obtener una resolución fundada y motivada que ponga fin al proceso. Toda resolución deberá ser clara, precisa, accesible y deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública, previa citación de las partes.

**7.** a **13.** …

**III.** a **VI.** …

**Artículo 193.** …

…

…

Cuando hubieren desaparecido los tres poderes quien asuma provisionalmente el mando del gobierno, designará, también, con carácter provisional, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los cuales, a su vez, deberán nombrar a los Magistrados Distritales, a los Jueces de Primera Instancia, y demás titulares de los órganos jurisdiccionales que establezca la ley.

…

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** El Congreso del Estado, en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.

**TERCERO.** En los términos que dispongan las leyes, se deberá prever la competencia de los Tribunales Laborales, así como lo relativo a su integración.

**CUARTO.** Para la integración, instalación y operación de los Tribunales Laborales, el Consejo de la Judicatura determinará mediante un proceso de gradualidad, su inicio de operación en los Distritos Judiciales que, conforme a dicho proceso, determine.

**QUINTO.**Los procedimientos que se encuentren en trámite una vez que entren en funciones el Centro de Conciliación y los Tribunales Laborales serán concluidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, en términos de las disposiciones aplicables.

**SEXTO.** En los términos del instrumento de creación del Centro de Conciliación previsto en la presente reforma, se deberá contemplar lo relativo a la integración, facultades y funcionamiento, así como al inicio de sus operaciones.

**SÉPTIMO.** En tanto se instituye e inicia operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el organismo descentralizado a que se refiere el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

**OCTAVO.** Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán remitir al organismo descentralizado que se refiere en el artículo cuarto del presente régimen transitorio, una relación de los emplazamientos a huelga que se encuentren en trámite en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales después de la entrada en vigor del presente decreto.

**NOVENO.** Las autoridades competentes y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su atención o resguardo, en el ámbito de sus respectivas competencias, al organismo descentralizado, citado en el artículo cuarto del presente régimen transitorio, que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

**DÉCIMO.** Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, presentarán al Titular de la Secretaría del Trabajo y a la autoridad local que corresponda, respectivamente, un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para la conclusión de los asuntos en trámite y para la supresión gradual de dichos órganos.

El plan de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, se deberá implementar a partir del inicio de operaciones del Centro de Conciliación y deberá contener indicadores de medición de resultados e impacto por periodos semestrales, correspondiendo la medición de resultados e impacto al Órgano Interno de Control de cada Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

**DÉCIMO PRIMERO**. El Congreso del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las adecuaciones presupuestarias necesarias para dotar de los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes, para el cumplimiento del presente decreto, en términos de las disposiciones aplicables.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 12 de febrero de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al oficio de la Diputada Lizet Sánchez García, Secretaria de la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en la sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el día 15 del mes de enero de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la minuta a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el 16 de enero de 2019, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio de la Diputada Lizet Sánchez García, Secretaria de la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio se basa entre otras, en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

El combate inteligente al crimen organizado y a los delitos de corrupción debe ser una prioridad estratégica para la seguridad y la procuración de justicia de nuestro país. La experiencia internacional ha demostrado a lo largo de varias décadas que no es suficiente y mucho menos eficaz, el concentrar los esfuerzos de las instituciones de seguridad el limitarse a la persecución de aquellos que incurren en dichas conductas delictivas. Lo que verdaderamente ha demostrado en diversas latitudes dar resultado para abatir la criminalidad organizada y la del género de corrupción ha sido el incluir figuras legales tendientes a la recuperación de activos derivados o puestos al servicio de conductas ilícitas.

Tales instituciones se han consolidado en instrumentos como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuya redacción y suscripción obliga a los estados parte a desarrollar estrategias integrales para enfrentar dichos fenómenos que incluso se han llegado a convertir en un riesgo para la seguridad nacional de los estados.

En ese contexto, es que se desarrollan nuevas técnicas de investigación, siempre bajo la rectoría judicial, así como los ya mencionados mecanismos para la recuperación de activos. La recuperación de activos se ha colocado como la actividad central de orden estratégico a efecto de que los estados puedan reivindicar el estado de derecho frente a quienes han pretendido quebrantarlo y han generado cuantiosos acervos patrimoniales para sí y sus círculos criminales.

Una de las conductas que la criminalidad organizada y la de servidores públicos tienen en común, es precisamente la de operación con recursos de procedencia ilícita, conocida también como lavado de dinero. A través de esta, se pretende consolidar la finalidad económica del crimen y ocultar el origen criminal de los recursos derivados del mismo. El modus operandi, tanto del crimen organizado como el de la corrupción, es la de destinar los acervos ilícitamente obtenidos, formalizando incluso la propiedad de los mismos a favor de prestanombres individuales o corporativos, ya sea a través de propiedades o cuentas financieras. No obstante esa formalización ellos continúan siendo los beneficiarios finales del bien, por eso jurídicamente se les denomina: beneficiarios reales, dueños beneficiarios, quien se ostenta como dueño, etc., ya que se describe una situación de hecho, no de derecho.

Como respuesta a dicho fenómeno que se vale del engaño, el fraude a la ley, la utilización de prestanombres y empresas fachadas, es que la legislación desarrolla figuras como la extinción de dominio, fundamentándose en un principio del derecho perenne y categórico: del fraude no se pueden derivar efectos jurídicos.

Por las anteriores razones, es que la extinción no se hace respecto de la propiedad. Se persigue jurídicamente la cosa, con independencia de la titularidad formal y oficial. Por esa razón, es que la figura reconocida en el derecho internacional, permite la reversión de la carga de la prueba.

La acción de extinción de dominio no tiene como objetivo la represión de conductas penales, por lo tanto no puede verse como un castigo al delincuente. De lo anterior se debe seguir que el estándar probatorio de dicha acción sea distinto al penal. La pretensión punitiva tiene el más alto estándar dentro del orden de un estado. En cambio, las acciones reales tienen otra naturaleza y otro tratamiento sustantivo y procesal. Dentro del derecho penal se encuentra la figura del decomiso que tiene vigencia y aplicabilidad. La inclusión de la extinción de dominio no contradice la pertinencia del decomiso. La extinción de dominio es una acción que hace evidente el fraude a la ley y el engaño en la pretensión de consolidar acervos patrimoniales.

El hecho de vincular, en el texto constitucional, la extinción de dominio a la acreditación de elementos del derecho penal, es un error que tiene repercusiones prácticas y técnicas. Lo anterior es así, ya que, además de generar problemas operativos dentro de las procuradurías y fiscalías, se impone desde la Constitución la necesidad de desarrollar una legislación para-penal que es inadecuada para los fines que se buscan.

El fracaso que han tenido las autoridades federales en la aplicación de la extinción de dominio, (en 2015-2106 solo se ganó un juicio por la cantidad de 90 mil pesos cuando el fenómeno del lavado de dinero puede estar llegando a niveles de 50 mil millones de dólares, de acuerdo a las cifras de criminalidad económica), tiene varios factores. Este Congreso debe reforzar su exigencia al gobierno federal para que rinda cuentas en este aspecto. Adicionalmente a lo anterior, es evidente que la extinción de dominio tiene fundamentos constitucionales erróneos que deben resolverse a la brevedad y de manera urgente. Es necesario desvincular en el texto constitucional la procedencia de la extinción del tema penal.

Actualmente la Constitución señala lo siguiente respecto de la Extinción de dominio:

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.”

Así, derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en la cual se plasmó por primera vez esta figura, surgió la obligación de expedir la Ley Reglamentaria que regulara su procedimiento para solicitar la acción de extinción, tomando como base las reglas emitidas.

En efecto, la extinción de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e independiente de la responsabilidad penal, y que no implica la imposición de una pena a un delincuente por la comisión de un delito, sino que se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, que se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados con observancia de las garantías del debido proceso.

Siguiendo la letra de la ley, con la aplicación del procedimiento de extinción se logran diversos fines relevantes:

1. Disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia;

2. Disminuir la capacidad operativa de los agentes criminales;

3. Atender al interés y beneficio de la sociedad, a través de la utilización de dichos bienes o el producto que se obtenga de los mismos;

4. Obtener recursos destinados a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos de la actividad ilícita;

5. Entre otros.

Lo anterior, sin que para ello, en los casos específicos antes previstos, resulte necesario, como actualmente sucede, la plena acreditación de la responsabilidad penal del inculpado.

No obstante lo anterior, la práctica de la figura de la extinción de dominio deja mucho que desear, ya su utilización es casi nula en las entidades federativas y a nivel federal el ministerio público no ha logrado separar la práctica y los estándares penales del procedimiento civil de la extinción de dominio, como ya se ha señalado.

El procedimiento de extinción de dominio que se propone regular en la carta magna se sustenta en los mismos principios constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de la garantía de audiencia.

Como ya se ha mencionado, el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en la Convención de Mérida contra la Corrupción, en los que se determina la obligación de los Estados parte de instrumentar procedimientos encaminados a la privación, con carácter definitivo, de algún bien de origen ilícito por decisión de un tribunal o de una autoridad competente, a**sí como considerar la posibilidad de revertir la carga de la prueba respecto del origen lícito de dichos bienes**, en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno, situación que el estado mexicano ha cumplido pero sin efectividad.

Al no tratarse de un tema penal y no constituir la causa eficiente para la procedencia de la acción, es que se hace perfectamente compatible el recepcionar la obligación mandatada tanto en la Convención de Palermo,

La extinción de dominio es una figura central en la estrategia de seguridad. Gracias a ella y sus correlativas diversos países han podido recuperar tranquilidad y orden. Tanto en Italia, como en Estados Unidos, Colombia, Guatemala y otras naciones, esta es una acción que se somete al arbitrio judicial de manera sistemática, y sus resultados son favorables en la restitución del orden en un contexto de estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

Bajo dicho escenario, es necesario replantear la figura de extinción de dominio en nuestro país, siguiendo la doctrina universalmente aceptada y que ha resultado exitosa en donde se ha aplicado.

Se propone que la acción sea imprescriptible a efecto de que no sea el simple transcurso del tiempo el que “legitimice” la posesión o la propiedad mal habidas.

Por las razones expuestas, se propone la siguiente enmienda al artículo 22, específicamente en relación con la figura de la Extinción de Dominio.

|  |  |
| --- | --- |
| **TEXTO VIGENTE** | **TEXTO PROPUESTO** |
| **Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.****No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:****I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;****II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:*****Párrafo reformado DOF 27-05-2015*****a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.****b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.****c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.****d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.****III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.** | **Artículo 22. …****No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación ~~el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109~~, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono ~~en los términos de las disposiciones aplicables,~~ ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.** **La acción de extinción de dominio será imprescriptible y se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción o de actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público, en los términos que señale la ley.****I. ~~Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;~~****~~II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:~~*****~~Párrafo reformado DOF 27-05-2015~~*****~~a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.~~****~~b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.~~****~~c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.~~****~~d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.~~****~~III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.~~** |

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia analizamos detenidamente las consideraciones y fundamentos en los que se funda la presente iniciativa de reforma constitucional, así como los documentos que acompañan la Minuta Proyecto de Decreto.

En este sentido, observamos que la misma tiene por objeto el de fortalecer la institución jurídica de la extinción de dominio, fijando que, la acción de extinción de dominio será imprescriptible y se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de la materia penal, que será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Del mismo modo la reforma contempla la modificación a la fracción XXX del artículo 73 a efecto de establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, la de expedir la legislación única sobre extinción de dominio.

Al respecto, coincidimos con quienes plantean la iniciativa en que la institución de la extinción de dominio es una figura central en la estrategia de seguridad.

En este sentido, estimamos que su adopción en nuestro texto constitucional en el año 2008 y la emisión de la respectiva ley federal, constituyeron un logro importante en la estrategia de combate al crimen, no obstante ello, después de 10 años de su utilización, es necesario evaluar los resultados de su implementación.

En relación a lo anterior, resulta valioso retomar el ejercicio efectuado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en relación a la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 22 y la Fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de Dominio, mediante el cual, comparan esta institución con la figura homóloga adoptada por Colombia, Guatemala, Estados Unidos e Italia.

Así, se observa que en nuestro país esta figura es limitativa y por lo tanto deja de lado actividades ilícitas que pudieran ser susceptibles de su aplicación.

De acuerdo con un estudio comparado entre Colombia y México en materia de extinción de dominio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Informe Anual de Labores de 2011 del Poder Judicial de la Federación, señalan que en Colombia en el año 2008 se encontraban 1,888 procesos judiciales en la fase inicial, 815 en trámite y 2,703 procesos judiciales por extinción de dominio; mientras que en nuestro país, durante el periodo 2010-2011 solo se tenían 3 procesos judiciales en la materia. Por otra parte, el referido centro, señala que en los mismos periodos en Colombia se obtuvieron 28,165 bienes y en México sólo 8.

Las Comisiones Unidas, del mismo modo, aluden que de acuerdo a lo plasmado en el Sexto Informe de Labores de la Procuraduría General de la República, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, en su apartado “Actuación del Ministerio Público como representante de los intereses de la Federación y de la Institución se iniciaron 230 juicios y se concluyeron 4, en materia de extinción de dominio”.

Del mismo modo, se informa que en esta materia, en México se presentaron ante el juez especializado 10 demandas correspondientes a siete inmuebles, 121 joyas, 4 numerarios en moneda nacional y 3 numerarios en dólares americanos; se obtuvieron 16 sentencias favorables con respecto a 6 inmuebles, 101 joyas, 8 numerarios en moneda nacional y 6 numerarios en dólares americanos por un monto total de 30 millones 384 mil 917 pesos mexicanos y 7 millones 7 mil 813 dólares americanos. Mientras que en Colombia el día 30 de agosto de 2018 el Fiscal General de la Nación, en su proceso de rendición de cuentas ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, declaró que durante el periodo 2017-2018 capturaron a 26,632 personas, afectando las finanzas de las mismas, logrando la extinción de dominio de 21 mil 342 bienes, que representan 10.7 billones de pesos.

Las cifras anteriores nos permiten concluir que es necesario realizar las modificaciones pertinentes a efecto de fortalecer la institución de la extinción de dominio en nuestro país para garantizar su funcionamiento eficaz.

En este sentido, quienes dictaminamos coincidimos en que resulta preponderante un replanteamiento constitucional de la institución.

Así, uno de los principales obstáculos para el adecuado funcionamiento de la figura de la extinción de dominio detectada por los legisladores federales, es que, no obstante, en el texto institucional se señala que es un proceso “autónomo” del proceso penal, esa afirmación es relativa, tal y como lo refiere la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 21/2015 (10a.) de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación en Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, que a continuación se transcribe:

|  |
| --- |
| https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Image/Plegar/PlegaArriba.png |

**EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA.**

De la interpretación teleológica del artículo 22, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal, en el sentido de que el procedimiento de **extinción** de **dominio** es jurisdiccional y autónomo del de materia penal, se concluye que dicha separación no es absoluta, sino relativa, porque la **autonomía** a que se refiere la disposición constitucional citada debe entenderse como la independencia de aquel que juzga sobre el tema de la **extinción** de **dominio** y del que ha de emitir una decisión en cuanto a la responsabilidad de quien está sujeto al juicio penal, de forma que tal distinción involucra independencia: a) en la normatividad que cada uno de ellos ha de aplicar en el proceso del que es rector; b) en el desarrollo de cada uno de los juicios; y, c) en la decisión que adopten sobre temas respecto de los cuales no compartan jurisdicción (básicamente la responsabilidad penal, por no ser éste un tópico sobre el que ambos jueces deban decidir); sin embargo, tal disociación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total, de manera que, generalmente, el Juez de **Extinción** de **Dominio** debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución intraprocesal, que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva, que el delito no se demostró. Al respecto, se parte de la base de que, desde su génesis, ambos procesos tienen como denominador común los hechos que dieron origen a una averiguación previa que, una vez escindida da lugar a dos tipos de juicio: 1) el penal (encaminado a la sanción por la comisión de delitos); y, 2) el de **extinción** de **dominio** (enderezado a declarar derechos patrimoniales), situación que impide afirmar la existencia de una **autonomía** absoluta, pues el propio artículo 22 constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sí. En efecto, el precepto constitucional citado prevé que la **extinción** de **dominio** procede respecto de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Así, dicho artículo permite afirmar válidamente que el legislador partió de la base de que, paralelamente al ejercicio de la acción penal, se ejercería la de **extinción** de **dominio**; de ahí que, en primer orden, el Estado (a través del Ministerio Público) habría de llevar a cabo las investigaciones para la persecución del delito e incluso, en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal de contar con los elementos necesarios para ello, pues sólo así se explica la aclaración en el sentido de que la **extinción** de **dominio** procede "aun cuando no se haya dictado (en el proceso penal) la sentencia que determine la responsabilidad penal", lo que supone que ha habido al menos una calificación a cargo de la autoridad judicial penal sobre la existencia de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal, como presupuesto para el ejercicio de la acción de **extinción** de **dominio**.

Toda vez que la acción de extinción de dominio no tiene por objeto la represión de conductas penales, la misma no tiene un carácter punitivo, y por lo tanto el estándar probatorio de la acción debe ser distinta al penal.

En este orden de ideas, coincidimos con lo plasmado en la minuta, sobre que la vinculación en el texto constitucional de la figura de la extinción de dominio a la acreditación de elementos del derecho penal, es un error que tiene repercusiones prácticas, técnicas y operativas.

En virtud de lo referido, estamos de acuerdo en que plasmar en el texto constitucional que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo, resulta adecuado.

Del mismo modo, estimamos que establecer la imprescriptibilidad de dicha acción y establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la expedición, de la legislación en la materia, son medidas legislativas, necesarias, proporcionales y razonables que fortalecerán la institución de la extinción de dominio siguiendo la doctrina universalmente aceptada y garantizando al mismo tiempo el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En atención a lo anterior, es que sometemos a su consideración el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 22 Y LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforman los artículos 22, segundo párrafo y 73, fracción XXX, y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

**Artículo 22. ...**

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La Ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.

**Artículo 73. ...**

**I.** a **XXIX-Z. ...**

1. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y
2. **...**

**Transitorios**

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia de este Decreto expedirá la legislación nacional única en materia de extinción de dominio.

**Tercero**. La Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, así como la legislación respectiva del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio que ordena el presente Decreto.

**Cuarto.** Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con fundamento en la legislación federal y local referida en el artículo transitorio anterior, así como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se verán afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y deberán concluirse y ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su inicio.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de enero de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman las fracciones III, y IV del artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 del mes de octubre de año 2018, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman las fracciones III, y IV del artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman las fracciones III, y IV del artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

La corrupción en México, es un problema de graves dimensiones que afecta de forma devastadora a la comunidad, tanto en lo económico, lo político y lo social, como hasta en lo cultural, esto representa un fenómeno que juntos gobierno y ciudadanía debemos de combatir, ya que lesiona la confianza en las Instituciones.

Así mismo, el flagelo de la corrupción genera inseguridad pública, porque promueve la impunidad y trastoca el estado de derecho a la que todos nos debemos de sujetar.

En ese sentido, la prevención y el combate de la corrupción debe de ser una de las prioridades principales en las que se deben de ocupar aquellos que detentan el poder público, para otorgarle a la sociedad el bienestar y la seguridad que tanto anhelan nuestros ciudadanos.

Ahora bien, el artículo 113 Constitucional prevé expresamente que el Sistema Nacional Anticorrupción, es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes del gobierno, que resulten competentes para la prevención, detección, y sanción de todas aquellas personas que incurran en responsabilidad administrativa por hechos de corrupción, así como para establecer las bases de coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México, para que las autoridades competentes cumplan con su cometido.

Dado lo anterior, es un ineludible compromiso legal que los Estados, al establecer sus Sistemas Locales Anticorrupción, debieron de instituir mecanismos jurídicos eficientes y suficientes, para lograr la tan anhelada prevención, detección, combate, y en su caso la correspondiente sanción de todas aquellas personas que incurran en responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, para que sean no nada más señalados, sino también castigados, sin privilegios ni distinciones de ninguna especie, ya sea que resulten ser servidores públicos o simples ciudadanos.

En ese sentido, y conforme a lo expresamente dispuesto en el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades federativas desarrollaran de forma homologada la integración, funcionamiento y atribuciones de los Sistemas Locales Anticorrupción,, y sus leyes deberán de contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que otorga la Ley del Sistema Nacional, estableciendo expresamente y de forma categórica, en dicho artículo de la Ley General antes citada, “ Que los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana de las Entidades Federativas deberán reunir como mínimo los mismos requisitos previstos por la Ley Federal Anticorrupción, y deberán ser designados mediante un procedimiento **análogo,** es decir, igual al previsto en la Legislación Federal para el Consejo de Participación Ciudadana”.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y en estricto apego a lo que disponen los artículos 16, en relación con los artículos 34 y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y sus correlativos de la Ley del Sistema Anticorrupción de Coahuila, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción local, deberán de cumplir con los mismos requisitos que prevé la Ley General del Sistema Anticorrupción para Ser designado Secretario Técnico, entre las cuales en las fracciones III, y IV, del artículo 34, de la norma Federal antes referida se establecen los requisitos ineludibles en el sentido de que, “los aspirantes deben de tener más de treinta y cinco años de edad al día de la designación, así como de poseer al día de su postulación una antigüedad mínima de diez años de su título profesional de nivel de licenciatura, y además deberán de contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de la Ley Anticorrupción que le permitan el desempeño de sus funciones”.

En ese sentido, y como indebidamente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, que se aprobó en la anterior Legislatura, se establecieron requisitos contrarios y menores a los que se contienen en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en cuanto a la edad de los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana, y respecto al requisito ineludible de poseer una antigüedad mínima de su título y experiencia profesional, ya que se redujeron de 35 a 30 años de edad, y de 10 a 5 años de antigüedad de su título y experiencia profesional, es por lo que resulta imperativo que se deban de homologar tales requisitos, para el efecto de que no exista ninguna contradicción entre la Legislación Federal y la Estatal del Sistema Anticorrupción.

Lo anterior es así, porque dado el análisis de la exposición de motivos de la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción, se puede entender que la voluntad e intención del Legislador o constituyente permanente, a nivel Federal, fue el de establecer dichos requisitos ineludibles de la edad y la experiencia profesional mínima, porque conforme al grave problema de corrupción que impera en nuestro País, los integrantes del Sistema Anticorrupción tanto a nivel Federal como Estatal, deben de ser personas con la suficiente capacidad, madurez y experiencia en el ramo del combate a la corrupción, para así poder lograr los altos fines que se pretenden con dicha legislación, que son el prevenir, investigar y en su caso sancionar los actos de corrupción que tanto agravian a nuestra comunidad.

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente dictamen, de lo cual podemos observar, que la misma tiene por propósito el de homologar la Ley Estatal Anticorrupción, con la Ley General del Sistema Anticorrupción, en lo referente a los requisitos del Secretario Técnico, específicamente por lo que hace a la edad requerida al dís de la designación que de acuerdo a la Ley General deberá ser de más de 35 años , (ya que la ley local vigente fija que es de contar con 30 años al día de la designación), y a la obligación de contar con Título Profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de 10 años al día de la designación (la ley local estipula 5 años de antigüedad mínima).

En este orden de ideas tal y como se aborda por el promovente en la exposición de motivos el constituyente permanente fijó en la Ley General un mandato de equivalencia, consagrado en el artículo 36 de dicho ordenamiento.

Esta disposición a la letra señala:

***Artículo 36.*** *Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las siguientes bases:*

***I. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional;***

***II.*** *Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones;*

***III.*** *Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija;*

***IV.*** *Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan;*

***V.*** *Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional;*

***VI.*** *La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, y*

***VII.*** *Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán* ***reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación******Ciudadana.***

En este orden de ideas a efecto de verificar la viabilidad de la propuesta, los integrantes de la presente Comisión, estimamos pertinenete analizar los alcances de la disposición antes citada.

Bajo este contexto, resulta útil referirnos a la Guía de Implementación para los Sistemas Locales Anticorrupción”, documento emitido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y por Transparencia Mexicana, como un instrumento que coadyuvara a los Congresos Locales a armonizar la legislación en la materia.

Dicho documento señala que “el *Sistema Nacional Anticorrupción que se creó con la reforma constitucional de 2015 no solo se compone de órganos federales, sino de 32 sistemas locales anticorrupción, que se integran a través de sus representantes*”.

Así, en el diseño del sistema “*se respeta el modelo federal de distribución de competencias, pero se integra a las entidades federativas a la responsabilidad en el combate a la corrupción”.*

En relación al punto que nos ocupa, en el referido documento, se hace una interpretación del artículo 36 vinculando su contenido con el artículo 7 relativo a la integración del Sistema Nacional, concluyéndose que:

*“De estos dos artículos se derivan varios ELEMENTOS ESENCIALES que deben ser considerados en la creación de los SLA [Sistemas Locales Anticorrupción]:*

1. *Las legislaturas locales cuentan con la facultad para crear leyes que establecerán la integración, atribuciones y funcionamiento de los órganos que formarán los SLA.*
2. *La integración y las atribuciones* ***deben ser equivalentes*** *a las que se establecen para los órganos del SLA.*
3. *Estos dos primeros elementos implican que los SLA* ***serán homogéneos en su integración y congruentes con sus funciones****,*
4. ***La integración tiene varios aspectos que deben considerarse:***
5. *Las atribuciones y funciones de cada órgano en lo particular y en su incorporación al SLA.*
6. *La colaboración y cooperación entre los distintos órganos para potenciar las atribuciones de los órganos colegiados que rigen el SLA.*
7. *La relación del SLA con el SNA y sus obligaciones de coordinación y cooperación.*
8. ***Los perfiles de los titulares de los órganos****, los procesos de nombramiento y remoción y sus responsabilidades en el ejercicio de sus cargos.*
9. *El establecimiento de las medidas de independencia y autonomía necesarias para el debido ejercicio de sus funciones y facultades.*
10. *La presidencia ciudadana del órgano colegiado que dirija el SLA es un aspecto fundamental de la integración, porque además lo representará ante el SNA.*

Realizada una interpretación sistemática de las normas en la materia, y tomando como referencia lo plasmado en la citada Guía, resulta para nosotros evidente que el mandato de equivalencia debe permear al perfil de los titulares de los órganos que conforman el sistema local, en atención a lo cual, hemos concluido dictaminar esta iniciativa en sentido positivo.

Así, para esta comisión dictaminadora, resulta indispensable adecuar nuestra sistema estatal anticorrupción, con lo dispone el artículo 36 y demás disposiciones de la Ley General.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO UNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV, DEL ARTÍCULO 34, DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 34.** Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:

1. **y II. …**
2. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación;
3. Poseer al día de la designación, una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de nivel de licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones;
4. **a X. …**

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 12 de febrero de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 08 del mes de noviembre del año 2018, se acordó turnar a estas comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 95, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“En fecha 30 de diciembre de 2014, se aprobó el Decreto número 696 en el Periódico Oficial (sic), número 104, que contiene la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*El objeto de la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, es establecer las bases para fomentar el desarrollo económico del Estado por medio de la competitividad, la planeación, generación de las condiciones económicas propicias, la instalación de la infraestructura necesaria para incentivar la inversión nacional y extranjera, y la generación de empleos permanentes y remunerativos, para lograr un entorno favorable para el desarrollo económico local, regional, nacional e internacional.*

*En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, se establece como objetivo prioritario el orientar la estructura productiva hacia los sectores estratégicos de cada una de las regiones de la entidad, en un marco de crecimiento económico sostenido y fortaleciendo las capacidades competitivas del estado.*

*El desarrollo económico es en su acepción más avanzada desarrollo integral, y pasa por una serie de fases que terminan por incorporar a todos los agentes económicos, en agentes de cambio para la transformación del entorno en que se desenvuelve una sociedad. Por lo que cada vez más, se generaliza la aspiración de un amplio sector económico, de ejercer su responsabilidad social a través de la instrumentación de programas y acciones en favor de la comunidad.*

*Coahuila es un estado que se enfoca no solo en el crecimiento, sino en el desarrollo armónico de todos sus sectores, y ese es precisamente el motivo por el que se incluye la responsabilidad social, como una virtud cuantificable en el perfil empresarial.*

*Los Consejos Regionales que se encuentran establecidos en la ley, se crean como instancias de coordinación y cooperación para la competitividad, planeación y vinculación, sin embargo, con el propósito de fomentar y fortalecer el desarrollo económico de las distintas regiones del estado a través de estos órganos colegiados, se modifica la disposición que crea dichos Consejos, con el fin de ampliar y precisar su objeto, a efecto de que se establezcan como instancias de coordinación y cooperación para impulsar acciones en materia de desarrollo económico, promoción de inversiones, generación de empleos, competitividad y vinculación con los sectores productivo y académico de cada una de las regiones de Coahuila, sin que se incluya lo que respecta al otorgamiento de estímulos e incentivos, ya que no forma parte de la naturaleza propia de los Consejos Regionales, el llevar trámites de esta índole, siendo como ya se mencionó, instancias de coordinación y cooperación entre el sector gubernamental, privado y académico.*

*Para un adecuado funcionamiento y cumplimiento de su objeto, se modifica también la integración de los Consejos Regionales, los cuales se conforman únicamente por el sector gubernamental, sin que se contemple en ellos los sectores productivo y académico, siendo en conjunto, factores importantes para el desarrollo económico de las regiones.*

*Es por ello, que resulta necesario para consolidar el desarrollo económico de las regiones y para que se impulsen políticas de inversión en el estado, fortalecer los Consejos Regionales, los cuales se integran por la persona titular de la Secretaría de Economía y Turismo, a cargo de la Presidencia del Consejo, una Secretaría Técnica y los Presidentes Municipales de los municipios de cada región, en ese sentido, se modifica su conformación para agregar como integrantes, además de los que ya cuenta, a tres miembros del sector privado de cada una de las regiones, un representante de una universidad pública y uno de una universidad privada de cada una de las regiones, un representante de un centro de educación tecnológica estatal y un representante de un centro de educación tecnológica federal de cada una de las regiones.*

*Al integrar al sector privado y académico a los Consejos Regionales, se busca promover la inversión y generación de empleos en nuevos polos de desarrollo, para acrecentar la cadena productiva que genere un progreso económico, competitivo y equilibrado, y que además, consolide las acciones necesarias para el desarrollo económico del estado, con la participación de todos sus componentes, facilitando el diálogo, diseño e implementación de estrategias y acciones para el desarrollo económico, que partan de lo regional hacia lo estatal.*

*Cabe destacar, que se designa para ocupar el cargo de la Secretaría Técnica de los Consejos Regionales, a la persona titular de la Dirección General de Mejora Regulatoria y Competitividad, adscrita a la Secretaría de Economía y Turismo, el cual se considera importante que así sea, toda vez que dicha Dirección es la que se encarga de mantener un lazo de vinculación estrecha con los sectores social, empresarial, educativo e institucional, lo que le permitirá dar seguimiento, de manera más eficaz, a los acuerdos que se tomen por los Consejos Regionales.*

*Se incluye además, como parte del funcionamiento de los Consejos, la posibilidad de invitar a las sesiones a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias relacionados con la naturaleza de los asuntos a tratar, otorgándoseles derecho a voz, más no a voto, con lo cual se asegura que las opiniones de los distintos sectores de cada región sean consideradas dentro de los acuerdos que se tomen dentro de los Consejos y lograr el aumento en la competitividad y desarrollo de cada región.*

*Con la finalidad de que los Consejos Regionales tengan definidas sus funciones, dirigidas al cumplimiento de su objeto, esto es, para fomentar el desarrollo económico, proponer las estrategias y acciones necesarias para elevar la competitividad de las regiones y avanzar en la simplificación administrativa, facilitando el establecimiento y operación de industrias, comercios y empresas de servicios, es que se reforman las atribuciones de dichos Consejos.*

*Los Consejos Regionales, al ser órganos de vinculación con la Secretaría de Economía y Turismo, los municipios y los sectores privado y académico, tienen la obligación de proteger la confidencialidad de la información que les haya sido proporcionada a las autoridades y órganos descentralizados, por parte de las empresas que deseen establecerse en las distintas regiones y pretendan acceder a los incentivos y estímulos fiscales.*

*Sin embargo, los Consejos conocen y tienen acceso a la información de todas las empresas, independientemente que pretendan acceder o no a los incentivos y estímulos fiscales, por lo que se amplía la obligación de los integrantes del Consejo, para guardar la confidencialidad de la información de todas las empresas y no solo de aquellas que pretendan acceder a dichos incentivos.*

*En fecha 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se determina la desindexación (sic) del salario mínimo, siendo modificado a Unidades de Medida y Actualización, por lo tanto al no encontrarse armonizado el artículo relativo a las sanciones que podrían imponerse a las infracciones a la ley, en el que se calculan conforme al salario mínimo, se reforma el artículo 39 para armonizarse a dichas Unidades de Medida y Actualización”.*

**TERCERO.-** Los integrantes de estas comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, coincidimos en que, para alcanzar los objetivos que plantea el Plan Estatal de Desarrollo, el legislar en materia de Desarrollo Económico, es indispensable para garantizar los beneficios de carácter social y económicos de los coahuilenses.

Es por ello, que el desarrollo económico y la competitividad debe ser siempre una prioridad de política pública, por lo cual estaremos siempre en buscar y consolidar las herramienta que sean necesarias para hacer posible la obtención de un ambiente propicio para la atracción de inversiones y la generación de empleos, asistidos de certidumbre legal.

Como bien se señala en la exposición de motivos de la iniciativa objeto de estudio, el martes 30 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial la Ley Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En dicha Ley, se dio vista de la importancia de coordinar acciones y esfuerzos para el desarrollo económico y de la competitividad de la entidad con los municipios, estableciéndose así, la creación de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico como instancias de coordinación y cooperación para la competitividad, planeación, vinculación y otorgamiento de incentivos y estímulos con los sectores productivos del estado, cuyo funcionamiento comprendería en las cinco regiones geográficas del estado, que son, Carbonífera, Centro – Desierto, Laguna, Norte y Sureste.

Es por lo anterior, que consideramos oportuna la presente reforma, ya que busca fomentar y fortalecer el desarrollo económico de las regiones del estado a través de estos órganos colegiados, modificando la disposición que crea dichos Consejos, con el fin de ampliar y precisar su objeto, a efecto de que se establezcan como instancias de coordinación y cooperación para impulsar acciones en materia de desarrollo económico, promoción de inversiones, generación de empleos, competitividad y vinculación con los sectores productivo y académico de cada una de las regiones de Coahuila, sin que se incluya lo que respecta al otorgamiento de estímulos e incentivos, ya que no forma parte de la naturaleza propia de los Consejos Regionales, el llevar trámites de esta índole, siendo como ya se mencionó, instancias de coordinación y cooperación entre el sector gubernamental, privado y académico.

Asimismo, se desprende de la iniciativa, que se modifica la integración de los Consejos Regionales, integrando los sectores productivo y académico, ya que actualmente solo se conformaba por el sector gubernamental, lo cual consideramos acertado ya que como lo señala el promovente, dichos sectores, son factores importantes para el desarrollo económico de las regiones.

A razón de lo anterior, resulta ineludible para el fortalecimiento del desarrollo económico de nuestro estado, el fortalecimiento de los Consejos Regionales, incluyendo, a tres miembros del sector privado de cada una de las regiones, un representante de una universidad pública y uno de una universidad privada de cada una de las regiones, un representante de un centro de educación tecnológica estatal y un representante de un centro de educación tecnológica federal de cada una de las regiones.

Para los integrantes de estas comisiones, representa un acierto el involucrar al sector privado y académico a dichos Consejos Regionales, con el propósito de que en conjunto, se promueva la inversión y generación de empleos, facilitando el diálogo, diseño e implementación de estrategias y acciones para el desarrollo económico de cada una de las regiones de nuestro estado.

También consideramos oportuno, que en quien recaiga el cargo de la Secretaría Técnica de los Consejos Regionales, sea la o el titular de la Dirección General de Mejora Regulatoria y Competitividad, adscrita a la Secretaría de Economía, ya que dicha dirección es el vínculo con los sectores social, empresarial, educativo e institucional, por lo que coincidimos que ello permitirá dar un mejor seguimiento a los acuerdos tomados por los Consejos Regionales.

Otro punto que se incluye en la iniciativa, es la de invitar a las sesiones de los Consejos, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad, otorgándoseles derecho a voz, más no a voto, para que puedan exponer conocimientos y experiencias relacionados con la naturaleza de los asuntos a tratar, lo cual creemos de gran valor, ya que otorga un sentido de pertenencia de la sociedad en la contribución al desarrollo de su comunidad.

Dentro de las reformas en cuanto a las atribuciones de dichos Consejos, consideramos oportuno el que se amplíe la obligación de los integrantes del Consejo, para guardar la confidencialidad de la información de todas las empresas y no solo de aquellas que pretendan acceder a dichos incentivos.

Por último, se propone una reforma el artículo 39, relativo a las sanciones que podrían imponerse a las infracciones a la ley, en el que se calculan conforme al salario mínimo, modificándose a Unidades de Medida y Actualización, para que de esta manera quede armonizado al Decreto en materia de desindexación del salario mínimo.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ÚNICO.** Se **reforman** los artículos 9, 31, 33, 35, 36 y las fracciones I, II y III del artículo 39 de la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 9.-** Es facultad indelegable del Gobernador del Estado otorgar los estímulos e incentivos fiscales de carácter general, así como los apoyos específicos que sean necesarios para atraer inversiones al Estado, propuestos por la Secretaría y que sean aprobados por el gabinete legal, constituido en Consejo de Estado conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 31.-** Por disposición de la presente Ley se crean los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, como instancias de coordinación y cooperación con el objeto de impulsar acciones en materia de desarrollo económico, promoción de inversiones, generación de empleos, competitividad y vinculación con los sectores productivo y académico de cada una de las regiones del Estado.

**Artículo 33.-** Los Consejos Regionales estarán integrados por:

1. Una Presidencia a cargo de la persona titular de la Secretaría de Economía;
2. Una Secretaría Técnica cuyo titular será designado por la Presidencia;
3. La persona titular de la presidencia municipal de cada uno de los municipios de la región;
4. Tres miembros del sector privado de cada una de las regiones;
5. Un representante de una universidad pública, un representante de una universidad privada de cada una de las regiones del estado;
6. Un representante de un centro de educación tecnológica estatal y un representante de un centro de educación tecnológica federal de cada una de las regiones; y
7. Un representante del Congreso del Estado que será alguno de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.

Los miembros y representantes señalados en las fracciones IV, V y VI de este artículo, serán invitados por la persona titular de la presidencia del Consejo, quienes en caso de aceptar la participación, serán nombrados como integrantes del Consejo Regional de Desarrollo Económico que corresponda. El cargo de Consejero será honorífico.

Los Consejos Regionales podrán invitar a sus sesiones a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias relacionados con la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.

**Artículo 35.-** Los Consejos Regionales deberán mantener la confidencialidad de los datos que les proporcionen las autoridades y organismos públicos descentralizados, de las empresas que deseen establecerse en el Estado.

**Artículo 36.-** Los Consejos Regionales de Desarrollo tendrán las siguientes atribuciones:

1. Proponer, en el ámbito de su competencia, estrategias en materia de desarrollo económico, competitividad y vinculación para el desarrollo integral de cada una de las regiones, en coordinación con la Secretaría;
2. Establecer mecanismos de cooperación con la Secretaría para la atracción de inversiones;
3. Analizar, en el ámbito de su competencia, el marco normativo relativo a la materia de desarrollo económico, para proponer las reformas que se estimen necesarias;
4. Coordinar con la Secretaría, en el ámbito de su competencia, las acciones que deban implementarse para el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, en materia de desarrollo económico;
5. Proponer, en el ámbito de su competencia, estrategias en materia de mejora regulatoria y simplificación administrativa, para la homologación de trámites y reducción de requisitos y plazos que faciliten y agilicen el establecimiento y operación de industrias, comercios y empresas de servicios; y
6. Las demás que se establezcan en esta u otras disposiciones aplicables.

**Artículo 39.-** …

1. Hasta con 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en los casos previstos en las fracciones I, III, IV y VI;
2. Hasta con 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en los casos previstos en la fracción II; y
3. Hasta con 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de lo previsto en la fracción V.

**…**

**…**

**…**

**…**

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Los Consejos Regionales deberán ser instalados dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.Dip. Fernando Izaguirre Valdés (Coordinador), Dip. Verónica Boreque Martínez González (Secretaria), Dip. Juan Antonio García Villa, Dip. Josefina Garza Barrera.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 12 de febrero de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ****(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), MEDIANTE LA CUAL SE PROPONE ARMONIZAR LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LO RELATIVO AL TRÁMITE DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y;**

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, en fecha 26 de junio de 2018, se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mencionada en el proemio de éste dictamen.

**SEGUNDO.** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la iniciativa fue remitida a ésta Comisión para efectos de estudio y dictamen el día 27 de junio de 2018.

**TERCERO.** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza esta Comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que la propuesta del promovente se basa en realizar las adecuaciones necesarias en los artículos 159, Fracciones II y III y 161 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con el fin de armonizarla respecto a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en lo relativo al trámite de las reformas constitucionales.

**SEGUNDO.** Que la Iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Como lo señalé en otra iniciativa, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 2 de diciembre de 2016, publicó la reforma a los artículos 60 y 196, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Coahuila.

Reitero que la iniciativa presentada por el entonces Diputado José María Fraustro Siller, hoy actual Secretario de Gobierno, fue aprobada por unanimidad.

La reforma constitucional modificó, por un lado, el trámite legislativo para las reformas constitucionales, eliminando la segunda lectura, tanto de la iniciativa como del dictamen.

Por otro lado, se modificó el artículo 60 para eliminar la obligación de que, tratándose de iniciativas de ley o decreto en materia municipal, fueran notificadas a los Ayuntamientos para los efectos de que éstos emitieran opinión al respecto.

Sin embargo, y a pesar de que las reformas constitucionales se publicaron en diciembre de 2016, la Legislatura anterior concluyó su período sin hacer las modificaciones correspondientes en la Ley Orgánica del Congreso.

En efecto, si se revisa el texto actual de las fracciones II y III del artículo 159 de la Ley Orgánica, relativo al trámite de reformas constitucionales, se constatará que dicen:

*“Artículo 159.- - - - - - - - -“*

*(…)*

*“II. Dos lecturas a la Iniciativa con un intervalo de diez días, turnándose desde luego a comisión;*

*III. Dictamen de la comisión respectiva al que se darán dos lecturas con un intervalo de seis días;”*

*(…)*

Lo mismo ocurre con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Congreso. Los párrafos primero, segundo, tercero y sexto, incluidos sus incisos del a) al e), del artículo 161 se refieren, directa o indirectamente, a lo que se eliminó en la reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2016.

La Legislatura anterior, después de aprobar por unanimidad la reforma constitucional, dejó pasar casi trece meses sin hacer las adecuaciones correspondientes en la Ley Orgánica del Congreso.

Esto plantea, sobre todo en el caso de las fracciones I y II del artículo 159 de la Ley Orgánica, una antinomia en relación con las fracciones I y II del artículo 196 de la Constitución Local. Desde luego, como todos sabemos, cuando una norma secundaria entra en contradicción con la Constitución, prevalece la norma constitucional por su jerarquía superior.

No obstante lo anterior, es lamentable que la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo conserve, en su texto vigente, estas contradicciones, máxime tratándose del trámite legislativo de las reformas constitucionales.

Y es más lamentable si se considera que, la anterior Legislatura, solo en el último mes de su periodo, realizó tres reformas al texto de la Ley Orgánica, me refiero a las reformas publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fechas 22, 26 y 29 de diciembre del año pasado.

**TERCERO.** Que por lo anteriormente expuesto, ésta Comisión procedió al análisis de dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto a fin de poder dictaminar la viabilidad de la misma.

Que al tratarse de una “armonización” entre lo establecido en la Constitución del Estado con la Ley Orgánica no se advierte riesgo alguno en la alteración de la rigidez constitucional toda vez que se trata de distintos grados en el orden jerárquico normativo en virtud de que precisamente la armonización pretendida versa entre una “ley primaria”, es decir, la Ley Suprema Coahuilense de acuerdo al 194 de la Constitución del Estado, y la pretensión de armonizar el texto de una “ley secundaria” con la referida Ley Suprema Coahuilense.

Aunado a lo anterior, la doctrina distingue dentro de las “leyes secundarias” a las leyes secundarias “*simpliciter”* y las leyes secundarias *“secundum quit”* siendo la función de éstas últimas el desarrollo de un texto constitucional, regulando la estructura o el funcionamiento de algún órgano de autoridad. Precisamente las leyes orgánicas forman parte de las leyes “secundum quit”.

Por otro lado, la cuestión jurídica de la rigidez constitucional radica en que mediante obstáculos procesales se dificulta el mecanismo de elaboración de normas constitucionales lo cual garantiza la permanencia de los textos de la Ley Suprema. Es decir, a través de un procedimiento agravado que se diferencia del legislativo ordinario por su mayor complicación, siendo éste procedimiento especial de elaboración normativa una condición formal cuyo cumplimiento permite identificar a las normas así obtenidas como “constitucionales”.

Así pues, la Supremacía Constitucional en nuestro Estado se consagra en el artículo 194 cuyo segundo párrafo dice a la letra **“*Esta Constitución, las Cartas de los Derechos Fundamentales Locales y demás leyes fundamentales locales, serán parte de la Ley Suprema Coahuilense…”***. De igual forma el artículo 133 de nuestra Carta Magna dice a la letra **“*Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión*”.** En apoyo al derecho comparado, la más antigua de las constituciones escritas, la de Estados Unidos de América de 1789, consagra el concepto de Supremacía Constitucional en su artículo VI **“*Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país…”.***

Ahora bien, el grado de rigidez propio de una constitución escrita, garantiza a la Ley Suprema o “Ley Primaria” su permanencia y la distingue de la legislación ordinaria “Ley Secundaria” por medio de los procedimientos especializados o agravados. Así, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de América, en su artículo V establece su procedimiento agravado estableciendo que ***“Siempre que las dos terceras partes de ambas cámaras lo juzguen necesario, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien, a solicitud de las legislaturas de los dos tercios de los distintos Estados, convocará una convención con el objeto de que propongan enmiendas, las cuales, en uno y otro caso, poseerán la misma validéz que si fueran parte de esta constitución”.***En ese mismo sentido nuestra Carta Magna en su artículo 135 establece su procedimiento especial de reforma a la Ley Suprema que a la letra dice: **“*La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.*** Para el caso particular de la Constitución del Estado de Coahuila, la Ley Suprema Coahuilense se encuentra protegida por el procedimiento agravado consagrado en el artículo 196 que establece un procedimiento detallado, incluso con matices de ley secundaria “*secundum quid”* ya que el mismo precepto desarrolla el texto constitucional en cierto grado estableciendo que ***“La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:***

***I. Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le dará una lectura y se turnará a la Comisión correspondiente.***

***II. Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.***

***III. Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes.***

***IV. Publicación del expediente por la prensa.***

***V. Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los ayuntamientos del Estado.***

***VI. Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos ayuntamientos.***

***VII. Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.***

Bajo esta lógica, y al tratarse de la armonización de una “Ley Secundaria” con una “Ley Primaria”, lo cual no implica de ninguna forma la activación del procedimiento especial agravado propio de una reforma a la Ley Suprema Coahuilense, se concluye que la rigidez constitucional de la carta magna coahuilense en ninguna forma se ve vulnerada por lo que se subraya la importancia de armonizar nuestra Ley Orgánica con lo ya estipulado en la Constitución Local a fin de no caer en acciones de inconstitucionalidad al llevar a cabo el trámite de una manera incorrecta; que si bien es cierto, en el ejercicio continuo del Legislativo no se lleva a cabo, también es cierto que el no armonizar las leyes secundarias sólo hacen que se genere un desaseo jurídico.

Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta ineludible para éste órgano legislativo cumplir con las acciones necesarias para armonizar las disposiciones normativas que nos rigen, para el efecto de homogenizar las normas de rango constitucional con las orgánicas como las que se abordan en la Iniciativa que hoy aquí se dictamina, y que en ese sentido, quede puntualmente atendida la reforma constitucional aprobada por la anterior legislatura con el texto actual de la Ley Orgánica de éste Poder Legislativo.

En consecuencia por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO UNICO.** Se modifica el contenido de los artículos 159, Fracciones II y III y 161 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

***…***

***ARTÍCULO 159.*** *…*

*I. …*

*II. Lectura de la iniciativa, turnándose desde luego a comisión;*

*III. Dictamen de la comisión respectiva;*

*IV al VIII. …*

*…*

***ARTÍCULO 161.*** *Cuando un Ayuntamiento presente una ley o decreto en materia municipal, el Congreso del Estado podrá pedir la opinión del Ejecutivo del Estado, antes de hacer dictamen.*

*Las normas fiscales o presupuestales que deban ser aprobadas para el ejercicio fiscal del año siguiente no estarán sujetas al trámite previsto en este artículo.*

…

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, (Coordinador), Dip. Jaime Bueno Zertuche (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Jesús Andrés Loya Cardona, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. Juan Antonio García Villa, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de Noviembre de 2018.

**POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTICULOS** |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** | **SI** | **CUALES** |
| Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, (Coordinador) |  |  |  |  |  |
| Dip. Jaime Bueno Zertuche (Secretario) |  |  |  |  |  |
| Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos. |  |  |  |  |  |
| , Dip. Jesús Andrés Loya Cardona. |  |  |  |  |  |
| Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor. |  |  |  |  |  |
| Dip. Juan Antonio García Villa. |  |  |  |  |  |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández. |  |  |  |  |  |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. |  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21 fracción II; 82; 88 fracción IX; 97 fracciones VI, VII, VIII y 132 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a las Iniciativas presentadas tanto por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario General Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, como por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés del Grupo Parlamentario “del Partido Acción Nacional”, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en diversas sesiones celebradas dentro del Segundo Periodo Ordinario del Congreso del Estado, se acordó turnar a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por parte de la mesa directiva del Congreso del Estado, los Proyectos de Decreto por los que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en materia de regulación y organización interna del Congreso del Estado de Coahuila.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dichos acuerdos, la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, los Proyectos de Decreto a que se ha hecho referencia, para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Las propuestas de reformas que se analizan, fueron del conocimiento público de los integrantes de esta Legislatura desde su presentación en el pleno de esta Soberanía, mismas que se pusieron a disposición de los integrantes de esta Comisión desde ese momento, y en ellas se propone esencialmente una reforma para que en la conformación de las comisiones dictaminadoras permanentes, se garantice en todo momento la paridad de género de acuerdo al número de sus integrantes, así como un cambio en el plazo para la entrega de los dictámenes que van a ser sometidos a votación por parte del Pleno del Congreso del Estado, y una modificación en el nombre de una de sus comisiones permanentes, todo lo cual implica la modificación de las diversas disposiciones que se refieren en el presente proyecto.

En la primera de las iniciativas a que se alude en este dictamen, y que corresponde a la presentada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, dicha Legisladora la baso entre otras consideraciones en las siguientes:

“… Mucho se ha trabajado a favor, de revertir esta desigualdad histórica, en principio el reconocimiento legal fue un propósito fundamental para alcanzar mejores niveles de vida, de ahí, que el párrafo primero del Artículo 4º Constitucional, sea un hito histórico en la igualdad de género, al consagrar que “*El varón y la mujer son iguales ante la Ley”.* Derivado de esto, se promulgó a nivel general la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, detonando así también a nivel local la integración de la misma en el cuerpo normativo.

En dicha ley, de suma importancia en la tutela de equidad de género, se manejan términos que precisan las atribuciones a cumplir para lograr el mejor desarrollo de inclusión e igualdad; uno de dichos términos es la Igualdad Sustantiva, la cual la define como “*el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”*. La igualdad sustantiva permite reconocer que las mujeres enfrentan mayores retos para incorporarse a la vida laboral activa, ya que no hay acciones que permitan coordinar el cuidado de sus hijos o de su hogar con las exigencias laborales.

El fin último de cada uno de nosotros, quienes servimos al pueblo para lograr un mejor país, un mejor Estado, es lograr establecer las acciones encaminadas a lograr una igualdad sustantiva y objetiva en el bien económico, político, social y cultural. Analizando dichos ámbitos, observamos que dentro de la función pública estatal, las mujeres ocupan cada vez más un porcentaje que se va acrecentando; y no es exclusión dentro de este Honorable Órgano Legislativo el cumplir en todo momento con dichos principios de igualdad, ya que vemos la cohesión en criterios y actuar dentro de las comisiones establecidas en este Congreso.

Sin embargo, la paridad de número al conformar las comisiones o constituir los comités, respecto al criterio de equidad e igualdad de género, no es del todo positivo. Debemos garantizar la Igualdad Sustantiva de la que tanto hincapié venimos haciendo, y garantizar el desarrollo equilibrado entre las y los Diputados integrantes de la presente Legislatura…”.

En ese mismo orden de ideas, en lo que respecta a la Iniciativa que se dictamina presentada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, al pleno de esta soberanía fechada el 11 de septiembre de 2018, la sustenta en las siguientes consideraciones:

“ …Que el Senado de la República dictaminó de manera positiva, en la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, el acuerdo donde se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas a que, si no se cuenta con una Comisión de la Familia, se realice el trabajo legislativo para que esto sea posible.

La familia es un grupo social en donde los integrantes se deben regir por valores fundamentales, como lo son el respeto, la tolerancia, equidad, justicia, paz, honestidad, entre otros, pero lamentablemente estos conceptos se han ido perdiendo con el paso del tiempo y de las generaciones.

De manera precisa la Constitución General de la República, tutela al núcleo familiar, en su artículo 4° al establecer lo siguiente:

***“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.***

Ahora bien, en la misma disposición de la ley en comento, el artículo 4° en su noveno párrafo cita:

***“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.***

Esto puede interpretarse en que la niñez tiene un sentido muy importante en la familia, de ahí radica el desarrollo o decrecimiento de una sociedad, siendo el Estado el obligado a garantizar de manera concreta, la unión familiar.

Estableciendo un enlace entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, se cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16, numeral 3, que a la letra señala:

***“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.***

Como integrantes del Poder Legislativo del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es nuestro compromiso actuar en pro de la familia, ya que el tejido social se ha ido desgastando por acciones u omisiones de la autoridad, que, a la brevedad, debe someter a análisis temas trascendentales como lo son la unión y el desarrollo familiar...”.

Ahora bien, con base en las consideraciones y las exposiciones de motivos en las que la Diputada Verónica Boreque Martínez González, como el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, sustentan sus respectivas iniciativas de reforma a diversos dispositivos legales de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de esta comisión arriban a la conclusión de que efectivamente, sus propuestas de reformas deben de ser dictaminadas favorablemente.

Lo anterior es así, ya que en cuanto a la iniciativa de la Diputada primeramente mencionada, es de destacarse que b*ajo una interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro- persona, reconocido en el artículo 1° y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a considerar la inclusión del postulado de paridad, disposiciones normativas que se enmarcan en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquemas normativos que conforma el orden jurídico nacional y que ponen de manifiesto que la paridad de género está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos sexos, en auténticas condiciones de igualdad.*

*En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno, de ahí, que su iniciativa resulte viable y procedente conforme a las consideraciones y fundamentos de derecho que se invocan en el presente dictamen.*

Ahora bien, en cuanto a la primera de las iniciativas que plantea el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, respecto a la necesidad de modificar el nombre de la comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, por el de Comisión de Educación, Cultura, Familia y Civilidad, tal pretensión va de acuerdo con armonizar nuestro trabajo legislativo con el acuerdo y exhortación que el Senado de la República efectuó a las Legislaturas de los Estados, para el efecto de que se conformaran en su seno las respectivas Comisiones de la Familia, dado que simplemente se persigue como objetivo general el fortalecimiento de las familias mexicanas y el desarrollo humano de cada uno de sus integrantes, de ahí, que el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados, así como todos sus entes de Gobierno, tengan la obligación de proteger la organización y desarrollo de la familia como el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros.

Esta realidad jurídica y política demanda de esta Legislatura un análisis permanente sobre la realidad de las más de 30 millones de familias que hay en el país.

Eso es así, dado que podemos observar diversos fenómenos que tienen su origen o consecuencia en el debilitamiento familiar como puede ser la violencia al interior de las familias mexicanas, o en las escuelas, las adicciones, y otros problemas apremiantes.

Ahora bien, esa armonización en el nombre de la comisión que propone el legislador Fernando Izaguirre Valdés, en su iniciativa va acorde a lo que expresamente se establece en los artículos 1° y 2° de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, en el sentido de que es deber del estado proteger la organización y el desarrollo de la familia, así como de establecer los mecanismos a través de los cuales se garanticen los derechos de las personas que la integren, para hacerlos efectivos y reales, reconociendo a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad en la que se tiene como propósito la convivencia estable de sus miembros, la ayuda mutua, y la satisfacción de necesidades de subsistencia cuando corresponda, en ese sentido, toda familia tiene el derecho a la protección de la sociedad y del estado, de ahí que dicha iniciativa que se dictamina se considere procedente para la modificación del nombre de la comisión que se propone.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y proponer a consideración del H. Pleno de esta Legislatura, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 21 fracción II; 82; 88 fracción IX; 97 fracciones VI, VII, VIII y 132 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:**

**…**

**ARTÍCULO 21.-…**

I…

II…

Excepcionalmente, podrán formar parte de más comisiones o comités de los señalados en el párrafo anterior, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno, tomando en consideración la proporcionalidad del número de integrantes de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en el Congreso**, *procurando en todo momento observar el principio de paridad de género.***

III al XII…

…

**ARTÍCULO 82.-…**

Las Comisiones Permanentes, se integrarán en lo general con un máximo de siete diputados y diputadas; y, excepcionalmente, podrán integrarse con nueve, en aquellos casos en que a propuesta de la Junta de Gobierno lo apruebe el Pleno del Congreso y siempre y cuando se observe lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de esta ley, con relación al número de comisiones de las que pueden formar parte los diputados ***y diputadas, procurando en todo momento observar el principio de paridad de género en la conformación del número de sus integrantes, hasta donde sea posible.***

**Todos aquellos asuntos que sean turnados a las comisiones, serán analizados, estudiados y dictaminados con perspectiva de género.**

**…**

***“ARTÍCULO 88.-*** *…*

*…*

***IX. De Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas;***

*…*

***ARTÍCULO 97.- La Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas conocerá de los asuntos relacionados con:***

*…*

***VI. Acciones para el fortalecimiento del núcleo familiar;***

***VII. Fomentar la comunicación entre los miembros de las familias;***

***VIII. Concientizar a los integrantes de las familias sobre la importancia de los valores;***

*…*

**ARTÍCULO 132.-…**

Se integrarán por cinco Diputadas o Diputados, **observando lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de esta ley, *así como el principio de paridad de género en cuanto al número de sus integrantes,* siendo** designados por el Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno, de los cuales uno será la o el Presidente, otro será la o el Secretario y los tres restantes tendrán el carácter de vocales. Las o los vocales podrán suplir en sus faltas temporales a la o el Presidente y a la o el Secretario, atendiendo al orden de su vocalía.

…

*…*

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO TERCERO**.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de febrero de 2019.

**POR LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUÁLES** |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(COORDINADOR)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |  |  |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO A INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE EN TODO EL ESTADO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, en conjunto con las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con el fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar ante este H. Pleno del Congreso la presente **Proposición con Punto de Acuerdo**, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Donando sangre regalamos vida. La donación de sangre es el procedimiento médico más noble porque se realiza de manera voluntaria por las personas. La sangre humana no puede ser sintetizada ni puede remplazarse.

A partir del año 1987 se prohíbe en nuestro país la donación de sangre remunerada, haciendo indispensable arraigar en la sociedad una cultura altruista, de solidaridad y fomentar el deber moral y social en cada uno de nosotros de contribuir a salvar la vida de otras personas.

En un solo acto de donación de sangre se puede ayudar a salvar tres vidas. Al separar la sangre se extraen componentes como los glóbulos rojos, que ayudan a los pacientes que padecen anemia y a quienes hayan sufrido de alguna pérdida de sangre a raíz de una lesión o un accidente. Por su parte, las plaquetas se proporcionan a los bebés con infecciones graves, y a los que padecen leucemia o se encuentran bajo tratamiento de quimioterapia. Finalmente, el plasma por su alto contenido de proteínas, ayuda a las personas con enfermedades hepáticas.

Además de la satisfacción de ayudar, existen múltiples beneficios para los donantes entre los que se destacan la reducción del riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, limpia los niveles de hierro de la sangre, estimula la producción de células sanguíneas, depura triglicéridos y mejora el flujo sanguíneo. Al realizarse de manera constante cada seis meses, reduce la probabilidad de padecer enfermedades circulatorias y disminuye la posibilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer como por ejemplo de garganta, estómago y pulmón.

La donación sanguínea es un procedimiento que dura alrededor de una hora y se realiza de manera segura. Durante la extracción se utiliza equipo estéril, nuevo y desechable para cada persona, por lo que no existe riesgo de contraer una infección de transmisión hemática. El cuerpo reemplaza los líquidos perdidos en las 24 horas posteriores a la donación y se restablece totalmente la sangre en 60 días aproximadamente, por lo que una persona puede donar durante su vida sin temor de sufrir algún riesgo, 5 veces al año y contribuir con la captación de hemocomponentes a las necesidades de 15 personas.

Coahuila cuenta con más de 20 bancos de captación sanguínea, ocupando el tercer lugar a nivel nacional de donación altruista. Sin embrago aún estamos lejos de alcanzar el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un suministro suficiente y seguro de sangre para las transfusiones, contando solo con un 8 por ciento de donación voluntaria y altruista, de los cuales 99.9 por ciento son sujetos obligados que donan su material sanguíneo como reposición y el 0.01 restante es bajo el esquema de voluntariado o donación altruista.

En efecto, México es el país con menos disposición de donantes de sangre de toda América Latina, registrando anualmente un millón 700 mil donaciones altruistas del líquido vital, cifra por debajo de los cinco millones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Garantizar el acceso universal a la sangre segura para transfusión exige el fortalecimiento de estrategias claves como son: la autosuficiencia de sangre y hemocomponentes a través de la donación voluntaria de sangre no remunerada, la mejora de la calidad de la sangre donada (desde el brazo del donante hasta el brazo del receptor), la optimización del uso apropiado de la misma, el fortalecimiento del recurso humano, la adopción de los nuevos avances y el establecimiento de alianzas estratégicas con los diferentes sectores que intervienen en el área.

Es por ello que recibimos con gran agrado la campaña de donación altruista que bajo el lema “Regala amor, dona sangre”, la Secretaría de Salud del Estado llevo a cabo durante el mes de febrero la campaña en centros comerciales de la localidad, con la finalidad de fomentar esta práctica en forma regular, voluntaria y no remunerada.

Sin embargo, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional instamos a que se forme una campaña permanente de donación de este vital componente, abarcando a dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. Nosotros desde el Congreso esperamos poder contribuir a salvar vidas.

No esperemos encontrarnos en un estado de necesidad para mostrar interés en la donación altruista. Donar sangre fortalece la esperanza de vida de un gran número de personas, es deber de todos promover y contribuir con esta noble causa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que en conjunto con los municipios intensifique las campañas de donación voluntaria de sangre, abarcando a todas las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de consolidar la cultura de la donación altruista en todas las regiones del Estado.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de marzo de 2019**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,** **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
|  **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS**  |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.-**

**Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, con el objeto de solicitar al alcalde de la ciudad de Frontera, Florencio Siller Linaje remueva a la brevedad del cargo a su Director Jurídico Alain Obed Mendoza por representar una amenaza hacia la integridad de los periodistas, lo anterior en virtud de las violaciones graves al derecho humano de libertad de expresión que ha cometido.**

**CONSIDERACIONES:**

Los valores que corresponden a una sociedad abierta y democrática se basan en la libertad y la igualdad. Nuestra Constitución reconoce el pluralismo ideológico, por lo que ninguna ideología puede establecerse en calidad de estatal u obligatoria. Así por ejemplo, éste Poder Legislativo en Coahuila, ha predicado con ejemplo de civilidad enviado un claro mensaje a los ciudadanos de que en ésta Honorable Representación impera la pluralidad sobre la intolerancia y encontramos en la primera la coexistencia pacífica de las ideas.

Precisamente, es ésta pluralidad lo que tanto enriquece a éste máximo cuerpo de representación en un Estado tan grande y tan diverso como Coahuila, donde la libre expresión de las ideas se predica desde ésta tribuna y se materializa en los trabajos que hemos concretado y habremos de concretar en los próximos periodos de sesiones.

La semana pasada, en la ciudad de Frontera Coahuila, vimos como Alain Obed Mendoza, quien es director jurídico de la administración municipal que encabeza Florencio Siller Linaje, amenazó públicamente a cualquier persona que se atreviese a criticar al alcalde y hablar mal de su persona o de cualquier miembro de la administración. En un hecho por demás lamentable, quedo demostrado la inmadurez política y el alto grado de intolerancia ante la libre expresión de las ideas por parte del Alcalde y sus empleados.

Al parecer el alcalde Florencio ha olvidado que los cargos públicos son prestados por los ciudadanos y que a ellos nos debemos y es a ellos a quienes hay que dar resultados.

Es urgente que las autoridades de todos los niveles promuevan y garanticen condiciones seguras para los periodistas y los medios de comunicación. Por nuestra parte vigilaremos de cerca que las leyes sean aplicadas ante los servidores públicos que violenten los Derechos Humanos y pongan en riesgo la integridad de las personas.

La permanencia del director jurídico del municipio de Frontera es insostenible. La Asociación de Reporteros y Corresponsales de Coahuila y Durango ha condenado éstas acciones y la Organización Internacional “artículo 19”, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, no solo también ha condenado estos lamentables dichos, sino que ha documentado otras agresiones contra la libertad de expresión de periodistas locales por parte del alcalde Florencio Siller Linaje y sus funcionarios.

La libre expresión de las ideas es un derecho humano que reconoce nuestra Constitución federal y local, nada ni nadie puede violentar éste ni otros derechos humanos que tenemos reconocidos como mexicanos. En México y en Coahuila, nada ni nadie por encima de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo en la vía de urgente y obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

**ÚNICO.- Se Solicita al alcalde de la ciudad de Frontera, Florencio Siller Linaje remueva a la brevedad del cargo a su Director Jurídico Alain Obed Mendoza por representar una amenaza hacia la integridad de los periodistas, lo anterior en virtud de las violaciones graves al derecho humano de libertad de expresión que ha cometido.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

***ATENTAMENTE***

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, A 05 de Marzo de 2019.**

**DIP. MARCELO TORRES COFIÑO**

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRÍGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A EL EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN A BAJO COSTO DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE CIRCULAN EN NUESTRO ESTADO Y EN EL RESTO DEL PAÍS.**

**CON SU VENIA DIPUTADO PRESIDENTE**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.-**

El Suscrito Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares suscribimos el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a través del cual nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El ingreso de vehículos extranjeros de manera ilegal a nuestro país se ha convertido en un grave problema social ocasionado en gran medida por el mismo gobierno federal, ya que las medidas aduaneras son muy “relajadas”, se internan los vehículos con permisos temporales (6 meses) y los pedimentos aduanales se someten a pocas revisiones, limitándose a investigar que el auto no tenga reporte de robo en la unión americana.

Los autos de procedencia extranjera que no han pasado por un proceso legal de importación temporal o definitiva, ya sea a la franja fronteriza o al interior del estado, o “Autos Chocolate” como coloquialmente se les conoce en nuestro país, son generalmente automóviles de marcas y versiones nunca comercializadas en México por concesionarios; se estima que el 95% de todos estos vehículos provienen de los Estados Unidos mientras que el otro 5% de otros países de Centro y Sudamérica, por varias décadas este fenómeno de autos provenientes de Estados Unidos solo afectaba a la zona fronteriza, sin embargo, se acrecentó a inicios de la década de los 90 cuando comenzaron a llegar al centro de la República Mexicana en parte causado por el efecto migratorio y por otro lado por la falta de poder adquisitivo de nuestra población para la compra de un automóvil nuevo.

No existe un padrón formal que establezca de manera certera cuantos autos de procedencia extrajera y sin regularizar circulan en nuestro Estado, lo que únicamente tenemos como dato, de acuerdo a declaraciones de Javier Diaz Gonzalez, Administrador Fiscal General de la Secretaria de Finanzas del Estado, es que se estima que sean aproximadamente 70 mil unidades que circulan de manera ilegal en Coahuila; sin embargo, se estima que esta cantidad pudiera llegar a las 300 mil unidades.

El año pasado en campaña, el hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los habitantes de las diferentes ciudades fronterizas a establecer un programa de regularización de los autos chocolate. La propuesta fortalecería a aproximadamente 6 millones de usuarios en todo el país y 300 mil en Coahuila.

Miles de familias coahuilenses tiene hoy la necesidad de poder contar con la tranquilidad que les brindaría el que pudiera llevarse a cabo por parte del Gobierno Federal y Estatal, la implementación de un programa de regularización de autos extranjeros internados en el Estado, de tal manera que puedan tener la certeza jurídica de que sus unidades no sean decomisadas en cualquier momento, producto de los operativos implementados por las autoridades; cabe destacar que estas unidades no son un artículo de lujo, sino una necesidad, para que miles de familias coahuilenses puedan realizar sus actividades cotidianas de traslado a trabajos o a centros escolares. Los ciudadanos que circulan en vehículos no regularizados, en su gran mayoría, son personas que no son sujetos para la contratación de un crédito de adquisición de automóviles nacionales; por lo que la regularización de sus unidades no afectaría en gran medida a la industria automotriz nacional.

Recalco que no estamos a favor de la ilegalidad, por el contrario, a través de este programa de regularización lo que se busca, además de brindarle certeza jurídica a los propietarios de automóviles de procedencia extranjera, es establecer un mecanismo de respeto a la legalidad, la contribución a esquemas a favor de la seguridad ciudadana y el respeto al medio ambiente. Por otro lado, solicitamos la creación de un programa de beneficio directo al propietario del vehículo no regularizado sin intermediarios como, la Federación Nacional en Defensa del Patrimonio Nacional, Anapromex, Onappaffa o la Unión Campesina Democrática.

No omito señalar que la solicitud planteada es posible. En México se han realizado seis procesos de regularización entre los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, además existen antecedentes documentados de experiencias similares, donde el Gobierno del Estado de Chihuahua y Tamaulipas, han establecido de forma exitosa este tipo de programas, incrementando además la recaudación y disminuyendo los índices de delincuencia.

En este sentido, y aunque se trata de un tema de carácter federal, consideramos pertinente el proponer un esquema de participación entre los tres niveles de Gobierno, mediante el cual se brinden las facilidades necesarias a los propietarios para la regularización a bajo costo de vehículos que ya se encuentren internados en territorio nacional, y siempre y cuando estos cumplan con las condiciones físicas y mecánicas de funcionamiento, así como con las normas ambientales.

El año pasado, el Grupo Parlamentario de UDC ya había presentado una propuesta en este mismo sentido y según informe de la Secretaría de Finanzas la propuesta estaba siendo analizada en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). El mismo informe señala que la regularización favorecería a una parte de la población que no cuenta con recursos suficientes para acceder a vehículos nacionales y su regularización tendrá que llevar a las autoridades a tener un padrón vehicular integrado con información de vehículos nacionales y extranjeros así como el nombre de sus propietarios, esa identificación permitiría una gran mejora en temas de seguridad pública, ya que es de todos conocido, que en gran parte de los delitos registrados en nuestro estado, sobre todo en la franja fronteriza, se ven involucrados este tipo de unidades.

Reitero, nuestra solicitud ya hecha con anterioridad, no es en el sentido de que se abra nuestra frontera norte a la importación de automóviles usados desde Estados Unidos, sino en el sentido de regularizar las unidades que ya se encuentran circulando de forma ilegal en territorio nacional, y una vez concretado, que entonces sí, nuestras autoridades aduaneras establezcan las medidas necesarias para que no se vuelva a generar un problema social de este tipo.

Compañeras y compañeros Diputados, es importante insistir en un tema que no solo tiene que ver con la justicia social, con proteger la economía familiar, con satisfacer la necesidad básica de transporte y dar certeza jurídica a los poseedores., un programa de regularización de autos de procedencia extranjera a bajo costo nos permitiría además, como ya lo he mencionado, avanzar en temas importantes para TODOS como es el de la seguridad pública, además de que significaría ingresos importantes y brindaría certeza jurídica a las autoridades.

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, misma que solicitamos sea considerada con carácter de **urgente y obvia resolución:**

**UNICO:** Que este H. Pleno del Congreso del Estado solicite respetuosamente a el Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretarias de Economía, de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias correspondientes., establezcan un programa de regularización a bajo costo de vehículos de procedencia extranjera que circulan en nuestro estado y el resto del país.

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”**

**SALTILLO, COAHUILA A 05 DE MARZO DE 2019**

**Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor**

**DIPUTADO**

**Zulmma Verenice Guerrero Cázares**

**DIPUTADA**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA” DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), CON EL OBJETO DE QUE SE** **SOLICITE, TANTO A LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, TERESA GUAJARDO BERLANGA, COMO AL DIRECTOR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA (CECYTEC), FRANCISCO TOBÍAS HERNÁNDEZ, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN TORNO A LA VENTA INDEBIDA QUE HIZO A LOS ALUMNOS DE ESA INSTITUCIÓN, DE LIBROS DE TEXTO QUE PREVIAMENTE EL GOBIERNO DE MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS HABÍA OTORGADO DE MANERA GRATUITA A ESA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, ASÍ MISMO, EXPLIQUE TOBÍAS HERNÁNEZ LOS MOTIVOS Y, EN SU CASO, FUNDAMENTE EL COBRO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN A LOS ALUMNOS DE LOS PLANTELES DE ESE ORGANISMO. DE IGUAL MODO, SE SOLICITE A LA SEFIR Y AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO QUE INFORMEN SOBRE SUS INVESTIGACIONES EN TORNO A LOS GASTOS SIN COMPROBAR EFECTUADOS POR EL CECYTEC EN 2017.**

Economista y docente, aficionado al periodismo; dos veces Diputado Local: la primera de ellas, en la Quincuagésima Octava Legislatura y, la segunda, en la Sexagésima Legislatura de este Honorable Congreso del Estado de Coahuila.

Así mismo, émulo del cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre (“Catón”), pero, sobre todo, elemento incondicional del viejo régimen, al haberse desempeñado como secretario de agenda del exgobernador Enrique Martínez y Martínez, y, luego, como secretario particular del tristemente célebre Humberto Moreira Valdés, cuando este buscaba la alcaldía de la capital coahuilense, lo mismo cuando contendió por la gubernatura de esta mega endeudada Entidad, para posteriormente ejercer diversas responsabilidades en el sector público, como recompensa a su disciplina partidista.

Ya desde aquí comienzan las desconfianzas hacia Francisco Tobías Hernández, quien actualmente se ostenta como director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (Cecytec), cargo del que, a decir de la prensa, ha estado a punto de ser destituido, con motivo de una serie de señalamientos que se le vienen haciendo en relación con presuntos actos de corrupción.

Tan pronto como asumió dicha dirección, las quejas contra dicho funcionario han estado a la orden del día, tanto por parte de los alumnos, como de los padres de familia, del personal administrativo y del cuerpo de docentes del referido Colegio.

Entre las inconformidades que han trascendido a los medios de comunicación, destaca la venta que el funcionario ordenó, en agosto de 2018, de por lo menos 100 mil libros de texto, a razón de 650 pesos por juego, cantidad que se exigió a cada alumno como “cuota obligada”, no obstante que el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme había regalado previamente dichos volúmenes a los alumnos.

En el subsistema se hizo entrega de 23 mil 500 paquetes que incluyen un total de 142 mil 846 libros de texto en los 87 planteles, tanto Cecytec como centros EMSaD.

Tobías Hernández también es objeto, desde 2017, de una serie de investigaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, al haber reportado gastos sin comprobar por el orden de los 153 millones de pesos.

Una nota periodística del 4 de julio de 2017, también señala que el director habría estado “haciendo mal uso de los recursos de esa dependencia al gastarlos en viajes y empresas publicitarias relacionadas con él”.

En este mismo sentido, el reporte también señala que maestros del Cecytec “mostraron su malestar por el desvío de recursos etiquetados para educación para pagar costosos viajes del director, así como pagos para promocionar su imagen”, con miras a postularse como candidato a presidente municipal de Saltillo.

La arbitrariedad más reciente que se adjudica a Francisco Tobías Hernández tiene qué ver con el cobro injustificado de cuotas de inscripción, que van de los 1,600 a los 1,800 pesos por estudiante, cuyo ingreso a los planteles del Cecytec estaría siendo condicionado al pago de dichas cantidades, motivo por el cual los padres de familia, cuyos nombres se omiten por temor a represalias, han solicitado inútilmente la intervención del secretario de Educación en el Estado, Higinio González Calderón.

Por otra parte, es claro que el recorte, de aproximadamente 20 por ciento, al presupuesto del Cecytec, no responde a ningún capricho, omisión o irresponsabilidad gubernamental, sino más bien a una nueva política presupuestaria, cuya implementación requiere de ajustes y plazos. Esto lo sabíamos de antemano. Ciertamente, todo cambio de raíz suele implicar riesgos y sacrificios, como los que vemos ahora.

Mientras tanto, no es cosa nueva que se esté buscando un mayor presupuesto para los planteles del Cecyte de la Entidad. Desde enero pasado, la Secretaría de Educación de Coahuila y el Gobierno del Estado se encuentran en tal afán, considerando que, en 2016, siendo todavía presidente Enrique Peña Nieto, la institución recibió 360 millones de pesos, contra $253 millones que obtuvo en 2018, es decir, 107 millones de pesos menos, a pesar de que, tanto sus planteles como sus alumnos, se multiplicaron de manera significativa. Dicho recorte fue de poco más de 30%... y nadie protestó por ello.

La pregunta obligada es esta: con servidores públicos como Francisco Tobías Hernández, cuya calidad moral es cuestionada constantemente por la opinión pública, ¿podemos apoyar su solicitud de que se asignen mayores fondos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila? Por alguna razón, no muy difícil de comprender, no han llegado más recursos a este organismo.

No debemos perder de vista que la premisa de combatir de raíz la corrupción e impunidad también tiene qué ver con la reestructuración y reasignación de partidas presupuestales, incluso para prevenir el mal manejo del dinero del pueblo.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en apego a lo establecido en los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Congreso del Estado, con el objeto de que sea tramitada con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente...

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO. - Solicítese al director del** **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (Cecytec), Francisco Tobías Hernández, que informe a esta Soberanía el torno a la venta indebida que hizo a alumnos de esa institución, de libros de texto que previamente el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís había otorgado gratuitamente a esa población estudiantil, y dé a conocer a cuántos alumnos les han sido devueltos los recursos obtenidos mediante dicha venta, calculados en un total de 20 millones de pesos; así mismo, explique los motivos y, en su caso, fundamente el cobro de cuotas de inscripción al alumnado, cuyo acceso a los planteles de ese organismo está condicionado a dicho pago, según reportan padres de familia.**

**SEGUNDO. - Solicítese, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de esta Soberanía, al auditor Superior del Estado, José Armando Plata Sandoval, así como a la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, que informen a esta LXI Legislatura sobre el estado que guardan sus respectivas investigaciones sobre los gastos sin comprobar, por aproximadamente 153 millones de pesos, efectuados en 2017 por el Cecytec, dirigido por Francisco Tobías Hernández, según lo ha detectado la propia ASEC; así mismo, den a conocer el estado que guardan sus indagaciones sobre la venta indebida de libros de texto que previamente habían sido otorgados gratuitamente alumnado por el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís.**

**TERCERO. - Solicítese de manera respetuosa al secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, su intervención para verificar y sancionar, si fuere el caso, el cobro indebido de cuotas de inscripción, de entre 1 mil 600 y 1 mil 800 pesos, a los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, cuyo acceso a los planteles de esta institución estaría condicionado al pago de dicha “cuota obligatoria”.**

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 04 de marzo de 2019**

***“Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**COORDINADOR**

**GRUPO PARLAMENTARIO “PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA”**

**PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA)**

Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, mediante el cual se denuncian claros actos de nepotismo y conflicto de intereses, por parte de algunos regidores del municipio de San Pedro, Coahuila.

**H. Pleno del Congreso del Estado**

**de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

El Suscrito Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

Compañeras y compañeros diputados como ustedes recordaran hace algunas sesiones de la recién terminada Diputación Permanente, expuse en esta máxima tribuna del Estado los actos de nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses en los que estaba incurriendo la alcaldesa del municipio de San Pedro, Coahuila, pues acreditamos que solamente ella como funcionaria pública había favorecido a por lo menos cuarenta personas que tienen parentesco y relación directa, con la familia Godoy Ávila, al haberlos dado de alta en la nómina municipal, sin tomar en cuenta que legalmente hay un impedimento para ello.

Quiero aclarar que derivado de estos señalamientos que interpusimos y que están plenamente acreditados con la nómina municipal, la alcaldesa ha señalado en muy diversas ocasiones en diferentes espacios inclusive en una sesión de cabildo, que un servidor era un misógino, y que incurría en su perjuicio con violencia política y violencia de género.

Al respecto cabe señalar, que en ningún momento se ofendió a la alcaldesa de manera personal, por el contrario lo que aquí se denunció, es su actuar como servidora pública, pues como tal debe respetar la ley, y en ese sentido la misma es muy clara, no se puede hacer uso del poder para favorecer a familiares, parientes e inclusive amigos.

Pero esa situación, afortunadamente ya está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, la cual nos ha informado que pronto se verán resultados positivos y muy seguramente habrá consecuencias jurídicas de carácter penal y administrativo, ante las cuales tendrán que responder quienes hayan incurrido en esas violaciones legales.

Por otro lado, el día de hoy, subo nuevamente a esta tribuna para exponer los actos de nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses en los que están incurriendo algunos de los regidores del municipio de San pedro, Coahuila, al haber incrustado en la nómina municipal a familiares directos, como pago para que voten todas las propuestas a favor que les presente la alcaldes Patricia Oralia Grado Falcón, la cual al ser cuestionada en algunas entrevistas señala “.. que sí algunos de los regidores tienen algún intención en lo particular lo puede plantear, son regidores, son parte del ayuntamiento, en donde dice que no tienen derecho o que está vetado o que es pecado o que es un delito donde dice..”

Para comprobar este hecho, a la presente proposición con punto de acuerdo, se anexa una USB que contiene un video que corrobora y acredita lo señalado en el párrafo anterior. Dispositivo que le hago entrega al término de la presente lectura, Diputado Presidente de la mesa Directiva, para que conste como prueba fehaciente de lo que hoy aquí se denuncia, dejándolo además a disposición de nuestros compañeros diputados por si alguna o alguno de ellos lo solicita.

A continuación les hago mención de los regidores y el familiar con su grado de parentesco y el puesto que actualmente se encuentran desempeñando dentro del municipio de San Pedro, Coahuila, con lo cual queda plenamente demostrado el tráfico de influencias, nepotismo, conflicto de intereses y demás responsabilidades en que incurren dichos servidores públicos, conductas que deben ser sancionadas tal y como lo señala la ley.

1.- Regidora Mariana Trujillo Montoya, su hermano David Trujillo Montoya trabaja en el DIF Municipal.

2.- Regidora María de Lourdes Mendoza, su esposo Aarón Vázquez es asistente del Secretario del Ayuntamiento y su hija Daniela Vázquez Mendoza trabaja en la dirección de Fomento Económico.

3.- Regidor Fredy Sánchez, su esposa Leticia Flores trabaja en Desarrollo Social.

4.- Regidora Elizabeth Sánchez Niño, su esposo Ramón Solís Sifuentes trabaja en el área de sistemas y su hermano Gabriel Sánchez Niño es el director de Desarrollo Social del municipio, además dos primos de apellido niño se encuentran laborando en esa misma área.

5.- Regidora Mayra Puentes, su hermana Claudia Puentes trabaja en Fomento Económico.

Los hechos antes señalados, quedan plenamente demostrados con la nómina municipal donde se encuentran cobrando dichas personas y que al término de la lectura del presente punto de acuerdo, también le hago entrega señor Presidente de la Mesa Directiva, para que obre como prueba, quede a disposición de las y los presentes y surta los efectos legales correspondientes.

A mayor abundamiento y solo para acreditar que las conductas aquí señaladas son plenamente incorrectas y deben ser sancionadas, les comento que el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el diverso 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señalan:

**Artículo 47.** Todo servidor público tendrá́ las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará́ lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...

XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

...

XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

...

XVII. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;

**Artículo 8o**. Todo servidor público tendrá́ las siguientes obligaciones:

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión

VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

...

XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte

...

XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá́ intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

...

XIV. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

...

Las anteriores disposiciones legales si bien es cierto están contempladas en ordenamientos federales, localmente existen normatividad muy parecida a la antes referida y que en todo caso debe aplicarse en los hechos de nepotismo, tráfico de influencia o conflicto de intereses que hemos venido señalando de manera puntual.

Así mismo, queremos destacar, que de la lectura de los artículos anteriormente señalados, se puede observar claramente como los servidores públicos no deben contratar a personas con las que tengan cualquier clase de parentesco hasta el cuarto grado.

Por otro lado, no podemos pasar por alto lo que ya hemos señalado en anteriores intervenciones en esta tribuna con relación a dejar muy en claro que las conductas de nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de interese están penalmente tipificadas como delitos debiéndose castigar a quienes incurran en ellas, pues así lo establece con mucha precisión el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyas conductas tipificadas como delito me permito transcribir: a continuación:

**Artículo 449** (Modalidades agravantes por perjuicio económico a la hacienda pública, o beneficio económico al servidor público, familiares o terceros vinculados)

Cuando se acredite que con cualquiera de las conductas previstas en el artículo precedente, salvo sus fracciones VI y VII, se produzca algún perjuicio a la hacienda pública, o un beneficio económico al propio servidor público, a su cónyuge, compañero o compañera civil, concubina o concubinario, pareja, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, o a cualquier persona con la que el servidor público tenga sociedad, o a quien sea su superior o dependiente jerárquico en el mismo Estado o municipio de que se trate, o a sociedades de las que el servidor público forme parte o sea accionista, en vez de las penas previstas en el artículo 448de este código, se impondrán al servidor público las penas que aquí se señalan.

**Artículo 451** (Tráfico de influencia)

El tráfico de influencia puede adoptar las formas siguientes:

**I.** (Tráfico de influencia directo)

Se impondrá de dos a seis años de prisión y de quinientos a mil días multa, al servidor público que utilice la posición que su cargo, empleo o comisión le confiere, promueva o gestione un acto administrativo ajeno a las responsabilidades inherentes al cargo, empleo o comisión del servidor en la entidad oficial estatal o municipal de que se trate, **que genere cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para cualquiera de las personas a que se refiere el párrafo segundo del artículo 452 de este código.**

**por su parte el párrafo segundo del Artículo 452 dispone**

El beneficio podrá consistir en dinero, valores, bien mueble o inmueble, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado, donación, servicios, comisión pecuniaria, o cualquier otra dádiva, ya sea para **sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles, o para terceros** con los que tenga o haya tenido relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Por último, en meses recientes el presidente de la república hizo un llamado a todos cabildos municipales del país, para que no contrataran a sus familiares como servidores públicos dentro de esa misma administración, pues eso era una muestra y una señal de corrupción, la cual pretende combatir y erradicar en todos los ámbitos de gobierno, pero al parecer ese llamado no fue escuchado por la munícipe Doctora Patricia Oralia Grado Falcón, quien haciendo caso omiso a ese llamado de nuestro actual Presidente de la República, ha decidido favorecer a un nutrido número de familiares directos, incrustándolos en la nómina del municipio de San Pedro, Coahuila.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de este H. Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para su urgente y obvia resolución.

**PRIMERO.-** Que esta LXI Legislatura, envié un exhorto tanto a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, así como a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas a efecto de que inicien las denuncias así como los procedimientos administrativos, que conforme a derecho corresponden y procedan a investigar y en su caso sancionar, los actos de nepotismo, favoritismo y conflicto de intereses, señalados en el proemio de este punto de acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la presente proposición con punto de acuerdo, sea turnada a la Comisión de Asuntos Municipales de este H. Congreso, para que le den el mismo seguimiento que a las otras proposiciones con punto de acuerdo, que le han sido turnadas y que tienen que ver con actos de nepotismo y corrupción en el municipio de San Pedro, Coahuila, con el fin de que en su momento emita un dictamen con relación a este tema en particular.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 5 de Marzo del 2019.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

**Nota:**

**Video en relación a la proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza.**

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/VID-20190301-WA0030.mp4**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/VID-20190301-WA0030.mp4)

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), CON OBJETO DE QUE EL PLENO ACUERDE LA INMEDIATA REMOCIÓN DEL DIPUTADO JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA COMO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA, POR SU CONDUCTA ILEGAL, CONTRARIA A LA ÉTICA PARLAMENTARIA, DESHONESTA Y ANTIDEMOCRÁTICA MANIFESTADA DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE DICTAMEN RELATIVO A LAS CUENTAS PÚBLICAS 2017, CONDUCTAS QUE QUEDARÁN ACREDITADAS CON LAS PRUEBAS QUE SE PRESENTAN.**

**Compañeras y Compañeros:**

La suscrita, **DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ,** del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (**MORENA**), con fundamento en las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso, comparezco para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se propone al Pleno la inmediata remoción del Diputado Juan Antonio García Villa, como coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura, por su conducta ilegal, contraria a la ética parlamentaria, deshonesta y antidemocrática manifestada durante la discusión del Proyecto de Dictamen relativo a las Cuentas Públicas 2017, conductas que quedarán acreditadas con las pruebas que se presentan.

Sustento mi proposición en las siguientes consideraciones:

El pasado día 18 de febrero, durante la presentación, discusión y aprobación del Dictamen relativo a las Cuentas Públicas 2017, en sesión celebrada por los integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura, se produjeron conductas ilegales, impropias de alguien que se dice conocedor de la práctica parlamentaria, groseramente antidemocráticas y contrarias a los principios más elementales de la ética parlamentaria.

Lo grave es que estas conductas fueron perpetradas por el Diputado Juan Antonio García Villa, coordinador de la Comisión, por lo que anexamos a la presente proposición, diversos audios y videos donde quedan de manifiesto estas conductas ilegales, señalando que las mismas forman parte integrante de la presente proposición.

Como le consta a las y los legisladores que presenciaron la sesión de la Comisión, así como a un buen número de representantes de los medios de comunicación, el Proyecto de Dictamen, presentado por el Diputado García Villa, contenía un Acuerdo con siete puntos resolutivos.

De los audios y videos se desprende con claridad (y además así lo reconoce el propio Diputado García Villa, por lo que no es materia de controversia) que el Proyecto de Dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad. Lo anterior era natural, pues es una obligación legal y constitucional que dicho dictamen sea emitido por la Legislatura.

Tampoco existe controversia en que, para su discusión en lo particular fueron reservados los puntos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Proyecto de Dictamen. En relación al resultado de la votación, en lo particular, tampoco existe controversia. En los videos y audios que se anexan, el Diputado García Villa reconoce que estos cinco puntos resolutivos fueron rechazados en el seno de la Comisión por cuatro votos en contra y tres a favor.

Ahora bien, los expertos y conocedores del derecho parlamentario que hemos consultado coinciden en lo siguiente: Primero. Es obligación del coordinador de la Comisión presentar un “proyecto de dictamen” y someterlo a la consideración del Pleno de la Comisión. Obsérvese que lo que presenta el coordinador es solo un “proyecto de dictamen”, pues dicho proyecto solo adquiere las calidades de dictamen cuando queda aprobado por todos o la mayoría de la Comisión o, cuando en caso de empate, el coordinador ejerce el voto de calidad.

Segundo. La Comisión es competente para aprobar, rechazar o modificar el proyecto de dictamen en el sentido que determine la mayoría de sus integrantes. Esto es un principio de la democracia legislativa: Los resolutivos expresan el sentir de la mayoría, tanto en las comisiones dictaminadoras como en el Pleno.

Entonces, si la Comisión, como fue el caso, aprobó el proyecto de dictamen en lo general y no fueron reservados, para su discusión en lo particular los puntos resolutivos primero y segundo, es evidente que quedaron aprobados, por unanimidad los puntos resolutivos primero y segundo.

Ahora bien, en virtud de que los puntos resolutivos del tercero al séptimo, fueron votados en contra por la mayoría de los integrantes de la Comisión, es evidente que el dictamen legalmente aprobado por la Comisión solo puede contener los puntos resolutivos Primero y Segundo.

Tercero. Una vez que el dictamen fue aprobado por una mayoría de cuatro votos, el coordinador de la Comisión estaba obligado, por el principio de legalidad y el respeto a la democracia parlamentaria, a modificar el dictamen en el sentido que determinó la mayoría, rehaciendo para tales efectos la parte expositiva y considerativa, pues esta solo puede servir para fundar y motivar los acuerdos y puntos resolutivos que democráticamente hayan sido aprobados por la mayoría de los integrantes de la Comisión..

Cuarto. En todo caso, al disentir de la mayoría, le correspondía al Diputado García Villa presentar, en su caso, un voto particular en contra.

 No obstante lo anterior, una vez que se realizó la votación en lo general y en lo particular, con los resultados que han quedado acreditados y sobre los que no existe controversia, el Diputado García Villa se negó a modificar su proyecto de dictamen aduciendo, escúchese bien, que la mayoría, esto es, los que votamos en contra de los puntos resolutivos del tercero al séptimo, estábamos obligados a presentar, previamente, un voto particular.

De los audios y videos que se presentan se puede constatar que el Diputado García Villa dice: (cito la transcripción textual) “Mire, debimos haberlo votado en lo general y lo votamos y en lo particular y ustedes debieron de haber presentado un voto particular, era su obligación, no lo presentaron.” (fin de la cita) Esto es una falsedad, una argucia para tratar de confundir a los demás e impropia de un legislador.

No omito señalar que el Diputado García Villa alegó que eso era lo legal y citó diversos artículos de la Ley Orgánica, desde luego de memoria y bajo su obtusa interpretación, toda vez que su afirmación es una falsedad.

El voto particular en contra es la prerrogativa de quién disiente o no está de acuerdo con lo resuelto por la mayoría. En este sentido, la mayoría estaba formada por las y los legisladores que con cuatro votos aprobamos los puntos resolutivos Primero y Segundo y rechazamos los puntos del Tercero al Séptimo, por lo que bajo ninguna norma legal o procedimental estábamos obligados a presentar un voto particular.

Pero peor, el Diputado García Villa sostuvo (y ahí están los audios y videos) que el tal voto particular debió haber sido presentado previamente a la votación, lo que resulta irracional. En efecto, la condición sine qua non para que se produzca la posibilidad de emitir un voto particular es, precisamente, que se vote el asunto y que se esté en minoría. Nunca en la historia de los órganos colegiados la mayoría ha emitido un voto particular, simplemente porque los votos particulares se emiten en contra del sentido de la mayoría.

Así, por ejemplo, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros que están en la minoría y disienten de la mayoría, formulan votos particulares en contra. Y en muchas ocasiones, cuando están en contra dos o más ministros, suelen presentar lo que se conoce como “voto de minoría” que no es otra cosa que la acumulación de sus votos particulares. En la Suprema Corte también se acostumbra emitir los llamados “votos concurrentes” cuando estando de acuerdo con los puntos resolutivos, no se comparten los argumentos o razones del ministro ponente o de la mayoría.

Como puede verse, son absolutamente falsas las afirmaciones del Diputado García Villa. El argumento del “voto particular” para desconocer la determinación mayoritaria de la Comisión fue una patética maniobra para tratar de justificar la conducta facciosa, ilegal y antidemocrática del Diputado García Villa.

Lo verdaderamente grave del asunto es que el Diputado García Villa, empecinado en su ilegal proceder, presentó, ante la oficialía mayor del Congreso, un supuesto dictamen que no fue aprobado por la mayoría de la Comisión, lo que es ilegal, antidemocrático y causa suficiente para removerlo del cargo de coordinador de la Comisión.

En otros de los audios y videos que se anexan, el Diputado García Villa sostiene (y cito la transcripción) “El dictamen fue aprobado en lo general, en lo general, que incluye la parte expositiva, eh?, incluye la parte expositiva, y no hicieron reservas y es lo que se tiene que leer.” Esto es el colmo, como ya hemos señalado, la parte expositiva y considerativa de los dictámenes sirve para fundar y motivar los puntos resolutivos aprobados por la mayoría, de tal manera que si la Comisión elimina o modifica los puntos resolutivos, por lógica racional y simple sentido común, resulta evidente que debe adecuarse la parte expositiva y considerativa que sirve de sustento a lo aprobado por la Comisión, todo ello en el sentido que determine la mayoría.

Contrario a esta lógica, en su soberbia y autoritarismo, el Diputado García Villa sentenció que su dictamen (y cito): “Se irá tal cual al Pleno, es lo que dice la Ley.” Pues es falso, a menos que se haya referido a la “Ley de Herodes” y, como aquel pérfido personaje de la célebre película, haya inventado sus propias leyes a modo. Anexo a la presente proposición, todos los audios y videos de la sesión de la Comisión, donde se podrá constatar las falsedades e ilegalidades en que incurrió el Diputado García Villa y que deben indignar a toda aquel que se precie de respetar el principio de legalidad, la ética parlamentaria y la decencia política.

A estas alturas es evidente que el Diputado García Villa incurrió en faltas graves al desconocer la determinación de la mayoría de los integrantes de la Comisión, determinación democrática expresada en la votación en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen relativo a las Cuentas Públicas 2017.

Quiero aclarar que, a pesar de no coincidir ideológicamente con el Diputado García Villa, le guardaba consideración y respeto, pues estimaba que era una persona que podía ser objetiva y respetuosa de la ley y de los procedimientos democráticos. Sin embargo, después de las actitudes que todos ustedes pueden ver y escuchar en los audios y videos que se anexan, me queda claro que, bajo ninguna circunstancia, podemos permitir que un coordinador de cualquier comisión, actúe como lo hizo el Diputado García Villa, despreciando la determinación de la mayoría, en una actitud soberbia y antidemocrática.

Por lo anterior se propone la remoción del Diputado García Villa como coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura.

Se propone que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proponga a la diputada o diputado de su grupo que deba sustituir en la coordinación al Diputado Juan Antonio García Villa, para efectos de que el Pleno lo apruebe en una próxima sesión del presente período ordinario.

Al respecto quiero dejar claro que el Pleno del Congreso es competente para efectuar la remoción que se propone pues no hay ninguna norma que lo prohíba. Además, ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Congreso establecen una votación calificada para esos efectos. Tampoco, con la remoción, se afectan los derechos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pues se deja claro que el o la nueva coordinadora será de ese grupo parlamentario.

Finalmente, se propone turnar los audios, videos y argumentos de derecho a la Junta de Gobierno para que inicie las investigaciones, forme el expediente, otorgue las garantías del debido proceso y, en su caso, aplique las sanciones disciplinarias que correspondan de conformidad a la gravedad de los hechos que se acreditan.

Estas conductas antidemocráticas que vulneran gravemente el trabajo parlamentario deben ser sancionadas con la mayor energía para erradicarlas completamente del Congreso de Coahuila. Tenga la hombría, Diputado García Villa, de reconocer públicamente que su argumento del “voto particular” es una falacia; Tenga el valor de reconocer que presentó un dictamen ilegal y que su proyecto de dictamen fue rechazado, por la mayoría, en los puntos resolutivos del Tercero al Séptimo. Reconozca si equivocación o sufra la ignominia de su remoción por su conducta antidemocrática. Ahí están los videos y los audios; hay constancia irrefutable de su conducta; no hay nada que lo exima de su irresponsable y antidemocrático proceder. Al final de su carrera política sea valiente y acepte las consecuencia de sus actos, porque si no renuncia por decoro, entonces este Pleno lo removerá de su cargo.

Por lo expuesto, solicito al Pleno del Congreso del Estado, se sirva calificar como de urgente y obvia la resolución y, en su caso, aprobación, de la siguiente

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO.** El Pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, acuerda remover al Diputado Juan Antonio García Villa del cargo de coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura;

**SEGUNDO.** De conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propondrá a la diputada o diputado de su grupo que deba sustituir en la coordinación al Diputado Juan Antonio García Villa, para efectos de que el Pleno lo apruebe en la próxima sesión del presente período ordinario; y

**TERCERO.** Túrnese el presente asunto a la Junta de Gobierno para los efectos de que inicie las investigaciones, forme el expediente, otorgue las garantías del debido proceso y, en su caso, aplique las sanciones disciplinarias que correspondan de conformidad a la gravedad de los hechos que se acreditan.

Saltillo, Coahuila, a 5 de marzo de 2019.

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

**Nota:**

**Favor de descargar el Audio y video en relación a la proposición con punto de acuerdo que presenta la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández.**

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0001.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0001.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0002.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0002.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0003.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0003.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0004.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0004.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0005.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0005.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0006.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0006.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0007.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0007.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0008.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0008.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0009.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0009.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0010.mp3**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0010.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/VID-20190304-WA0011.mp4**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0010.mp3)

[**http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/VID-20190304-WA0012.mp4**](http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/Videos20190305/AUD-20190304-WA0010.mp3)

**H. PLENO DEL  CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la diputada Gabriela Zapopan Garza Galván conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que este H. Pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza exhorte la secretaría de Finanzas para que ajuste y modifique la Ley de Ingresos 2019 y el Presupuesto de Egresos del mismo año; así mismo, se exhorte a los 38 Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza para que, de igual forma, realicen los ajustes y modificaciones a sus leyes de Ingresos y presupuesto de Egresos y sean enviados ante las Comisiones de Hacienda y Finanzas de este Poder Legislativo para ser dictaminadas en el ámbito de sus competencias y enviadas a este pleno para en su caso, avalar las reformas de las leyes de ingresos 2019; lo anterior derivado de la información emanada y publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33, estableciendo montos e incrementos superiores plasmados en las Leyes de Ingresos del Estado y los 38 municipios; esto con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

En diversas ocasiones durante el primer año de nuestro encargo, acudí ante esta Tribuna, y ante este Honorable Congreso, buscando soluciones a los diversos problemas que aquejan a nuestra entidad, así como en el tema de las finanzas públicas de Coahuila a través de pronunciamiento, múltiples puntos de acuerdo, y la participación activa en la Comisión de Finanzas de este Congreso del Estado, a la cual pertenezco; he sido insistente al señalar y criticar a las pasadas administraciones quienes, con  malas costumbres, decisiones erróneas y hasta dolosas, generaron la deuda pública más grande en la historia de Coahuila, deuda que ha llevado a éste gobierno a situaciones precarias, a desabasto en los servicios, carencias en salud, falta de inversión en la infraestructura, y cortando miles de proyectos a favor de los coahuilenses, generando la crisis actual financiera que rige nuestro estado.

En septiembre de 2018, a través en un pronunciamiento desde esta máxima tribuna del estado de Coahuila, exhorté a la autoridad competente, al secretario de Finanzas, a cambiar el rumbo de su actuar, a reorientar el gasto y demostrar con acciones la intención de eficientar y sanear las finanzas públicas de Coahuila, solicitando entre otros puntos:

* CLARIDAD Y PRESICISIÓN EN LA ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIOS.
* CLARIDAD Y CALENDARIOS EN LOS AJUSTES DE DICHAS PARTICIPACIONES
* CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

Reconozco el esfuerzo del Gobernador y de su equipo de trabajo, encaminando y reorientando con acciones concretas de justicia y equidad, el irrestricto cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y el cumplimiento puntual al depositar, ministrar en tiempo y forma, de manera transparente y sin restricción alguna, los recursos que por ley les corresponden a los 38 municipios, sin ningún tipo de sesgo partidista.

De acuerdo a información reciente, debemos analizar los montos reales, con incrementos y porcentajes superiores, de las participaciones y aportaciones federales, de los Ramos 28 y 33, establecidos por la Secretaría de Hacienda, que discrepan a lo establecido en las Leyes de ingresos tanto municipales como en la estatal para este 2019.

Sabemos que queda mucho por hacer y que solo se ha dado un paso, sin embargo, es mi obligación como legisladora no solo señalar y criticar si no, en lo que sea benéfico para el pueblo de Coahuila apoyar y contribuir al manejo eficiente de los recursos, marcar la pauta para el rescate financiero del estado, a la transparencia y realidad de las finanzas públicas desde mi trabajo legislativo. Tenemos un deber permanente, tenemos un deber histórico.

De esta forma y derivado de un exhaustivo trabajo de revisión y análisis de la Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila y de las Leyes de Ingresos de los 38 Municipios de la entidad, podemos apreciar con gran claridad la existencia clara de discrepancias entre lo plasmado en las leyes de ingresos y la información de lo que se está recibiendo por conceptos del ramo 28 y 33, montos muy superiores, con incrementos.

Para que una administración sea eficaz y eficiente debe contar con una adecuada planeación del gasto, estricto orden entre los ingresos y los egresos.  El municipio libre es la base del federalismo, y pieza fundamental de la organización política y administrativa del país, ejerciendo la plena libertad hacendaria municipalista, cada cabildo en los 38 municipios del estado estableció una ley de ingresos donde se plasmaron los montos de los diferentes recursos que ingresarán a las arcas de cada municipio, así mismo, cada uno cuenta con un presupuesto de egresos, es decir, cómo se ejercerán estos recursos que recibirán, ambas son acordes y complementarias, sin embargo ante los datos de incremento de los fondos federales tanto del ramo 28 como del 33 publicados y en plena ejecución ( pues ya se han estado realizando ministraciones o depósitos adecuados a esta información ) por parte de la Secretaria de hacienda y Crédito Publico del Gobierno Federal, ambos instrumentos fiscales para el Estado y para los municipios, han quedado obsoletos y fuera de realidad.

Ante los síntomas favorables dados por esta administración en la eficiencia de la entrega del recurso federal, no podemos dejar pasar la oportunidad de dar un cambio, poner orden, ser honestos, ser ejemplo de buen gobierno y dar cumplimiento real e irrestricto a la ley, es nuestro deber como legisladores y como Congreso de Coahuila, de nosotros depende la aprobación de las leyes de ingresos tanto Estatal como Municipales, debemos ser garantes y estar pendientes del proceso de modificación y ajuste, pues la realidad de los ingresos y egresos por concepto de participaciones y aportaciones ya no es acorde a los plasmado en las leyes a que hacemos referencia.

Para claridad de lo anteriormente expuesto establecemos en base a nuestra investigación algunos datos relevantes como los son:

**En el caso del estado:**

En su Ley de Ingresos señala Ingresos por ***49,369,566,358.21 pesos***

Documento en cual observamos en el rubro de Participaciones Federales del Ramo 28, ingresos por ***19,891,787,466.38*** pesos, sin embargo, de acuerdo a la publicación por parte de la Secretaria de Hacienda, mediante un acuerdo donde informa a las entidades federativas la calendarización y montos de estos importantes recursos, la cantidad a ministrar por ***21,804639,784*** pesos, es decir, una diferencia de ***1,912,852,317.62*** pesos, ***9.62 %*** más.

Las Participaciones Federales representan el ***40.29 %*** de los ingresos totales del estado

Respecto a las Aportaciones Federales del Ramo 33, en el caso del estado, la diferencia no es relevante.

Las Aportaciones Federales representan el ***34.16 %*** de los ingresos totales del estado.

Por ende, de igual forma, el estado deberá modificar su Presupuesto de Egresos en igual monto, y especificar y justificar su aplicación.

**En el caso de los municipios:**

Estos, presentan variables particulares en cada una de sus leyes de Ingresos, por tanto, aun que contamos con el análisis particular de cada una de ellas, me referiré de manera global en su monto correspondiente.

Son ***10,552,525,994.88*** pesos la suma de los ingresos totales de los municipios en el estado, según sus leyes de ingresos.

Las Participaciones Federales y los fondos de Infraestructura social Municipal y de Fortalecimiento Municipal importan ***6,262,315,342.35*** pesos, el ***59.54 %*** de los ingresos totales.

Pero, al igual que con el estado, con los datos publicados por la Secretaria de Hacienda, estos ingresos se proyectarían hasta la cantidad de ***6,998,339,630.80,*** una diferencia al alza por ***736,024,288.45,*** el ***11.75%*** más y llegarían a representar hasta el ***66.32%*** de sus ingresos totales.

De manera particular, la Participaciones Federales se incrementarían de ***3,862,538,822.83*** a ***4,250,461,198.80***, el ***9.13%.***

El Fondo de Infraestructura Social se incrementaría de ***583,523,204.86*** a ***707,851,996.00***, el ***17.56%.***

El Fondo de Fortalecimiento Municipal se incrementaría de ***1,816,253,314.66*** a ***2,040,026,436.00***, un ***10.97%.***



Como podemos observar, las diferencias representan montos importantes, de igual forma deberá ampliarse sus respectivos Presupuestos de Egresos, así como los Programas Operativos Anuales (POA´s), de acuerdo a la normatividad contable aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Soberanía la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**Que, por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**PRIMERO. - Este H. Pleno del Congreso del Estado de Coahuila envía un atento exhorto a la Secretaría de Finanzas para que ajuste y modifique la Ley de Ingresos 2019, y el Presupuesto de Egresos 2019.**

**SEGUNDO. - Así mismo, se exhorta a los 38 Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que de igual forma realicen los ajustes y modificaciones a sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos.**

**TERCERO. - Se instruya a las comisiones de Hacienda y Finanzas para dar seguimiento a este proceso y una vez que sean remitidas la Ley de Ingresos de 2019 para el Estado de Coahuila, así como las propias de los 38 municipios, sean dictaminadas y enviadas a este pleno para en su caso, avalar las reformas correspondientes.**

**Lo anterior derivado de la información emanada y publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33, estableciendo montos e incrementos superiores a los plasmados en las Leyes de Ingresos del Estado y los 38 municipios.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**“GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN “**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de Marzo de 2019**

**DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑ DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES**

**DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA  ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD AMPLIE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ADICCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SABINAS, MÚZQUIZ Y ALLENDE Y SOLICITAR UNA CAMPAÑA ESTATAL CONTRA LA ADICCIONES Y EL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESTATAL DE ADICCIONES.

CON SU VENIA DIPUTADO PRESIDENTE

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

La de la voz, Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares y el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila suscribimos el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182  y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

Las adicciones una problemática social que ha alcanzado a muchas familias. Las cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol, Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 elaborado por la Comisión Nacional Contra Las Adicciones en México ubican a Coahuila en cuarto lugar a nivel País.

De acuerdo con información oficial de 2008 a 2016 se incrementó el consumo 3.1 a 10.8%. Estamos hablando 9.9% de la población encuestada aceptó haber consumido drogas ilegales por lo menos una vez en su vida. El consumo de la marihuana se duplicó

El consumo de cocaína en Coahuila pasó 1.7 a 3.7% de 2008 a 2016 y en el mismo lapso de tiempo, Coahuila ocupa el segundo lugar en consumo de alcohol y tabaco.

En relación con el consumo consuetudinario de alcohol Coahuila se ubicó en el segundo lugar después de Nuevo León con el 14%, en tanto que en lo que respecta al consumo excesivo, la entidad está en el tercer lugar con el 27%.

El propio Plan Estatal de Gobierno 2017-2023 en su diagnóstico en materia de salud y social destaca que el problema de las adicciones se ha agravado principalmente entre los jóvenes. “Se estima que hay alrededor de 27 mil personas adictas a algún tipo de sustancia. La marihuana es la droga de mayor consumo, tanto de hombres como de mujeres”, destaca.

Y de ahí el compromiso general de ampliar el programa de prevención de adicciones e implementar una mayor sinergia con instituciones educativas y municipios.

Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Estatal durante el 2018 de integrar el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Coahuila y por el fortalecimiento de la Red de Prevención y Atención de Adicciones, para ofrecer tratamiento integral, consultas psicológicas, clínicas, orientación a familiares, elaboración de tamizajes.

Actualmente Coahuila cuenta con 8 Centros de Atención Primaria en Adicción en los municipios de Acuña, Matamoros, Nueva Rosita, Piedras Negras, San Pedro de Las Colonias y Torreón.

Y aunque también existen estrategias con otras instituciones como los Centros de Integración Juvenil, los Hospitales de Seguro Social, las Clínicas del ISSSTE, los Servicios Estatales de Salud y los servicios de la Cruz Roja es necesario reforzar los servicios en zonas como la norte y la carbonífera.

En mi recorrido por los diferentes municipios que integran el Distrito es un clamor ciudadano el contrarrestar las adicciones con un programa integral de prevención a nivel estatal pero también con Centros de Atención Primaria en Adicción en los municipios Sabinas, Múzquiz y Allende. Esto debido a que les resulta cuantioso trasladarse al municipio de Saltillo, porque en Nueva Rosita el servicio se encuentra saturado.

Es lamentable que las víctimas del uso de drogas sean jóvenes entre 15 y 25 años. Me referiré específicamente a la región carbonífera donde los menores de edad tienen acceso a diferentes tipos de drogas licitas e ilícitas.

Por ejemplo en el municipio de Múzquiz padres y madres de familia se han acercado para relatar su impotencia de ver a jóvenes menores de edad en las calles drogándose en las esquinas con el llamado “foco” o “cristal” por resultar más económico.

Los principales puntos en aquel municipio se encuentran en las colonias Nogalera, 20 de noviembre y Morelos.

Por ello es necesario también socializar los protocolos de prevención y actuación en la comunidad, con la familia y el sector educativo para en primer lugar prevenir, si se detecta casos dar seguimiento y adecuado tratamiento.

De acuerdo con el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) los programas preventivos contra las adicciones serán efectivos en la medida que se integren multidisciplinariamente: Familia, escuela, campañas masivas en medios de comunicación, iniciativas de políticas públicas, otro tipo de organización y actividades de la comunidad.

También debemos dejar de asociar el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas como elementos de prestigio, diversión o relajación, sobre todo en el seno familiar.

La prevención del consumo de drogas debe involucrarnos a todos; Autoridades, familias, amistades, empresarios, maestros y especialistas pero debe darse de una forma ordenada, sostenida y coordinada entre todos los involucrados.

Por lo anteriormente expuesto presento el siguiente punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución:

Primero.- Que este Honorable Congreso del Estado solicité a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila ampliar la cobertura de los Centros de Atención Primaria de Adicciones y que sean considerados los municipios de Múzquiz, Sabinas y Allende en la zona de los Cinco Manantiales.

Segundo.- Que este Honorable Congreso del Estado solicitó a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza el programa de trabajo y las acciones que desarrolla con el Consejo Estatal Contra las Adicciones y los exhorte de manera respetuosa implementar una campaña estatal de prevención del uso de drogas donde se incorporen todos empresarios, medios de comunicación, sociedad civil, gobiernos municipales, estatal y federal.

Tercero.- Que los 38 municipios de Coahuila repliquen el programa Joven con Sentido que implementa el DIF Estatal para fortalecer la prevención de adicciones de las oficinas de los DIF Municipales.

POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.

GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”

SALTILLO, COAHUILA A 05 DE MARZO DE 2019.

DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES

DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA” DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), CON EL OBJETO DE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DIRECTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA ATENCIÓN AL PROBLEMA MIGRATORIO QUE, CON LA LLEGADA DE CARAVANAS DE MIGRANTES A COAHUILA, HA ESTADO A PUNTO DE GENERAR CRISIS, TANTO DE CARÁCTER HUMANITARIO, COMO DIPLOMÁTICO, CON ESTADOS UNIDOS, Y, EN FUNCIÓN DE SUS INDAGACIONES, EMITAN SUS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, A FIN DE ASEGURAR UN TRATO DIGNO HACIA LOS MIGRANTES QUE ARRIBAN A ESTA ENTIDAD Y PREVENIR CUALQUIER VIOLACIÓN EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL; ASÍ MISMO, SOLICITAR AL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER, DÉ A CONOCER A ESTA SOBERANÍA LOS PORMENORES DE LA POLÍTICA MIGRATORIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS.**

Seguramente, todos hemos recibido información sobre los grupos migratorios que han permanecido en calidad de refugiados en las ciudades fronterizas de Acuña y Piedras Negras, Coahuila, pero también en torno a denuncias relacionadas con presuntas injusticias hacia migrantes por parte, tanto de efectivos militares, como de elementos de corporaciones de seguridad pública y personal del Instituto Nacional de Migración.

Esto estaría ocurriendo desde que, en noviembre pasado, arribaron al Estado caminantes que se adelantaron a la llegada del primer contingente de personas provenientes de países centroamericanos y de otras naciones.

Con motivo de dicha incursión, el día 13 de ese mismo mes, el de la voz propuso un Punto de Acuerdo tendiente a que nuestra Entidad fuese declarada por esta Soberanía “Santuario de Migrantes y Refugiados”, a manera de reconocer y aprovechar la amplia experiencia de los coahuilenses en materia de solidaridad con quienes, huyendo de las adversas condiciones de sus países de origen, deciden allegarse a México.

Como se recordará, mientras la primera caravana avanzaba, líderes empresariales expresaban su disposición a abrir fuentes de empleo para quienes decidieran quedarse en el Estado, compartiendo así el mismo sentir del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya oferta ya es de aplicación nacional. Sin embargo, mi Proposición terminó por ser desechada.

Esta declaratoria, que habría sido de carácter nominativo, serviría, entre otras cosas, para potenciar el espíritu hospitalario de los coahuilenses, de modo que se brindara a los migrantes y refugiados un trato digno, con cierto grado de bienestar. Obviamente, ningún esfuerzo en tal sentido estaría fuera de nuestras posibilidades.

De haberse aprobado tal planteamiento, le habríamos tomado la delantera en esta importante decisión a Los Ángeles, California, que hace apenas tres semanas fue declarada “ciudad santuario” para inmigrantes indocumentados, sumándose en esta postura a otras poblaciones estadounidenses, como: San José, San Francisco, Santa Ana, Chicago, Nueva York y Washington.

Posteriormente, el 22 de enero le fue aprobado a su servidor la proposición para solicitar al Ejecutivo estatal y al Instituto Nacional de Migración, un reporte sobre los preparativos que se estarían haciendo para atender la nueva oleada migratoria que se avecinaba.

Tal requerimiento fue respondido a través del Subsecretario de Gobierno y Atención Ciudadana, Lic. Alberto Aguirre Villarreal, mediante un escrito que recibí el 8 de febrero, en el que se informa de varias acciones oficiales. Por su parte, el instituto Nacional de Migración sigue sin responder a lo solicitado.

En la misiva, se asienta que: “El día viernes 01 de febrero fueron recibidos y atendidos 1,727 migrantes, a quienes se les brindó por parte del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza hospedaje y alimentación en las bodegas de SATEC, mismos que fueron trasladados a la ciudad de Piedras Negras el día 03 de febrero, en donde solicitarán asilo político en los Estados Unidos”.

“Así mismo, (...) el Instituto Nacional de Migración está realizando los censos para saber si cumplen con los requisitos necesarios que solicita dicho Gobierno. Actualmente, se encuentran en la ciudad de Piedras Negras, donde se les sigue brindando el apoyo necesario”. Fin del reporte.

Es de destacarse que en el citado escrito no se describe una estrategia definida para afrontar los retos que plantea la llegada de caravanas como esta, a pesar de que fue precisamente en ese sentido como se pidió la información. En el texto tampoco se especifican las condiciones reales en que permanecían los migrantes albergados.

Esto da pie a calificar como errática la política migratoria de Coahuila, pues todo indica que contempla únicamente solicitar recursos federales para atender a los migrantes, muchos de los cuales, mientras tanto, nos dejan, como tarea, una larga lista de quejas relacionadas con privaciones y malos tratos, producto, seguramente, de la estigmatización y criminalización de que son objeto desde tiempo atrás.

De ello han hablado profusamente los medios de comunicación, como: la BBC, CNN, Telemundo, Univisión, El Universal, Excélsior, El Heraldo de México, Televisa, TV Azteca, Eje Central, Vanguardia, Zócalo, El Diario de Coahuila, Razón de Ser, etcétera.

Hace casi tres semanas, el tono de las notas informativas se acentuaría con titulares, como: “Crece la tensión en la frontera con México”, y es que migrantes “desesperados” habían desatado un motín en el centro donde se hallaban recluidos, en Piedras Negras, para quejarse de las malas condiciones de vida en que al parecer se encontraban.

En tanto, la flamante Dirección de Delitos de Alto Impacto y Cometidos en Agravio de Migrantes, que en marzo de 2017 presumía de contar con una política migratoria, misma que aún se desconoce, aún permanece sin presentar los resultados de su actuación.

Lo que sí ha trascendido hasta hoy es que, durante las 24 horas del día, el albergue improvisado en Piedras Negras estuvo vigilado por elementos de la Policía Federal, Fuerza Coahuila y Secretaría de Defensa Nacional. Todo el aparato de vigilancia, con sus relevos, de los tres niveles de gobierno, sumaban aproximadamente 700 personas.

Respecto del referido grupo de migrantes, se reporta que, después de varios días de permanecer “aislados” en una bodega de la firma Masesa, habilitada como albergue, de la que sólo podían salir custodiados, algunos migrantes tuvieron que amotinarse, en protesta por supuestas condiciones de incomunicación, carencias, mala alimentación, falta de atención médica, detenciones arbitrarias, deficiente asistencia migratoria y maltratos de diversas autoridades. Algunos se “escaparon” para intentar cruzar el Río Bravo y entregarse a la patrulla fronteriza.

"No nos dejan salir. Nos tienen encerrados como presos... Hay personas enfermas y de la tercera edad y está haciendo un frío tremendo", denunciaría de manera anónima uno de los casi 2 mil refugiados. Lo único que pedían era que se les abriera el portón para ir al puente y concretar un acuerdo con el presidente Trump y las leyes de Estados Unidos.

También hay denuncias de que el Instituto Nacional de Migración no les entregaba las tarjetas de residencia que el Gobierno Federal se comprometió a proporcionarles, a fin de que los interesados puedan vivir y trabajar en México por un año.

Unas 120 personas que participaron en los motines fueron trasladados a otras ciudades fronterizas, como Reynosa y Ciudad Juárez. Por otra parte, 200 personas estaban la semana antepasada en trámite de recibir sus respectivas tarjetas humanitarias, mientras 250 más anunciaron su decisión de regresar a sus países de origen; otros individuos estaban siendo deportados, por tener antecedentes penales o pertenecer a la organización delictiva “Mara Salvatrucha”; 150 deportados más no tenían documentos. A esta fecha, dicho alojamiento se encuentra prácticamente vacío.

Por otra parte, resulta significativo que El Pentágono haya anunciado, el 5 de febrero, que enviaría 250 militares a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, colindante con Piedras Negras, ante el arribo de la caravana de migrantes. Los militares fueron enviados en respuesta al llamado que hizo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, al afirmar que 2 mil migrantes habían llegado al norte de México, como parte de una "caravana", con intención de cruzar a Texas.

El mismo presidente Donald Trump llamó la atención sobre esta última caravana y acusó a “ciudades mexicanas”, cuyos nombres no mencionó, de haber transportado a inmigrantes indocumentados a la frontera.

El 7 de febrero, la BBC publicó lo siguiente: “El diario Reforma consideró que Trump ´arremetió contra las ciudades mexicanas´. Los medios mexicanos relacionan sus declaraciones con las realizadas anteriormente por José María Fraustro, el secretario de Gobierno del estado mexicano de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos”.

El funcionario estatal había informado que el gobierno de Coahuila gestionaba el transporte para 1,600 migrantes que viajaban de Saltillo a Piedras Negras. "No es sencillo, porque son 500 kilómetros y ya sea en camiones o en plataformas, pero buscaremos la manera de apoyarlos", habría explicado.

La BBC Mundo apuntó que “Trump había hecho una alusión al respecto el mismo martes de su discurso, pero por la mañana: ´Un gran número de personas está llegando a través de México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur´", agregó en Twitter.

Ante esta compleja realidad, resultan insuficientes los anuncios del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, de que la situación simplemente “está controlada” y que el interés de su Administración se centra en evitar que Estados Unidos cierre la frontera ante la posibilidad de una entrada masiva de migrantes a territorio estadounidense.

Fenómenos como el de las caravanas de migrantes “llegaron para quedarse” ha sentenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. En efecto, nuevas oleadas migratorias están por suscitarse en territorio mexicano y, desde luego, también en Coahuila.

Y mientras se estudia un plan para combatir la migración en Centroamérica, a orillas del Suchiate, que marca el límite entre México y Guatemala, están buscando ingresar al país por lo menos otros 10 mil migrantes, muchos de los cuales llegarán a la frontera estadounidense, en donde, por otra parte, se habla de un “limbo” migratorio. ¿De verdad estamos preparados para afrontar exitosamente los retos implícitos en este fenómeno?

Por todo lo anteriormente expuesto, y en apego a lo establecido en los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Pleno, a fin de que sea tramitada como de urgente u obvia resolución, la siguiente...

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO. - Se solicita de la manera más atenta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Luis Raúl González Pérez, que, en apego a lo que contempla el Artículo 6º, Fracción XV, de la Ley que rige a esta institución, abra una carpeta de investigación especial en torno a los graves atropellos en que, semanas atrás, habrían incurrido instancias de los gobiernos federal, estatal y/o municipal, en perjuicio y agravio de las caravanas de migrantes que arriban a Coahuila, particularmente contra quienes han sido albergados en la ciudad de Piedras Negras, de entre quienes han surgido motines y otros hechos violentos, en respuesta a haber recibido presuntamente un trato inhumano, y emita, en su caso, las respectivas recomendaciones a las autoridades responsables, considerando que dichas violaciones serían graves, tanto por el significativo número de posibles afectados, como por las consecuencias previsibles que plantea el actual fenómeno migratorio, inclusive de índole diplomático.**

**SEGUNDO. - Se solicita de manera respetuosa al representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Jan Jarab, que, en observancia al acuerdo suscrito entre este organismo y el Estado Mexicano para establecer una oficina en México, así mismo, en el marco de cooperación a largo plazo y de los acuerdos y convenios signados por ambas partes el 6 de febrero de 2008 y el 22 de febrero de 2017, estreche su coordinación con el Gobierno Federal para que las decisiones y recomendaciones de órganos convencionales y procedimientos especiales de la ONU y otras entidades internacionales, sean tomados en cuenta por las autoridades respectivas, de modo que los problemas inherentes a las oleadas migratorias en Coahuila sean atendidas de manera justa; así mismo, monitoree y elabore, según sus funciones, un informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de los migrantes recibidos en Coahuila, así como de las implicaciones diplomáticas que, con respecto al gobierno de Estados Unidos, entrañan los apoyos que brindan los tres órdenes de Gobierno a los migrantes.**

**TERCERO. - Se solicita atentamente al Secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, las garantías y facilidades necesarias para que personal de la Comisión, tanto estatal, como nacional, de los Derechos Humanos, realicen su labor de verificar que los apoyos dirigidos a los migrantes que llegan a la Entidad sean otorgados en un marco de verdadero respeto a la dignidad humana, pues hay indicios de que en algún momento a dichos defensores no se les ha permitido efectuar su tarea, así mismo, se sirva dar a conocer de manera íntegra a esta Soberanía la política migratoria de la Administración de Miguel Ángel Riquelme Solís e informe sobre los resultados obtenidos de su aplicación, especialmente en la atención que, a través de albergues, se brinda a las caravanas de migrantes que arriban a nuestro Estado.**

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 04 de marzo de 2019**

***“Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**COORDINADOR**

**GRUPO PARLAMENTARIO “PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA”**

**PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA)**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, CONJUNTAMENTE CON LAS DEMÁS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE HACER UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES FEDERALES PARA QUE RECONSIDEREN EL MECANISMO DE APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE PRETENDEN EMPLEAR Y PREVALEZCA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFUGIO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, QUE VIVEN VIOLENCIA EXTREMA, COMO EN AÑOS ANTERIORES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que suscriben el presente documento, con fundamento en los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos ante esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que la misma sea considerada **de urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Hace apenas unos meses abordamos en esta Legislatura el tema de los refugios. Hicimos un llamado a los tres órdenes de gobierno para que destinaran los recursos necesarios para apoyar la sustentabilidad y permanencia de los refugios para mujeres en situación de violencia.

En esa ocasión, estuvieron presentes las directoras de los 6 Refugios que existen en nuestro Estado y mencionamos la importancia de estos espacios de protección, de vivienda temporal, de lugares terapéuticos para las mujeres y sus hijos e hijas que se encuentran en situación de violencia familiar.

Quien iba a pensar que solo unos meses después, las condiciones cambiarían no solamente para estos Refugios sino para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que tenían la opción de acceder a estos Refugios y sentirse protegidas. Hoy están pendiendo de un hilo estos espacios tan importantes y necesarios para las mujeres que son víctimas de violencia.

Hemos escuchado cientos de inconsistencias por parte del Gobierno Federal, primero que se cancelarían los apoyos a los refugios y centros en los que se brinda asistencia a las mujeres que viven violencia, otro día abren la convocatoria para que los organismos de la sociedad civil (refugios) accedan recursos públicos y emiten las reglas de operación y en esta última semana salen diciendo que ya no se dará el apoyo a los refugios y que de ahora en adelante se dará directo a las víctimas, yo me pregunto ¿Cómo puede ser esto posible?

Es completamente absurdo pensar que el problema se resuelve dándoles dinero directamente a las mujeres que sufren violencia. Esto lo único que refleja es la falta de conocimiento acerca del fenómeno de violencia que viven las mujeres en México, un desconocimiento total del funcionamiento de los refugios de las organizaciones de la sociedad civil o los centros de atención externa que atienden a miles de mujeres en situación de violencia. Es una ofensa y una burla ofrecerles dinero directamente a las mujeres, cuando lo que buscan es protección y seguridad.

Imaginemos a una mujer que un día sufre de violencia por parte de su pareja, esa persona no necesita el dinero en ese momento y mucho menos va a pensar en llenar un formulario para que alguien le deposite…lo que esa mujer requiere de urgencia es seguridad, es apoyo, es asesoría, es solidaridad, es atención psicológica, médica, etc.

¿Qué alguien me explique, por favor, cómo puede ser esto posible? Por que definitivamente yo no doy crédito a lo que está sucediendo.

Estos espacios surgieron en la década de los 90, a iniciativa de la sociedad civil organizada y de movimientos de mujeres visionarias, que con determinación lograron colocarlo en la agenda pública.

Hoy en nuestro país existe una *Red Nacional de Refugios* que está integrada por 41 *Refugios* y 39 *Centros de Atención Externa*, estamos hablando de 80 espacios temporales de atención y protección especializada, espacios seguros para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar o sexual, que les ayudan en su recuperación y redefinición de su plan de vida libre de violencia, mediante servicios de protección y atención integral.

Están reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, particularmente en el Capítulo V, del Título III que está dedicado específicamente a los refugios para las víctimas de violencia.

Hoy estamos viendo con tristeza y desesperación las inconsistencias en estos temas tan sensibles no solo para las mujeres mexicanas, sino para todos los defensores de los derechos humanos. Primero el caso de las guarderías y estancias infantiles y ahora el tema de los refugios.

Tenemos que ser más responsables con estos programas y proyectos, no podemos jugar a la improvisación. Debemos abordar el problema desde una visión protectora de derechos humanos y no desde una perspectiva clientelar. Debemos dejar a un lado las cuestiones partidistas y velar por los derechos humanos y el bienestar social. Si un programa funciona, hay que retomarlo, mejorarlo, pero no retroceder. Las madres trabajadoras y las víctimas de violencia merecen ser respetadas. Quienes llegan a un refugio no lo hacen para pedir dinero, llegan huyendo de su agresor, llegan buscando protección, llegan a esconderse, a salvar su vida. Y esto es lo que les ofrecen en los refugios.

Hoy desde esta tribuna, exhortamos nuevamente al Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes son los encargados de la operación de este programa y quienes emiten la convocatoria pública para la asignación de subsidios para los refugios en los que se brinda atención a mujeres, hijas e hijos, que viven violencia extrema, para que reconsideren su postura y aclaren lo que va a suceder; que si dicen que hay corrupción, que vayan tras los corruptos y denuncien ante las instancias correspondientes, pero que no quiten de la noche a la mañana lo que ha funcionado durante años, como sólidos espacios que son garantía de apoyo para las mujeres víctimas de violencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 fracción VI, 84, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución**, el siguiente:

**P U N T O D E A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se solicite al Gobierno Federal reconsidere el mecanismo de apoyo a mujeres en situación de violencia que pretenden emplear y prevalezca la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema, como en años anteriores.

**SEGUNDO.-** Se solicite a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Salud, que de manera coordinada vigilen y den seguimiento a las acciones del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en el cumplimiento de las bases de la convocatoria pública expedida para 2019 para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de marzo de 2019.**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**  |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,** **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
|  **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS**  |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA**  |  | **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
|  |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.-**

**La suscrita Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXI Legislatura del Honorable Congreso de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 179, 180, 181, 182 de la LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el cual se solicita que este H. Pleno del Congreso del estado de Coahuila exhorte al Presidente Municipal de Frontera, Coahuila, señor Florencio Siller Linaje, así como al C. Alain Obed Mendoza, jurídico del ayuntamiento de esa ciudad, a dar cumplimiento irrestricto de los artículos 1º, 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado de Coahuila en sus artículos 7 y 8, así mismo, explique y otorgué en su caso, ante los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, la justificación que acredite el motivo de sus desafortunadas declaraciones y en su caso, se deslinden o finquen las responsabilidades correspondientes; lo anterior con base en las siguientes:**

**CONSIDERACIONES**

El municipio es la base de la estructura político-administrativa en la vida gubernamental en México, hoy más que nunca gozamos de democracia y pluralidad en nuestro país, hemos sido participes de la actividad y participación ciudadana, a través no solo del voto durante la jornada electoral, sino en la participación diaria reflejada en redes sociales y cada vez con más opiniones y posturas ante toda la gama de temas o decisiones de los diferentes ámbitos de gobierno.

El actuar del servidor público también ha tenido que adaptarse el escrutinio diario que por forma parte intrínseca del encargo o investidura, misma que es analizada por la ciudadanía.

A través de los miles de ojos que hoy observan las decisiones de gobierno y el actuar de sus funcionarios, es indispensable que todos los servidores públicos estemos conscientes y tengamos la apertura más que nunca para atender las críticas y comentarios, desde luego, siempre en estricto apego a lo que establece la Constitución Federal.

En diversas ocasiones durante este primer año de la LXI legislatura hemos recibido oficios, quejas y reclamos de algunos munícipes con respecto a actos ilegales y acciones violatorios a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado o bien, el Código Municipal para el Estado de Coahuila; acciones que representan excesos y abuso de autoridad por parte de algunos presidentes municipales, que creyendo que por el encargo que desempeñan pueden hacer lo que se les plazca o venga en gana. Antecedentes directos en esta legislatura hemos visto varios desgraciadamente, y han sido parte de nuestro actuar como Congreso del estado, generando exhortos y reuniones con los implicados para llamar a la aplicación del Estado de derecho.

Sin embargo, y a pesar de que nuestra normativa, nuestro actuar como legislatura, y la posición de la actuales administraciones es la de cumplir a cabalidad con nuestra obligación democrática y republicana, es así, que despierta extrañeza lo sucedido en el municipio de Frontera, Coahuila, donde el Presidente Municipal C. Florencio Siller Linaje, así como al C. Alain Obed Mendoza, jurídico del ayuntamiento de esa ciudad, deciden amenazar públicamente mediante una declaración, a quien hable mal del alcalde o de su equipo de trabajo, desgraciadamente exhibiendo el no conocer sus obligaciones para acatar la ley, pues de manera vergonzosa para nuestra vida democrática, decide cuándo y que aplicar de la ley, dejando aun lado las garantías individuales y los derechos humanos que todos los ciudadanos gozamos.

Declaraciones recogidas por distintos medios de comunicación, de las cuales transcribo algunos ejemplos:

https://noticiasmonclova.mx/amenaza-alcalde-demandara-quien-hable-mal-facebook-twitter/

(NM noticias Monclova)

Frontera, Coahuila.- Olain Obed Mendoza, jurídico del ayuntamiento de Frontera, amenazó con demandar legalmente a todo ciudadano que critique al alcalde, Florencio Siller, mediante las redes sociales.

De acuerdo al jurídico la demanda sería por difamación y advirtió que se tomarán en cuenta todos los señalamientos que se hagan en redes sociales como Facebook y Twitter en contra del alcalde.

“No vamos a permitir que ninguna persona, ningún ciudadano bajo ningún motivo hable mal de nuestra investidura que es nuestro alcalde, mucho menos de nosotros que somos su equipo de trabajo, la persona que nos percatemos que está haciendo declaraciones falsas, que está declarando mediante facebook, twitter o ante cualquier medio electrónico desprestigiando a este municipio y sobre todo a nuestro alcalde, se tomarán las medidas pertinentes y se va a actuar conforme a derecho en torno de todas y cada una de las personas” señaló el jurídico.

Estás declaraciones fueron realizadas en un movimiento encabezado por el propio alcalde, quien también estuvo acompañado por un grupo de trabajadores municipales.

Esta no es la primera vez que el alcalde de Frontera atenta contra la libertad de expresión de los ciudadanos y de comunicadores.

Durante el mes de julio del 2018 la periodista Mayra Cisneros denunció haber recibido amenazas directas del alcalde Florencio Siller.

Cisneros denunció en un video que recibió amenazas del alcalde después de que ella mencionó, en su programa de radio, que el cierre de campaña del entonces candidato estuvo vacío

<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1551106.alcalde-procedera-contra-quienes-lo-critiquen.html>

(El Siglo de Torreón)

“No se va a permitir bajo ninguna circunstancia que ninguna persona, ningún ciudadano hable mal de nuestra investidura, que es el alcalde” expresó Alain Obed Mendoza, director jurídico junto al presidente municipal Florencio Siller Linaje.

El alcalde tiene en menos de un año tres denuncias de ataques a la libertad de expresión ante Artículo 19, organismo internacional de protección a periodistas, que confirmó que tiene documentados tres reportes de agresiones a dos representantes de medios masivos durante 2018.

Una de estas denuncias fue el caso de amenazas telefónicas a una reportera de radio, Mayra Máyela Cisneros, a la que hizo despedir de su empleo por no transmitir en su medio electrónico hechos que no le constataban de un boletín de prensa que no le llegó.

“Extrae” mecanismo de protección a periodistas a reportera amenazada por alcalde

La segunda queja es de la misma comunicadora, días después de su despido denunció que fue privada de su libertad durante una noche por un comando de elementos del grupo de Policía de Reacción Rápida, cuerpo de élite municipal que según su testimonio -presentado ante la Fiscalía General del Estado- la “paseó por varias horas de la madrugada, torturándola psicológicamente con que la iban a matar por haber denunciado penalmente al presidente municipal”.

La reportera de radio fue “extraída” de Ciudad Frontera por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, y llevada a otro lugar fuera de Coahuila por su seguridad.

Otra denuncia ante el organismo internacional fue la del reportero Gabriel Ángeles Ovando, al que agredieron y robaron su teléfono celular presuntamente por órdenes del alcalde, cuando documentaba con este en video, que elementos de Seguridad Pública de Monclova y Frontera abandonaron sus labores de vigilancia para jugar, uniformados, armados y con las patrullas, en un campo de beisbol del municipio rielero.

Ángeles Obando ha denunciado a lo largo de 14 meses irregularidades de la administración pública del edil.”

Es primordial recordar, aunque pareciera el caso que algunos no lo han leído, lo que mandata en primera instancia nuestra Carta Magna

*Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011*

 *Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión*

 *Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.*

 *Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.*

Por su parte y ratificando el pacto federal nuestra Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza establece:

*Artículo 7º. Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Federal.*

 *Las normas relativas a los derechos humanos y a las libertades reconocidas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ninguna disposición legal puede ser interpretada en el sentido de:*

 *a) Permitir a la autoridad suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México.*

*b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedan estar reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México.*

*c) Excluir otros derechos y garantías que sean inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática y representativa de gobierno.*

 *Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que determine la ley.*

*Artículo 8º. En el Estado de Coahuila de Zaragoza, el ejercicio de los derechos fundamentales no tiene más límites que las disposiciones prohibitivas de la ley. De ésta emanan la autoridad de los que gobiernen y las obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el ejercicio de la autoridad debe concretarse a las atribuciones determinadas en las leyes.*

 *Corresponde a los poderes públicos del estado y de los municipios y a los organismos públicos autónomos, promover e instrumentar las garantías necesarias para que sean reales, efectivas y democráticas, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, la justicia social y todos los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, de todas las personas y de los grupos en que se integran; facilitar su participación en la vida política, económica, cultural y social del estado; así como remover los obstáculos que impidan o dificulten el pleno desarrollo de estos derechos fundamentales.*

Nuestro Estado de derecho prevé el correcto actuar del funcionario, con derechos y obligaciones, el servicio público no restringe las facultades constitucionales de que goza cada ciudadano, incluso si este es funcionario público, quien en todo momento tiene el derecho de preservar su buen nombre ante cualquier acto en su contra, pero; este mismo Estado de derecho establece los procedimientos e instancias a los que hay que recurrir ante cualquier agravio, y nunca utilizando el foro que en su actuar como funcionario tiene para instaurar la amenaza o intolerancia ante la crítica.

Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:

**Proposición con Puntos de Acuerdo: para que sea turnada a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:**

**PRIMERO.- Se Exhorte al Presidente Municipal de Frontera, Florencio Siller Linaje, así como al C. Alain Obed Mendoza, jurídico del ayuntamiento de esa ciudad, a observar el cumplimiento irrestricto de los artículos 1º, 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 7 y 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**SEGUNDO.- Se Solicite al acalde que explique y otorgué en su caso, ante los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, la justificación y aclaración de sus desafortunadas declaraciones.**

**TERCERO.- Se inicien los procedimientos sancionatorios y se deslinde la responsabilidad en su caso.**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL**

**SALTILLO, COAHUILA A 05 de Marzo de 2019.**

**DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES**

**DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA EN CONJUNTO CON LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, “CON OBJETO DE EXHORTAR A LOS 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO, LA UTILIZACIÓN DE PLANTAS ENDÉMICAS EN LOS JARDINES Y AREAS VERDES DE CADA MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD REGIONAL A NUESTRO ESTADO Y EVITAR MANTENIMIENTOS COSTOSOS A DICHOS LUGARES”.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Josefina Garza Barrera, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de urgente y obvia resolución en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Las plantas endémicas son aquellas que solamente viven en un lugar determinado, es decir su área de distribución se delimita a un lugar, región, continente.

Las plantas más emblemáticas del territorio mexicano son los cactus o cactáceas siendo nuestro país el que cuenta con la mayor diversidad de este tipo, con la presencia de alrededor de 52 géneros y 850 especies de las cuales el 75% son emblemáticas. La mayoría de las cactáceas se encuentran en las zonas áridas y semiáridas de México y nuestro estado al ser zona árida del norte del país nos da la oportunidad de encontrar diferentes especies de cactus.

Son plantas que a pesar de la escasez de agua y de las temperaturas extremosas pueden crecer, y desarrollar eficientes maneras de vivir. Antes de morir estas plantas dejan semillas que germinan en la temporada de lluvia, además que se caracterizan por almacenar agua en sus hojas y espinas para estar en posibilidad de resistir las sequias.

La flora de Coahuila es diversa y presenta también una gran variedad de plantas que derivan tanto del clima como de la misma geografía. Podemos encontrar una gran diversidad tales como: lechuguillas, gobernadora, cactus, magueyes, nopales, yucas, huizaches y mezquites, además de los bellos nogales y fresnos; sin dejar de lado las plantas aromatizantes como la albahaca, hierbabuena, romero, lavanda, y por supuesto la sábila.

Las plantas con las que cuenta Coahuila pueden mejorar el paisaje urbano, y al plantar este tipo de especies nativas y que además como los cactus son de bajos requerimientos hídricos para reforestar ciudades, da una solución simple que se puede implementar.

Como sabemos una de las facultades y competencias que tienen los ayuntamientos es la prestación de Servicios Públicos Municipales en el equipamiento de parques, calles y jardines, tal y como lo señala el artículo 102, fracción IV, inciso g), del Código Municipal del Estado de Coahuila, y de conformidad al artículo 180 del mismo ordenamiento son los bandos de policía y gobierno de los municipios en los cuales se regula el uso, conservación y cuidado de las vías públicas , parques, jardines entre otros.

Además que es en este rubro que el municipio destina una cantidad considerable de recursos para el mantenimiento y ornamento de los parques, plazas y áreas verdes, que al introducir árboles y plantas de otras regiones corren el riesgo de requerir un mayor mantenimiento por no adecuarse a las circunstancias climatológicas de nuestra geografía y en algunos casos estas plantas no logran nunca adecuarse a nuestro clima dando como resultado la corta vida de estas plantas y generando la necesidad de reforestar las áreas verdes.

Como experiencia personal me he percatado en estos días que el Municipio de Saltillo introdujo plantas endémicas en la entrada de su ciudad justo en el lugar que se encuentran las letras de bienvenida es ahí donde observe plantas como las lechuguillas, algunos cactus y magueyes, plantas que insisto requieren un mantenimiento menor, poca agua y representan a nuestro Estado brindando su identidad regional.

Es decir, con las plantas nativas podemos asegurar que de forma natural serán el mejor ornamento de nuestros parques y plazas ya que como he señalado con antelación, gracias a sus mecanismos de supervivencia les permite existir y reproducirse generando un ahorro en el mantenimiento de estos espacios, creando un ecosistema urbano en armonía con el entorno y sostenible.

Es viable con esto lograr reducir drásticamente el uso de agua y el gasto en el mantenimiento de las áreas verdes como lo son los parques y plazas públicas con las que cuenta cada municipio del Estado, y así podrá cada municipio utilizar el recurso económico ahorrado en otras necesidades primordiales de la ciudadanía.

Es por ello que solicitamos se analice la reforestación de plazas públicas y parques de los municipios de Coahuila utilizando plantas nativas de la región ya que no solamente se evitarían un costoso mantenimiento a las plazas, sino se beneficiaría la imagen de las ciudades dando un toque de identidad regional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.- SE ENVÍE ATENTO EXHORTO A LOS 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COORDINEN ACCIONES Y ANALICEN LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LA REFORESTACION DE AREAS VERDES, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS CON PLANTAS ENDÉMICAS CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD REGIONAL A NUESTRO ESTADO Y EVITAR MANTENIMIENTOS COSTOSOS A DICHOS LUGARES.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 4 de marzo de 2019**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,** **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

 **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ**  |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada María Eugenia Cázares, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que esta H. Pleno**  **solicite a la Secretaría de Finanzas un informe detallado sobre la legalidad del cobro anticipado, con cargo al ejercicio fiscal 2019, de los derechos de control vehicular cobrados en 2018; lo anterior en base a la siguiente:**

 **Exposición de Motivos**

En medios de comunicación, en fecha 23 de diciembre, se publicó lo siguiente:

[*http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/12/23/amplia-coahuila-hasta-diciembre-prepago-control-vehicular-781286.html*](http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/12/23/amplia-coahuila-hasta-diciembre-prepago-control-vehicular-781286.html)

*“….***Amplía Coahuila hasta el 31 de diciembre prepago de control vehicular**

**El 30 por ciento de descuento en costo de placas sobre el precio 2019 será válido hasta esa fecha**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 23de Diciembre de 2018.- Gracias a la repuesta de los contribuyentes al Programa de Prepago 2019, el Gobierno del Estado amplía la validez hasta el 31 de Diciembre.

De esta manera, quienes aún lo deseen podrán realizar el pago de sus obligaciones fiscales de Derecho de Control Vehicular con una reducción de más de un 30 por ciento de descuento de las placas sobre el precio del ejercicio 2019, para todo tipo de placas de servicio particular, informó Javier Díaz González, Administrador Fiscal del Estado.

….

El funcionario detalló que los pagos se pueden realizar en la página web de [www.pagafacil.gob.mx](http://www.pagafacil.gob.mx/), módulos de asistencia fiscal (ubicados en centros comerciales) y en las Administraciones Locales de Recaudación de su localidad.

Para realizar el prepago en los trámites de cambio de propietario y alta de vehículo nuevo, se deberá acudir a la Administración Local de Recaudación…” **Fin de la cita textual.**

El cobro de los impuestos se limita, entre otros principios constitucionales, al de anualidad. Esto, eso, solo puede recaudarse lo establecido en la ley durante el año en que las disposiciones fiscales están en vigor, no antes ni después.

A mayor abundamiento, sirvan los criterios siguientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Novena Época

Registro: 182049

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo : XIX, Marzo de 2004

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 9/2004

Página: 957

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.**

De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria.

Novena Época

Registro: 176251

Instancia: Primera Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

 XXIII, Enero de 2006

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 1a. CLXXXV/2005

Página: 729

**LEYES DE INGRESOS. NO CONSTITUYEN LEYES PRIVATIVAS POR EL HECHO DE QUE SU VIGENCIA SEA DE UN AÑO.**

La vigencia de las normas no es materia de tutela de la garantía contenida en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que aquéllas se dirijan a una generalidad de individuos que pueden ubicarse en el supuesto legal. En ese tenor, si la vigencia de un año de la Ley de Ingresos se debe a que la naturaleza de la materia que regula, por mandato constitucional, es también anual, y no así a su aplicación a un caso concreto, por encontrarse dirigida su hipótesis a un número indeterminado de gobernados, se concluye que dicha ley, por su vigencia, no constituye una ley privativa y, por ende, no transgrede el precepto constitucional mencionado.

Este principio se encuentra plasmado en la Constitución Federal y en la local. Es así, que, aun tratándose de estímulos fiscales, estos deben aplicarse durante el ejercicio fiscal correspondiente. Algunos dirán que no es así, porque, por ejemplo, las administraciones cobran impuestos atrasados con recargos de hasta cinco años atrás con relación al ejercicio fiscal que corre; pero tal argumento no es válido como comparativo, ya que las leyes fiscales de la nación y del Estado, y los principios fiscales que se derivan de la Carta Magna Federal establecen y reconocen el derecho a cobrar impuestos y créditos fiscales atrasados; y no, no es el mismo caso de cobrar impuestos adelantados.

Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:

**Proposición con Puntos de Acuerdo**

**Que, por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**Único. - Este H. Pleno solicita a la Secretaría de Finanzas un informe detallado sobre la legalidad del cobro anticipado, con cargo al ejercicio fiscal 2019, de los derechos de control vehicular cobrados en 2018.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

##### *ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 05 de marzo de 2019**

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ**

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES**

**DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, “CON OBJETO DE SOLICITAR A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, IMPLEMENTE ACCIONES ENCAMINADAS A BRINDAR UNA OPTIMA ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS A LA POBLACION DE ADULTOS MAYORES QUE CADA MES REQUIEREN LOS SERVICIOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE SUS PENSIONES.”**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada María Esperanza Chapa García, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

La legislación del Estado de Coahuila es clara y determinante en la protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y en su marco jurídico prevé que todas las instituciones de orden público y privado del Estado, deben procurar que en sus instalaciones cuenten con las condiciones de infraestructura necesaria para facilitar el acceso de las personas adultos mayores y se les debe otorgar por lo menos sillas de espera, y filas preferenciales para que se les dé un trato digno, especial y primordial en el momento que acudan a realizar un trámite personal. Lo anterior se encuentra contemplado en el artículo 8 bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades que integran el sistema financiero mexicano, con la finalidad de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento siempre en protección de los intereses del público.

Quedando lo anterior como antecedente, en el tema de las pensiones de los adultos mayores, es decir las pensiones de vejez o cesantía tienen como objetivo ayudar a controlar la pérdida o disminución del ingreso de una persona al final de su vida productiva, es un derecho adquirido a base de trabajo, de servicio, de años de entrega a una empresa, al gobierno, al empleador. Es la garantía que adquirieron los adultos mayores para contar con una calidad de vida digna, al haberse retirado de la etapa productiva laboral.

Desgraciadamente aún podemos observar el viacrucis en el que se convierte la mayoría del tiempo, el poder cobrar su pensión, es primero que nada llegar a cualquier institución bancaria, formarse por largas horas y si les va bien alcanzar un lugar para sentarse y a si su espera es menos cansada.

Los bancos generalmente cuentan con más de dos ventanillas para tramites generales, sin embargo, muy pocas veces tienen en servicio el total de sus ventanillas operando, no se trata de que contraten más personal, lo cual sería lo ideal, se trata de otorgar a nuestros adultos mayores atención primordial, sobre todo los días que sabemos les depositan su pago. También es importante que los establecimientos bancarios cuenten con los lugares adecuados para que en caso de tener que esperar lo puedan hacer sentados, es decir si los días que hay mayor afluencia de adultos mayores en los bancos pudiesen contar con al menos dos o tres ventanillas para trámite exclusivo de ellos, y brindarles un trato preferencial sería de gran apoyo a este grupo de personas.

Por ello aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la Comisión Nacional Bancaria para que implementen acciones para promover entre el personal de las instituciones bancarias a que garanticen un trato digno que radique los prejuicios y estereotipos negativos que se puedan tener de los adultos mayores, con la finalidad de crear una imagen positiva de la vejez y sensibilizar sobre la atención preferencial ya que esto no es una cuestión de compasión sino del reconocimiento de los derechos de ellos.

Lo anterior toda vez que en distintas ocasiones el mismo personal de los bancos actúa de manera apática al atender a este grupo ciudadano y hay que enfatizar que las personas adultas mayores al igual que cualquier ciudadano, tiene el derecho a disfrutar y vivir en un entorno en el cual sean tratados con total respeto y cualquier tipo de trato inadecuado sería una violación a sus derechos.

Hay que respetarlos, solidarizarse, reconocerle ampliamente sus derechos y su contribución al país, brindándoles una atención digna y oportuna.

Es por ello que hacemos un llamado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la finalidad de solicitarle la implementación de acciones de promoción y de concientización dentro de las entidades que integran el sistema financiero mexicano, en especial al sector bancario para que dentro de los servicios que éste presta, brinden una óptima atención y de respeto a la población de adultos mayores especialmente en los días que acuden al trámite y cobro de sus pensiones.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. - ENVÍESE ATENTO EXHORTO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA CON OBJETO DE SOLICITAR A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, IMPLEMENTE ACCIONES ENCAMINADAS A BRINDAR UNA OPTIMA ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS A LA POBLACION DE ADULTOS MAYORES QUE CADA MES REQUIEREN LOS SERVICIOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE SUS PENSIONES.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 4 de marzo de 2019**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,** **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

 **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA”, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), A FIN DE QUE LA CONAGUA, LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, COMO DE COAHUILA, Y EL JEFE DEL EJECUTIVO ESTATAL, TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PONER FIN, DE UNA VEZ POR TODAS, A LAS EVIDENTES IRREGULARIDADES BAJO LAS CUAL OPERA EL CIMARI UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, CAUSANDO UN LAMENTABLE DETERIORO AL MEDIO AMBIENTE Y PONIENDO EN GRAVE RIESGO LA SALUD DE LOS POBLADOS CERCANOS A DICHO DEPÓSITO DE RESIDUOS TÓXICOS.**

Compañeras y compañeros Diputados: aún es fecha que los habitantes de las comunidades cercanas al llamado Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Cimari), instalado en General Cepeda, Coahuila, reportan una serie de daños al medio ambiente que rodea a dichas instalaciones y, lo peor, graves afecciones a la salud de varias poblaciones de ese municipio.

Todo, desde que la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S. A. obtuvo de Semarnat, en 2014, la autorización respectiva para la instalación de dicho centro de confinamiento de desechos tóxicos.

Como lo señalé desde esta tribuna en días pasados, lo que en su momento fue el mayor vertedero de desechos contaminantes del país, hoy se consolida como un monumento a la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de proteger la naturaleza y garantizar la salud pública.

Los lugareños siguen aportando evidencias claras que algo serio está pasando, tanto con su salud, como con su entorno, derivadas de las operaciones del referido Cimari. Mientras tanto, las autoridades responsables de este desastre insisten en que no hay impacto ecológico, mucho menos problemas de salud entre la población. Forzosamente, una de las dos partes está mintiendo.

Pero son los manifestantes los primeros en haber levantado la voz para afirmar que son las autoridades estatales las que están faltando a la verdad. Es obvio que, a partir de que se instaló ese vertedero, han resultado contaminados los mantos acuíferos de la zona, lo mismo que la vegetación, la fauna y las áreas de cultivo cercanas.

Si damos crédito a la vieja afirmación de que “la voz del pueblo es la voz de Dios”, entonces concederemos al menos el beneficio de la duda a los denunciantes, entre ellos, destacados activistas de la región y la entidad.

Especialistas han dicho que el mayor factor de riesgo siempre lo serán las eventuales fallas humanas en el manejo de los residuos peligrosos.

En este sentido, es preciso destacar que una de las principales irresponsabilidades en el manejo del Cimari tiene qué ver con la transportación de material peligroso por las carreteras habituales, cuando se sabe que un depósito de tal naturaleza requiere de vías alternas hacia éste, mismas que aún no se construyen, lo cual significa un aumento exponencial de las posibilidades de contaminación ambiental.

Los fuertes intereses de particulares sobre las ganancias que genera operaciones del Cimari no contemplan, evidentemente, evitar derrames accidentales de desechos, y omiten que ese confinamiento ha presentado varios accidentes, incluso incendios.

Ya lo he reseñado aquí: en diciembre de 2014, alrededor de 200 habitantes de 48 ejidos del municipio de General Cepeda, así como 89 campesinos del ejido Hipólito, se pronunciaron, mediante un escrito dirigido a la Semarnat, en contra de la instalación de dicho confinamiento. A partir de ahí inicio una lucha incesante para que se elimine dicho depósito, o bien, se verifique si efectivamente está operando con las medidas de seguridad necesarias.

Luego, el 29 de enero de 2015 un grupo de activistas, entre los cuales figuraron Jesús Gonzáles Schmall, José Luis Villaseñor, Claudia Garza del Toro y Carlos Pepi, presentaron al titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, una denuncia ciudadana, en la que se solicitaron medidas preventivas, tanto como la revocación del contrato respectivo para la operación del centro de tratamiento.

A esta lucha se sumó posteriormente el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien junto con el sacerdote Pedro Pantoja, denunciaron públicamente el grave problema que entraña el CIMARI, cuya instalación no se pudo evitar, debido a que las autoridades se inclinaron por proteger fuertes intereses políticos y empresariales.

En agosto de 2016, fue denunciado un derrame de residuos peligrosos. Dos años después, vecinos del confinamiento afirmaron que, debido a las lluvias, se registró un derrame de líquidos, matando la vegetación colindante.

Así, entonces, la manifestación pública ocurrida hace unas semanas sobre la carretera libre a Torreón, en un contexto de represión, no es algo nuevo. Recordemos que los habitantes del ejido Noria de Sabinas y otros centros poblacionales, bloquearon el 8 de septiembre de 2015 la carretera libre Saltillo-Torreón, pero lo de aquella vez sirvió para pactar una reunión con el entonces alcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora Rodríguez, que se realizaría cinco días después de la manifestación. Pero, siguiendo las instrucciones del ex gobernador Rubén Moreira Valdés, el ex presidente municipal no acudió a la cita, lo que posteriormente derivó en la toma simbólica de la alcaldía.

No sólo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sino también la Comisión Nacional del Agua, avalaron el proyecto de obra para construir el Cimari, determinando que cumplía con lo establecido en la normatividad ambiental.

Así pues, es un hecho que los habitantes de los poblados vecinos siguen temiendo por su salud, en tanto, lamentan los daños que experimenta la vegetación y la fauna de la zona a partir de que se instaló el basurero tóxico, sin que autoridad alguna ofrezca una explicación convincente, ni implementen medadas para revertir los daños.

La situación empeora, pues luego que los afectados reportaron desmayos a causa de la inhalación de las sustancias tóxicas que emana el confinamiento, aseguran haber sido amenazados con desaparecerlos si continúan evidenciando dichos hechos.

El de la voz vuelve a recriminar la negligencia institucional, pues ello contribuye a trastocar el bienestar de la población. Por eso es que apoyo todo esfuerzo para evitarlo, como el del diputado federal por Morena, Diego del Bosque, así como del delegado nacional Reyes Flores Hurtado y de la delegada regional Claudia Garza del Toro, con miras a solucionar, de una vez por todas, este serio problema ambiental y de salud.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en apego a lo establecido en los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Congreso del Estado, con el objeto de que sea tramitada con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente...

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO. - Solicítese atentamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, y de nueva cuenta a la secretaría estatal de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, informen sobre los grave daños al medio ambiente que reportan los habitantes de varias poblaciones del municipio de General Cepeda, con motivo de la operación del CIMARI en esa zona, y las medidas que se tomarán para la recuperación de las especies vegetales y animales afectadas como consecuencia de los accidentes derivados del mal funcionamiento de dicho confinamiento de residuos tóxicos.**

**SEGUNDO. - Solicítese de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, así como al secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, inicien estudios para la detección y atención de afecciones a la salud de los habitantes de las comunidades cercanas al CIMARI que opera en el municipio de General Cepeda, como son: Noria de la Sabina, Jalpa, Pilar de Richardson, Kilómetro 64 y San Antonio del Jaral, donde persisten malestares atribuidos al mal manejo del peligroso centro de confinamiento.**

**TERCERO. - Solicítese respetuosamente al Ejecutivo del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dé a conocer el tipo de mecanismos y espacios que se abrirán para establecer comunicación permanente y efectiva con la población afectada, y sus representantes, por el mal funcionamiento del Cimari en el municipio de General Cepeda, con miras a solucionar a la brevedad posible este evidente problema ambiental y de salud pública, con base en la solicitud que se le hizo a través del punto de acuerdo aprobado por esta Soberanía el pasado 6 de febrero.**

**CUARTO. - Solicítese de nueva cuenta a la Comisión Nacional del Agua que, en el marco de sus respectivas facultades y competencias, verifique e informe a esta Soberanía sobre el grado de contaminación que pudieran haber registrado los mantos freáticos, así como la presa El Tulillo y otros cuerpos de agua y afluentes naturales, como consecuencia de las emanaciones gaseosas, líquidas y demás, provenientes del CIMARI que opera irregularmente en el municipio de General Cepeda, y dé a conocer a esta Soberanía las medidas que implementará para revertir la eventual contaminación de estas reservas acuíferas.**

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 04 de marzo de 2019**

 ***“Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**COORDINADOR**

**GRUPO PARLAMENTARIO “PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA”**

**PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA)**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ, CONJUNTAMENTE CON LAS DEMÁS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, “CON OBJETO DE HACER UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, PARA EVITAR EL ROBO A CASA HABITACIÓN EN POBLACIONES DEL MUNICIPIO DE** **MATAMOROS, COAHUILA”.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E.-**

La suscritaDiputada Graciela Fernández Almaraz, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Una de las principales funciones como legisladores, es la de conocer la problemática que aqueja a la sociedad a la cual nos debemos y representamos, poder realizar nuestro trabajo requiere de una interacción constante con nuestros electores; preocupada por mi quehacer legislativo, desde el inicio de mi gestión me he mantenido cercana a la gente del Distrito VII al cual represento.

En días pasados tuve la oportunidad de convivir y platicar con ciudadanos que viven en las poblaciones de los Ejidos El Coyote, El Fénix, Buen Abrigo y Los Ángeles, todos del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza. Con tristeza los vecinos de estas poblaciones me han manifestado que en los últimos meses ha venido incrementándose los robos en sus casas.

Esto me resulta preocupante y alarmante, ya que mis visitas en cada una de estas poblaciones, la constante queja es el incremento del robo a casa habitación, me inquietó la queja de una vecina del Ejido El Coyote a quien han ingresado a robar a su casa en ocho ocasiones en solo este año.

Si bien, los delitos patrimoniales como es el robo, no son considerados de alto impacto como el homicidio o los delitos sexuales, sí causan un menoscabo y debe de dársele el mismo tratamiento en su investigación y persecución. El robo a casa habitación, no solo impacta en el patrimonio de las familias, sino que vulnera la tranquilidad de todo el núcleo familiar. Cuando entran a robar a tu casa, no solo se llevan la televisión, el celular o aquello de valor material, te roban la tranquilidad y la armonía de tu hogar, que es el lugar en el que uno debiera de sentirse seguro.

Es por ello, que subo a esta tribuna, exhortando a todos ustedes a sumarse a este punto de acuerdo, el cual tiene por objeto hacer un llamado a las autoridades estatales y municipales competentes en materia de seguridad pública y de procuración de justicia para que por una parte, se inhiba y termine el robo a casa habitación de las poblaciones del Municipio de Matamoros, Coahuila ya mencionadas y por otra parte, se de celeridad a las carpetas de investigación que se encuentren abiertas y se ejerciten acciones penales a efecto de restaurar la confianza en nuestras autoridades y la tranquilidad de los pobladores de esta región del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO.-** Se solicita al Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila, gire instrucciones a su Policía Municipal, para que se implementen rondines de vigilancia y operativos de presencia en la zona periférica del Ejido El Coyote, El Fénix, Buen Abrigo y Los Ángeles, a fin de evitar robos a casas habitación en dichas comunidades.

**SEGUNDO.-** Se exhorte a la Fiscalía General del Estado, para que gire instrucciones a la Agencia Investigadora del Ministerio Público ubicada en el Ejido El Coyote del Municipio de Matamoros, Coahuila, a fin de que brinde facilidades en la presentación de denuncias, de puntual seguimiento a las denuncias presentadas por los habitantes del Ejido El Coyote, El Fénix, Buen Abrigo y los Ángeles por el delito de robo y se ejerciten las acciones penales correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, procurando una justicia pronta y expedita a las víctimas de estos delitos.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 05 de marzo de 2019**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ**  |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,** **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

 **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |

**PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ, CON MOTIVO DE LAS INVESTIGACIONES EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS QUE HAN INVOLUCRADO A HUMBERTO MOREIRA EN LOS HECHOS YA CONOCIDOS POR TODOS.**

En fecha 19 de enero de 2016, en voz del Grupo Parlamentario que nos representaba entonces, se presentó una proposición con punto de acuerdo, que versaba sobre pedir a la Comisión Especial de la Deuda, de aquellos días, reunirse con los Titulares de la PGR (nombre de aquellos días) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de enterarse de todos los pormenores de la detención de Humberto Moreira en España, y remitir la información recabada al Congreso y a las autoridades locales.

En la exposición de motivos, la proposición refería, entre otras cosas, lo siguiente:

“….Humberto Moreira fue aprehendido en España, y la Audiencia Nacional le imputa la probable comisión de los delitos de Blanqueo de Capitales, Malversación de Caudales Públicos, Cohecho y Organización Criminal entre otros. El arresto obedeció a acciones coordinadas entre autoridades de Estados Unidos y España que detectaron que el ex gobernador estaba triangulando fondos entre diversas empresas fantasmas en México, Estados Unidos y España, siendo el destino final sus cuentas bancarias personales. Si bien se ha mencionado los nombres de al menos tres empresas pantalla en Saltillo, Coahuila, se cree que pudiera tratarse de más empresas, que cumplen o cumplían la función de mover dinero y lavar dinero con la intención de burlar a las autoridades y hacer llegar estos recursos a las cuentas de Humberto Moreira.

Las autoridades norteamericanas sostienen desde el año 2012 que los recursos detectados a Javier Villarreal, Jorge Torres López, a sus socios comerciales y, ahora a Humberto Moreira, provienen del erario Coahuilense. Sospechas que se vieron fortalecidas con las declaraciones del empresario Rolando González Treviño, detenido en Estados Unidos, quien de inmediato decidió colaborar con las autoridades a fin de obtener beneficios legales….” Fin de la cita textual.

Desde luego, la proposición, a pesar de ser votada a favor no fue cumplida.

La detención en España del profesor Humberto Moreira, permitió conocer entre otras cosas, que mintió cuando estaba cursando una maestría en el mencionado país, y al ser cuestionado por los medios sobre los recursos para financiar sus estudios y su estadía, señaló que era gracias a los “ahorros de toda su vida y a una beca magisterial”. Cabe mencionar que nunca dijo tener negocios o empresas ni ser socio de nadie. Después, al ser cuestionado sobre la legalidad de los ingresos que había estado transfiriendo a España, salió a reconocer que “eran de sus empresas”.

Antes bien, diversos medios de comunicación, dieron a conocer cómo, de forma apresurada y en total secreto, la Procuraduría General de Justicia del Estado, había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Humberto Moreira, por los delitos de fraude y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en fecha 15 de mayo de 2015. Esto a pesar de las declaraciones del empresario Rolando González Treviño, dadas ante una Corte de Texas, donde involucraba a Humberto en operaciones con dinero del erario coahuilense para la compra de medios de comunicación.

Ahora, en el presente, semanas atrás, las autoridades españolas han decidido reabrir la investigación contra Humberto Moreira; la Fiscalía Anticorrupción de España considera que existen elementos para relacionar a Humberto con la indebida apropiación de tres mil millones de pesos del erario coahuilense, además de mantener vínculos con el crimen organizado durante su etapa como gobernador del estado. Esto en base a nuevos testimonios recabados por autoridades texanas que trabajan en coordinación con las españolas. Muy destacable resulta el saber que esta vez uno de los testigos es nada menos que Héctor Javier Villarreal, ex Secretario de del Servicio de Administración Tributaria del periodo de Humberto como gobernador del estado.

Si bien la constante en Coahuila es que las autoridades locales se niegan a investigar al profesor Moreira, a Jorge Torres y a no avanzar nada en las investigaciones contra Javier Villarreal y en torno a la mega deuda, se debe resaltar lo que es una realidad:

Humberto jamás pudo justificar su NO participación en la megadeuda coahuilense, ni siquiera con el video mal montado que realizara con otro involucrado, para tratar de demostrar su inocencia, video que nadie le creyó, vaya ni los propios priistas, quienes optaron por guardar silencio.

Cuando dejó la presidencia del CEN del PRI, sus correligionarios señalaron que regresaría al cargo apenas demostrara su inocencia en la megadeuda. Y terminó de candidato a diputado local por el Partido Joven. Es decir, jamás regresó.

Por otra parte, es imposible, en sentido lógico, que la contratación de créditos falsos se diera a sus espaldas, si, como dijeron los diputados que aprobaron la megadeuda, y como lo dijo irresponsablemente el Auditor Superior del estado, “todo se gastó en inversiones públicas productivas”. ¿Cómo es que un gobierno obtiene 18 mil millones en créditos ilegales no autorizados por el Congreso, se los gasta en inversiones productivas, pero el gobernador no sabe nada? Es un argumento que ofende la inteligencia de cualquier persona.

Y, por cierto, a la fecha, todos los coahuilenses seguimos esperando que nos entreguen la lista, los montos, y el detalle preciso de todas esas inversiones públicas productivas en las que se gastaron 36 mil millones de pesos…sin que el ex gobernador se enterara. Aun hoy, ni Armando Planta, ni todos los secretarios de finanzas que han pasado por el cargo desde la consumación de la megadeuda, han podido brindarnos esa información.

En otra ocasión, el ex secretario de gobierno, Armando Luna Canales, dijo que el dinero de Javier Villarreal no era del erario coahuilense, dejando entrever que entonces era del crimen organizado, y que por eso el Estado no intentaba recuperarlo; de todo esto hay constancia en medios de comunicación.

Y le podemos seguir con muchos otros razonamientos que dejan muy en claro que algo muy grave sucedió en Coahuila en la era de Humberto, que las personas involucradas de ninguna manera son inocentes.

Cerremos con lo más increíble; ya mencionamos que a la fecha nadie, ni Armando Plata, quien auditó la cuentas de Humberto, ha podido demostrar en que se gastó cada centavo del pasivo.

Lamentamos que las autoridades locales, a ocho años de consumado el mayor fraude financiero de nuestra historia como entidad federativa, solo puedan ofrecerle a los coahuilenses lo siguiente:

I.- Ni un solo detenido y castigado en relación a la megadeuda.

II.- Ni un solo detenido y castigado, aquí en Coahuila, en relación al caso de Javier Villarreal y Jorge Torres en Texas.

III.- Una megadeuda que no solo no ha disminuido ni un ápice, sino que además, ha permitido perder más de 23 mil millones de pesos de pago de intereses a los bancos. Virtualmente un regalo, ya que debemos más que en 2011.

IV.- Los gobiernos que han tenido que reestructurar la mega deuda varias veces, con terribles consecuencias financieras, todas conocidas: no disminución del pasivo, ampliación del plazo final para pagar la deuda, ahorros ridículos y sin sentido alguno, más y más intereses a pagar, reducción de los abonos al capital, entre otras.

V.- Denuncias penales en relación a la megadeuda que la Fiscalía General no ha podido resolver en definitiva luego de siete años transcurridos de la feche en que se presentaron las primeras.

VI.- Una Auditoría Superior del Estado que ha sido un fracaso total en el combate a la corrupción, y para muestra un botón: ¿Cuántos servidores públicos estatales, municipales y de organismos descentralizados, autónomos y paraestatales o paramunicipales han sido sancionados penalmente en los años que Armando Plata lleva al frente del organismo? ¿Cuántos están en la cárcel….o estuvieron? ¿A cuántos se les obligo a restituir el dinero robado al erario? Ustedes compañeras y compañeros y nosotros sabemos la respuesta, los números no mienten; a menos claro, que algún ocurrente pretenda decir que no hay castigados en toda la era de Armando Plata porque “no existe corrupción en Coahuila” o es muy baja su presencia. Adelante el valiente que pretenda esgrimir tal “argumento”; y que espere a ver como los coahuilenses se destornillan de risa.

Hemos tenido que esperar a que autoridades extranjeras, de España y Estados Unidos, hagan el trabajo que le correspondía hacer a las autoridades federales y estatales.

Hemos tenido que ver cómo Humberto Moreira abandonó su cómoda vida en España en forma intempestiva, y además, no se atreve a poner un pie en Estados Unidos, al tiempo que él y las autoridades que debieran investigarlo y procesarlo hacen como si nada sucediera, como que si todo fuese un “mal entendido”, cuando a todos les queda y nos queda claro que la realidad es otra.

Seguimos esperando justicia, seguimos esperando que las autoridades del estado se refieran a Humberto Moreira con valor y determinación, y no que le den trato de tema tabú a su caso y a su nombre. Esperamos aun que la Fiscalía General concluya las averiguaciones previas de la megadeuda, que los responsables sean castigados, que los daños al erario sean resarcidos y que la Megadeuda deje de ser un lastre de terribles consecuencias para Coahuila, como lo ha sido todos estos años.

ATENTAMENTE

GRUPO PARLAMENTARIO DEL P.A.N.

SALTILLO. COAHUILA A 5 DE MARZO DE 2019.

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**IP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO**

**DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES**

**HIOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA EL POSICIONAMIENTO CON MOTIVO DE LAS INVESTIGACIONES EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS QUE HAN INVOLUCRADO A HUMBERTO MOREIRA EN LOS HECHOS YA CONOCIDOS POR TODOS**

1. Síntesis del informe y de las recomendaciones en materia de justicia cotidiana, disponible en [*https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/90289/Informe\_Justicia\_Cotidiana\_-\_CIDE.pdf*](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/90289/Informe_Justicia_Cotidiana_-_CIDE.pdf) p.6 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Idem,* p. 16. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibidem* nota 1. P. 27. [↑](#footnote-ref-3)